

Correo Argentino Suc. 43 (B)	FRANQUEO A PAGAR Cuenta Nº 420

REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

66ª REUNIÓN — 26ª SESIÓN ORDINARIA — 22/23 DE DICIEMBRE DE 1993

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
doctor EDUARDO MENEM,

del señor vicepresidente del Honorable Senado, don ORALDO N. BRITOS,  
del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, doctor CONRADO H. STORANI,  
del señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, doctor JUAN C. OYARZUN,  
del señor presidente de la Comisión de Acuerdos, doctor DEOLINDO F. BITTEL  
y de la señora presidenta de la Comisión de Educación,  
señora OLIJELA DEL VALLE RIVAS

Secretario: doctor EDGARDO RENÉ PIUZZI

Prosecretarios: señor JUAN JOSÉ CANALS y doctor DONALDO ANTONIO DIB

### PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.  
ALASINO, Augusto  
AVELÍN, Alfredo  
BITTEL, Deolindo F.  
BORDÓN, José O.  
BRANDA, Ricardo A.  
BRAVO, Leopoldo  
BRITOS, Oraldo N.  
CABANA, Fernando V.  
CAFIERO, Antonio F.  
CENDOYA, Jorge J.  
COSTANZO, Remo J.  
DE LA RÚA, Fernando  
FADEL, Mario N.  
FIGUEROA, José O.  
GÉNOUD, José  
HUMADA, Julio C.  
JUÁREZ, Carlos A.  
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.  
LEÓN, Luis A.  
LOSADA, Mario A.  
LUDUEÑA, Felipe E.  
MAC KARTHY, César  
MARTÍNEZ, Daniel E.

MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.  
MASSAT, Jorge  
MAZZUCCO, Faustino M.  
MENEM, Eduardo  
MIRANDA, Julio  
MOLINA, Pedro E.  
OYARZÚN, Juan C.  
PEÑA de LÓPEZ, Ana  
RIVAS, Olijela del Valle  
RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto J.  
ROMERO, Juan C.  
ROMERO FERIS, José A.  
RUBEO, Luis  
SÁNCHEZ, Libardo N.  
SAN MILLÁN, Julio A.  
SAPAG, Felipe  
SNOPEK, Guillermo E.  
SOLANA, Jorge D.  
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito  
STORANI, Conrado H.  
VACA, Eduardo P.  
VERNA, Carlos A.  
VILLARROEL, Pedro G.

AUSENTE, POR ENFERMEDAD:

OTERO, Edison

- V. González en el septuagésimo aniversario de su desaparición. (S.-1.628/93.) (Pág. 5130.)
- LXI. Proyecto de comunicación del señor senador Cafiero por el que se solicita un subsidio para la Asociación Amigos del Suelo de la Ciudad de Buenos Aires. (S.-1.629/93.) (Pág. 5131.)
- LXII. Proyecto de declaración del señor senador Solari Yrigoyen por el que se alerta sobre el peligro que implica la no renovación de la prohibición de pesca comercial, para la conservación de los recursos pesqueros del Atlántico Sur. (S.-1.630/93.) (Pág. 5131.)
- LXIII. Proyecto de ley del mismo señor senador sobre radicación de ciudadanos argentinos en zonas de seguridad de fronteras. (S.-1.631/93.) A pedido del señor senador Solana se resuelve girar también el proyecto a la Comisión de Población y Desarrollo. (Pág. 5132.)
- LXIV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la anulación de cesantías de obreros ferroviarios del ramal Ingeniero Jacobacci-Esquel, en Río Negro y Chubut. (S.-1.632/93.) (Pág. 5133.)
3. Lectura y aprobación del plan de labor parlamentaria para la sesión de la fecha. (Pág. 5135.)
4. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, al doctor Carlos Alberto Ferreiro Pella. (P.E.444/93.) Se aprueba. (Pág. 5135.)
5. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Santa Fe, al doctor Edgardo Adrián Bello. (P.E.-504/93.) Se aprueba. (Pág. 5136.)
6. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén al doctor Eugenio Krom. (P.E.-461/93.) Se aprueba. (Pág. 5136.)
7. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa al doctor Luis José Vivas. (P.E.-533/93.) Se aprueba. (Pág. 5137.)
8. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, al doctor Julián Francisco Frearza. (P.E.-531/93.) Se aprueba. (Pág. 5137.)
9. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez federal de primera instancia en lo Criminal Correccional de Posadas al doctor Ramón Claudio Chávez. (P.E.-532/93.) Se aprueba. (Pág. 5138.)
10. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez nacional de primera instancia en lo Civil de la Capital Federal a la doctora Roxana Josefina del Valle Rogovsky Tapia. (P.E.-303/93.) Se aprueba. (Pág. 5138.)
11. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal al doctor Héctor Carlos Acuña. (P.E.-800/93.) Se aprueba. (Pág. 5139.)
12. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 59 ley 20.957) a don Pablo Emilio Barone. (P.E.-386/93.) Se aprueba. (Pág. 5139.)
13. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 59 ley 20.957) a don Mario Miguel. (P.E.-457/93.) Se aprueba. (Pág. 5140.)
14. Consideración del proyecto de comunicación del señor senador Ludueña por el que se rinde homenaje a la figura del doctor Joaquín V. González. (S.-1.628/93.) Se aprueba como proyecto de resolución. (Pág. 5140.)
15. Consideración de los dictámenes en mayoría y en minoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Pesca en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo sobre las Relaciones en Materia de Pesca Marítima entre la República Argentina y la Comunidad Europea inicialado en Buenos Aires el 30 de noviembre de 1992. (P.E.-882/93.) Se aprueba el dictamen en mayoría. (Pág. 5141.)
16. Manifestaciones de varios señores senadores con relación al tratamiento de diversos proyectos. (Página 5164.)
17. A moción del señor senador Romero se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la Co-

misión de Presupuesto y Hacienda, con disidencias parciales, en el proyecto de ley en revisión sobre presupuesto de gastos y cálculo de recursos correspondiente al año 1994. (C.D.-93/93.) (Pág. 5165.)

18. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Asistencia Social y Salud Pública en el proyecto de ley en revisión por el que se sustituye el artículo 11 de la ley 22.431, respecto a establecer la obligatoriedad de otorgar en concesión espacios para pequeños comercios en organismos estatales a discapacitados. (C.D.-50/93.) (Página 5268.)

19. Consideración de la moción formulada por el señor senador Solana para pasar a cuarto intermedio hasta la hora 10. Se aprueba. (Pág. 5269.)

20. Apéndice:

I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 5269.)

II. Inserciones. (Pág. 5270.)

—En Buenos Aires, a las 18 y 26 del miércoles 22 de diciembre de 1993:

Sr. Presidente (Menem). — La sesión está abierta.

## I

### IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Menem). — Invito al señor senador por La Pampa doctor Enrique J. M. Martínez Almudevar a izar la bandera, y a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Martínez Almudevar procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

## 2

### ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se va a dar cuenta de los asuntos entrados desde la última sesión, cuya nómina se hizo llegar oportunamente a los señores senadores. En esta instancia podrán formular las peticiones que estimen pertinentes, a medida que por Secretaría Parlamentaria se vayan enunciando dichos asuntos.

—La nómina de los asuntos entrados, con las observaciones formuladas, es la siguiente:

## I

### Comunicaciones de la Presidencia

Decreto del 26 de noviembre de 1993 por el que se autoriza al señor senador Vaca para viajar a Asunción (Paraguay) desde el 27 al 29 de noviembre, inclusive, para asistir al Seminario Internacional sobre Acuerdos Políticos para la Gobernabilidad en América latina. (D.P.-592/93.) (A sus antecedentes.)

## II

Acuerdo para la designación del señor Eduardo R. Ablín como ministro plenipotenciario de segunda clase.

Solicitud. — Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1993.

Al Honorable Senado de la Nación.

Me dirijo a vuestra honorabilidad a los efectos de solicitar el acuerdo para nombrar al señor don Eduardo Raúl Ablín (MI 10.133.702), en el cargo de ministro plenipotenciario de segunda clase del cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación, a partir del 1º de julio de 1994. Dejo constancia que el mencionado funcionario revistaba como ministro consejero económico y comercial del Servicio Económico y Comercial Exterior de la Nación y el presente acuerdo, que no implica una promoción, se solicita en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la ley 24.190.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.  
Mensaje 2.599

CARLOS S. MENEM.  
Guido Di Tella.

—A la Comisión de Acuerdos.

## III

Acuerdo para la designación del doctor Guillermo A. Fernando López como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Solicitud. — Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1993.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al señor doctor Guillermo Alberto Fernando López (LE 4.335.039).

Dios guarde a vuestra honorabilidad.  
Mensaje 2.602

CARLOS S. MENEM.  
Jorge L. Maiorano.

—A la Comisión de Acuerdos.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Señor presidente: por tercer año consecutivo vamos a aprobar en término el proyecto de ley de presupuesto de la administración general, es decir que lo sancionaremos con fecha anterior al comienzo de su vigencia. Y también por tercer año consecutivo vamos a tratar un proyecto de ley de presupuesto cuyas cuentas están equilibradas. Además, el presupuesto para 1994 tiene aun un mayor equilibrio ya que no necesita ningún tipo de financiamiento, hecho éste que sí existía con relación a los presupuestos de años anteriores, aunque en mínima proporción.

Esto indica, entre otras cosas, la disciplina presupuestaria fiscal que estamos teniendo los argentinos y que es un requisito sustancial para establecer las sólidas bases de la estabilidad y el crecimiento.

Sin duda que no sólo el presupuesto sostiene esta disciplina sino que también lo hacen otras leyes que ha sancionado este Congreso, como la ley de convertibilidad, la carta orgánica del Banco Central o la ley de administración financiera. Además, se cumple con la ley federal de educación y con los pactos fiscales entre la Nación y las provincias. Con respecto a la ley federal de educación, debemos decir que se cumple en términos que van más allá de lo que la propia norma establecía, que era incrementar en un 20 por ciento en cada ejercicio el financiamiento de la educación.

Debemos recordar también que a partir del año próximo corresponde que tomemos la decisión política de ejercer la verdadera función que tiene el Congreso, que no es sólo aprobar el presupuesto sino controlar su ejecución. Entendemos que luego de este ejercicio y dadas las características que tiene su ejecución, podremos —el año próximo— cumplir ese rol de ser los que controlemos el empleo y la aplicación de los fondos que por esta ley votamos.

Deseo manifestar que el presupuesto tiene cierta rigidez y la estructura en marcha, tanto de la planta de personal cuanto de los bienes muebles, inmuebles y de uso y gastos fijos, consumen un 70 por ciento del presupuesto actual, lo cual explica que sea muy poco el porcentaje que queda para la decisión tanto en la remisión como en el tratamiento por parte del Poder Legislativo.

Este proyecto de ley de presupuesto continúa la política económica que habla de la estabilidad y la disciplina fiscal como un camino para alcan-

zar otros fines muchos más importantes. Estos objetivos que expresa el presupuesto contemplan la consolidación de la estabilidad monetaria cumpliendo con la ley de convertibilidad, el equilibrio fiscal ya mencionado, la desregulación, la apertura económica y la competencia de los mercados. También debemos mencionar el afianzamiento del proceso de crecimiento económico intentando el aumento del ahorro, de la inversión, de las exportaciones y la profundización de la integración comercial y financiera con los países vecinos y los otros mercados del mundo.

Obviamente se planea la promoción de mayores niveles de empleo y de una mejor distribución del ingreso luego de la etapa de estabilidad y de cambio en la política tributaria, en la legislación laboral. Debemos mencionar el incremento de la inversión pública, sobre todo con finalidad social, para posibilitar el crecimiento de la economía.

Tanto la reforma del Estado como la desregulación, la apertura comercial externa, la disminución de la inflación y de la incertidumbre a través de la reducción del costo del capital, están orientadas a alcanzar el crecimiento económico y la mejora de las condiciones de vida de la población.

Las proyecciones macroeconómicas para 1994, que se ubican en el contexto general en que se desenvolverá la economía, marcan la consolidación de las políticas en marcha para el sector público, siempre dentro del marco —como dijimos— del equilibrio fiscal, la convertibilidad y la estabilidad del tipo de cambio.

En cuanto al Producto Bruto Interno se proyecta un aumento del orden del 6,5 por ciento en términos reales, que llega a superar el monto de los 285 mil millones de pesos, con lo que se conseguirá el cuarto año consecutivo de crecimiento económico reflejado —justamente— en el aumento del Producto Bruto Interno.

La notable baja en las tasas de inflación permite prever para el próximo año un nuevo avance en el proceso tendiente a alinear los precios internos con los precios internacionales de los países industrializados. Por lo tanto, para 1994 se estima un índice de precios combinado —es decir, el que surge de la ponderación del precio al consumidor y al mayorista— de un 4 por ciento respecto del presente año.

En cuanto al consumo, se estima un crecimiento del orden del 4,7 por ciento y se prevé que la inversión en términos reales aumentará en un 12,2 por ciento.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Oraldo N. Britos.

Sr. Romero. — Por lo tanto, si tuviéramos en cuenta el coeficiente de inversión respecto del producto bruto interno, pasará del 14 por ciento registrado en 1990 a casi el 19 por ciento para el próximo ejercicio —el del presente año es del 18 por ciento.

Con relación al sector externo se proyecta un déficit del balance comercial —esto es, referido a la diferencia entre importaciones y exportaciones— que, si bien existirá, continuará disminuyendo sobre todo respecto del producto bruto. El pronóstico indica para las exportaciones unos 14.437 millones y para la importación 16.252 millones. De esta manera, el déficit equivalente al 1,2 por ciento del producto bruto interno correspondiente al ejercicio 1992 se reduce al 0,6 por ciento en el presupuesto para 1994.

El déficit de la cuenta corriente —que contempla los servicios reales y los financieros— será del 1,7 por ciento del producto bruto interno.

Se prevé un proceso de elevado ingreso de capitales extranjeros y la repatriación de capitales internos iniciada en 1991, que continuará el año próximo.

Se espera un incremento del ahorro interno sobre todo por la aplicación de la Ley de Reforma Previsional. También se da un resultado positivo en la cuenta capital del balance de pagos, lo que compensará en 1994 el déficit de la cuenta corriente más la variación de las reservas internacionales.

Respecto de las reservas internacionales, hay que destacar la evolución operada desde 1989, cuando no llegaban a los 3.000 millones de dólares, hasta los 15.000 millones que hoy se estiman por tal concepto.

Por otra parte, el sistema financiero ha aumentado su capacidad prestable con un crecimiento gradual de la monetización, a pesar de lo baja que aún resulta respecto de su relación con el producto bruto interno.

A su vez, si bien la tasa de interés ha ido bajando, todavía no ha alcanzado los niveles que todos deseamos.

Creo que es necesario complementar este informe macroeconómico con algunos aspectos críticos que nos muestran ciertos índices. La bonanza estadística no indica, necesariamente, una ecuanimidad en la aplicación o distribución de los recursos. Las estadísticas nos dan una visión global, general, obviamente positiva, como estamos advirtiendo.

Pero también sabemos que el producto creció aunque no de una manera equilibrada; tal crecimiento no fue regional ni sectorialmente equilibrado.

Por ejemplo, el sector agropecuario pasó una situación muy difícil a través de la historia de los últimos años a raíz, principalmente, de las dificultades del mercado internacional y también por las deficiencias estructurales propias de nuestro país. Esto último requiere todavía de un mayor esfuerzo para lograr la reconversión, el redimensionamiento y el apoyo crediticio que el país todavía no ha generado en cantidades, plazos y costos accesibles.

La industria enfrenta hoy el camino ineludible de la competencia pero, en particular, las pequeñas y medianas empresas tropiezan con los incrementos en los costos de los servicios, con maniobras de "dúmping", con asimetrías en los costos. Además, como todos sabemos, existe un difícil y costoso acceso a los créditos, en especial a los créditos para equipamiento.

Desde el punto de vista regional es tal vez más palpable ese desequilibrio; así lo viven las provincias de la Patagonia o del Noroeste, que arrastran décadas de una falta de acciones sostenidas para dotarlas de una infraestructura económica permanente. Esto se produce, precisamente, en el momento en que otros países aumentan su protección a sus propias industrias, lo cual desalienta aún más nuestras posibilidades de exportación.

Si bien es cierto que el aumento de la actividad económica ha producido un incremento estadístico del orden de los 500 mil puestos de trabajo, también es verdad que la desocupación global ha pasado, sobre todo en el Gran Buenos Aires, del 8,6 por ciento al 10 por ciento. Esto indica que, aun con los nuevos puestos de trabajo, tal incremento es insuficiente para atender la oferta de mano de obra que hay en el mercado.

El sistema financiero, que debería ser el pilar del crecimiento, está demorado en su importante rol a cumplir, es decir, en cuanto a la función de consolidar el crédito. Una situación de arrastre en esta materia es la baja monetización que sufre nuestra economía desde 1989 en adelante. Esto es propio de la etapa de hiperinflación que padecemos, en virtud de la cual la gente obviamente huía de la moneda para refugiarse en otros bienes.

Todavía creemos que la monetización está en una cuarta o quinta parte de lo que debería ser. Es decir que el sistema financiero no cuenta con la necesaria mercadería, por llamar así al dinero, para que los productores cuenten con esos recursos, a costos accesibles, para volcarlos a la producción. Esto reduce naturalmente la capacidad prestable de los bancos. Además, tampoco se puede correr el riesgo de que la política

monetaria a través de la vuelta a la baja de encajes o a la inyección de grandes sumas, haga que retornemos a periodos de inestabilidad en los precios.

Esto se va a ir corrigiendo paulatinamente con el crecimiento económico pero, sin duda, es de suma importancia la solución del aspecto financiero, sobre todo para las zonas alejadas de los centros urbanos. Sabemos que muchos de los créditos promocionados por los bancos no llegan como quisiéramos, con una distribución regional adecuada. Observamos que existe al menos una gran concentración tanto en lo que respecta a la colocación como al otorgamiento de los préstamos financieros. También influye en esto el corto plazo de los depósitos, que se encuentran en un promedio cercano a los treinta días. Este plazo debería extenderse para que se pudieran otorgar préstamos a largo plazo.

También es cierto que muchos bancos —sobre todo los privados— no han asumido una política de riesgo en la financiación de proyectos productivos viables.

Si bien podemos apreciar grandes logros en cuanto a la estabilidad, todavía nos falta un largo camino por recorrer y debe ser una preocupación constante de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, que todos estos beneficios provenientes de la estabilidad faciliten un crecimiento armónico del país entre todas las regiones, especialmente aquellas economías más alejadas y castigadas, que no son precisamente las de las zonas centrales.

Con relación al presupuesto, debemos hacer primero un análisis de los gastos y después de los recursos.

El total de los gastos previstos en la sanción de la Cámara de Diputados es de 39.980 millones de pesos, que se componen de 36.368 millones de gastos corrientes y 3.612 millones de gastos de capital. El gasto total es prácticamente similar al de 1993. Se puede observar una baja del 0,2 por ciento en los gastos corrientes y un aumento del 1,6 por ciento en los gastos de capital.

Una visión rápida de la situación global nos muestra que desde el punto de vista de la naturaleza económica de los gastos se proyecta una disminución de las transferencias del 11 por ciento. Este porcentaje es equivalente a 865 millones de pesos. En ello incide la eliminación de los aportes a empresas del Estado y a las provincias, dentro de los compromisos incluidos en los pactos fiscales. También se produce una importante disminución en los servicios de intereses

de la deuda, que alcanza al 9,4 por ciento, o sea, 305 millones de pesos. Si tenemos en cuenta la disminución en las transferencias y en los servicios de la deuda, tenemos una rebaja de 1.171 millones de pesos.

Desde el punto de vista de la finalidad del gasto, se proyecta una disminución de 14,3 por ciento en gastos de administración, que representan 645 millones de pesos, del 9,4 por ciento en gastos en servicios económicos, o sea 388 millones, y 9 por ciento en gastos derivados de la deuda pública, que significa un monto de 309 millones de pesos.

Por lo tanto, el total de la disminución en estos tres conceptos es de 1.343 millones de pesos. En contrapartida, se produce un incremento del 13,6 por ciento en los gastos destinados a defensa y seguridad, lo que representa un monto de 429 millones de pesos; y del 3,7 por ciento en los servicios sociales, o sea, 910 millones de pesos. Dentro de estos últimos —los servicios sociales— merece destacarse un incremento en las previsiones del gasto con destino a educación y cultura del orden del 20 por ciento, es decir, 408 millones de pesos, y del 1,9 por ciento en seguridad social, lo que equivale a 361 millones de pesos.

Asimismo, podemos observar que la composición del gasto para 1994 tiene la siguiente distribución: administración gubernamental, 9,7 por ciento; servicios de defensa y seguridad, 8,9 por ciento; servicios sociales, 64,2 por ciento; servicios económicos, 9,4 y deuda pública, 7,8.

Se observa claramente una preponderancia de los gastos destinados a los servicios sociales, que totalizan 25.665 millones de pesos, y que comprenden las siguientes funciones: promoción y asistencia social, 4,6 por ciento; seguridad social, 74,2 por ciento; educación y cultura, 9,5 por ciento; ciencia y técnica, 2,2 por ciento; trabajo, 0,3 por ciento; vivienda y urbanismo, 4,6 por ciento, y agua potable y alcantarillado, 0,6 por ciento.

El rubro sobresaliente es el de seguridad social que acabo de mencionar y que abarca el 74 por ciento de estos gastos ya que representa 19 mil millones de pesos, o sea, el 6,7 por ciento del producto bruto interno. Este rubro incluye no sólo las prestaciones a jubilados y pensionados en general sino también las prestaciones previsionales de los regímenes de retiros y pensiones militares, de la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería, los servicios penitenciarios y la policía de los ex territorios, así como el seguro por desempleo y los programas de generación de empleo para personas desocupadas, conocidos como programas intensivos de trabajo o PIT.

Por otro lado, incluye los subsidios a los consumos de agua, energía eléctrica y gas, y las transferencias a las provincias para financiar sus gastos previsionales.

Cabe destacar que si sumamos al gasto nacional en seguridad social lo que insumen los niveles de gobierno provincial y municipal, el total de las erogaciones es del orden de 22 mil millones de pesos, o sea, el 7,7 por ciento del producto bruto interno. Esto demuestra el esfuerzo que la sociedad argentina está realizando en este sentido.

Por otra parte, debe mencionarse que en 1994, a partir del 1º de julio, se pondrá en vigencia el nuevo sistema previsional, momento a partir del cual las administradoras de fondos de pensión comenzarán a recibir los aportes de aquellos que opten por este nuevo sistema de capitalización que se estiman en los dos tercios de los actuales aportantes al sistema de reparto.

En las previsiones presupuestarias está contemplada la incidencia fiscal de la aplicación de la reforma previsional.

Un segundo rubro en importancia por su monto dentro de los gastos por servicios sociales, es el destinado a educación y cultura, por una suma que totaliza los 2.444 millones de pesos. En este punto cabe recordar que las responsabilidades en materia educativa son compartidas entre el nivel nacional y los niveles provinciales y municipales, estando la mayor carga, como todos sabemos, en las provincias y en los municipios.

El total de gastos para educación en 1994 es del 3,75 por ciento del producto bruto interno, lo que significa un monto del orden de los 10.700 millones de pesos; sumado a la inversión del sector privado, esto ubica a nuestro país dentro de los niveles de gastos considerados adecuados para los países desarrollados. Esto no indica una necesaria eficiencia en ese gasto, pero sí que se está haciendo un esfuerzo. Si tomamos en cuenta el producto bruto interno, la cifra es considerable, pero todavía resta mucho para hacer por la eficacia y la eficiencia del gasto educativo.

Uno de los componentes importantes del programa educativo es la acción compensatoria en educación, que es un compromiso asumido por el Estado nacional en el cumplimiento de los artículos 40, 53, inciso e), y 64 de la Ley Federal de Educación, para llevar los beneficios de la educación con parámetros de calidad uniforme a todo el país y asegurar el cumplimiento de la escolaridad básica obligatoria de diez años, de manera de promover la igualdad de oportu-

nidades para vastos sectores carecientes de la población; que se estiman en el 20 por ciento de la población en edad escolar.

De todas maneras, en lo que atañe a la competencia del Estado nacional en materia educativa, luego del proceso de federalización de los niveles primario y secundario la mayor parte del esfuerzo está dirigida al apoyo y financiamiento de las universidades nacionales, a las que el proyecto del Poder Ejecutivo destina un monto de 1.403 millones de pesos, lo que es reforzado por 120 millones en la sanción de la Cámara de Diputados, cosa que nosotros compartimos; se totaliza así un monto de 1.523 millones de pesos, que significa un incremento del 23,5 por ciento con relación al presupuesto para 1993, que a su vez tuvo incremento del 38,7 por ciento respecto del de 1992. Recordemos que la ley establece un incremento del 20 por ciento, y aquí las universidades están obteniendo el 23,5 por ciento. Hay que volver a recordar en este punto que esta importante cifra no indica necesariamente eficiencia en la utilización de esos fondos.

Dentro de los servicios sociales, sigue en importancia la función de promoción y asistencia social, para lo cual se proyecta un monto total de 1.174 millones de pesos. La parte más importante de este gasto, el 81,6 por ciento, está constituida por los aportes a las provincias para el cumplimiento de programas de asistencia social.

Otro componente importante es el programa de solidaridad social, conocido como PROSOL, que procura incorporar a la vida social y económica activa a sectores postergados de la sociedad. La Cámara de Diputados ha incluido un artículo que le asigna un monto específico de 40 millones de pesos, ya que en el proyecto del Poder Ejecutivo lo incluía en un monto global.

En orden de importancia por su monto sigue la función Salud, con una autorización de gastos de 1.037 millones de pesos. Al igual que en el caso de la educación, existe una responsabilidad compartida entre los niveles nacional, provincial y municipal. Se proyecta un gasto conjunto del 3,88 por ciento, o sea un monto cercano a los 11.100 millones de pesos.

En el presupuesto nacional más de la mitad de los gastos de salud, el 57 por ciento, se aplicará al funcionamiento de cuatro hospitales nacionales, hospitales escuelas, servicios de salud de las fuerzas armadas y del Poder Legislativo, transferencias al Hospital Garrahan y obras sociales vinculadas al personal del sector público.

También hay programas especiales, como el programa sida, el de lucha contra el cólera, diversas campañas de vacunación, provisión de drogas o medicamentos y otras campañas relacionadas con la salud infantil.

En los gastos de capital se prevé un monto del orden de los 52 millones de pesos para la terminación y equipamiento de cuatro hospitales en Córdoba, Resistencia, Neuquén y Salta.

En materia de vivienda se mantiene la situación del ejercicio de 1993, en el sentido de que el gasto proyectado se ubica en el 0,04 por ciento del producto bruto, aunque en valores absolutos crece un 5 por ciento respecto del ejercicio anterior. El monto destinado a vivienda se aproxima a los 1.177,5 millones de pesos y el 87 por ciento de este monto es transferido a las provincias en el marco de las leyes 24.049 y 24.061 que, como todos sabemos, modificaron la administración de recursos del FONAVI, transfiriéndolos a las provincias.

Si analizamos el gasto por finalidad tenemos en segundo lugar, por importancia, los gastos para la administración gubernamental, que tiene asignados 3.862,4 millones de pesos, lo que representa el 1,3 por ciento del producto bruto. Esto significa una reducción del gasto del 14,3 por ciento respecto del presupuesto para 1993. Esta finalidad comprende las funciones legislativas, judicial, dirección superior del Estado, relaciones interiores y exteriores, administración fiscal, control de gestión pública e información y estadísticas básicas.

En dicha reducción tiene importante incidencia la disminución de los aportes a las provincias, como consecuencia de los acuerdos firmados entre ellas y el gobierno nacional, permaneciendo el fomento a las economías regionales y las transferencias a la provincia de Tierra del Fuego y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

En este aspecto, la Cámara de Diputados ha asignado 10 millones de pesos al ex Fondo de Desarrollo Regional que, como todos sabemos, se destina a la conclusión de obras iniciadas en otros ejercicios.

La función judicial recibe un importante refuerzo del 23,4 por ciento respecto del presupuesto para 1993. Consiste en financiar especialmente la continuación e instrumentación del sistema de juicios orales y la reconstrucción y remodelación de edificios del Poder Judicial.

En cuanto a servicios económicos, el presupuesto asigna un monto de 3.763,2 millones, que representan el 1,3 por ciento del producto

bruto. El monto es el 9,4 por ciento inferior al de 1993, resultando fundamentalmente de reducciones en materia de energía y de transporte, como consecuencia de la eliminación de aportes a empresas privatizadas.

Una función sobresaliente en este rubro es el transporte, con un monto de 1.508,8 millones de pesos, de los cuales 608,6 conforman el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad, que mantiene a su cargo la construcción, mejora y mantenimiento de toda la red vial no incorporada al sistema de concesión por peaje.

También se incluyen diversos programas para la regulación del transporte fluvial y marítimo, ferroviario y de la actividad portuaria por 104,1 millones de pesos.

Otra función relevante es la relacionada con las áreas de energía, combustible y minería, con una asignación de 1.292,3 millones de pesos. Al respecto, la Comisión Nacional de Energía Atómica concentra 681,1 millones de pesos, con inversiones previstas por 391,5 millones de pesos con destino a la terminación y puesta en operaciones de la central nuclear Atucha II, de la planta de enriquecimiento de uranio y la actualización técnica de la central Atucha I.

Además, esta función incluye programas destinados a la formulación y ejecución de políticas vinculadas con la regulación de la distribución del gas y del mercado eléctrico y con el ámbito de la geología minera, lo cual insumirá en su conjunto 73,3 millones de pesos.

La función agricultura tiene una importante participación en los servicios económicos, proyectándose asignar 352,7 millones de pesos. La acción del Estado en esta área de la actividad económica tiene gran importancia dada la crisis que está viviendo el sector agropecuario, sobre todo las economías regionales.

También debe alentarse y fomentarse la reconversión de la empresa agropecuaria y apoyar la inversión en ese sector, a través de los programas de "formulación de políticas para el sector primario", y el "plan unido de desarrollo social agropecuario". También se contemplan acciones dirigidas al apoyo financiero de las zonas que hayan padecido impactos de carácter climático.

Con relación a las políticas determinadas para las economías regionales, el texto sancionado por la Cámara de Diputados incluye un artículo que dispone la aplicación íntegra de sus recursos al sector de la producción tabacalera, lo que resulta concordante con el proyecto de ley aprobado por el Congreso, promulgado hoy, que restablece el Fondo Especial

del Tabaco. Es de desear que la Cámara de Diputados apruebe prontamente un fondo compensador para otras economías regionales que esta Cámara ha sancionado.

También continuará en funciones en esta área de servicios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con 143,3 millones de presupuesto; el Instituto de Sanidad Animal, con 92,8 millones; el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, con 10,3 millones, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, con 23,7 millones, el Instituto Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal, con 17,5 millones y el Instituto Nacional de Semillas, con 2,9 millones.

En cuanto a la función industria, se proyecta un monto de 195,7 millones de pesos. Este es un sector que está pasando por un profundo procedimiento de transformación y reconversión. Se planean acciones tendientes a lograr la inserción del sector industrial en el sector exportador, la búsqueda de nuevos mercados y un perfil que permita esa integración industrial con los bloques regionales o subregionales. Además se planean acciones que permitan la participación activa de pequeñas y medianas empresas que tradicionalmente otorgan un carácter distintivo que no debe perderse hacia el sector industrial argentino.

En el presente año la Secretaría de Industria y Comercio lanzó una línea de compensación de tasas de interés para la inversión de bienes de capital y para capital de trabajo a través del sistema bancario con preponderante participación del Banco de la Nación Argentina y del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

También debe alentarse políticamente que los beneficios lleguen a todo el país de una manera armónica. Se incluye además la asignación prevista de 32,2 millones de pesos para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Defensa y Seguridad es un rubro que tiene asignados 3.582,1 millones de pesos, que representan el 1,2 por ciento del Producto Bruto Interno. Esto significa un aumento del 13,6 por ciento del gasto con relación al presupuesto anterior.

Esto se distribuye de la siguiente manera: 2.045,9 millones para función Defensa, o sea el 57,1 por ciento; para Seguridad Interior, 1.353,1 millones, o sea el 37,8 por ciento; para el Sistema Penal, 183,1 millones es decir el 5,1 por ciento. El monto de incremento surge de prever 441 millones para la recomposición de las remuneraciones del personal afectado a las funciones de las tres fuerzas armadas, la Policía

Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y el Servicio Penitenciario Federal. Este monto se ve levemente compensado por la privatización que se planea para Fabricaciones Militares.

Dentro del Sistema Penal se invertirán 47,7 millones de pesos en la construcción de nuevas unidades carcelarias con módulos especiales.

Hasta aquí hemos informado los aspectos que hacen a los gastos del presupuesto.

Por último, corresponde analizar los recursos estimados para el próximo ejercicio. En su totalidad alcanzan la suma de 39.980 millones de pesos, equivalente al total de las autorizaciones de gastos proyectados, que significa una presión financiera del orden del 14 por ciento del producto bruto interno por parte del Estado nacional.

Este monto se divide en 38.349 millones —o sea, el 95 por ciento de los recursos corrientes— y en 1.631 millones —o sea, el 4,1 por ciento de recursos de capital.

A su vez, los recursos corrientes se componen de la siguiente manera: 56,9 por ciento de ingresos tributarios, 3 por ciento de ingresos no tributarios, 36 por ciento de contribuciones a la seguridad social y 3,8 por ciento de otros ingresos menores. Los ingresos tributarios han alcanzado niveles históricos muy altos. Para 1994 se espera una recaudación total del 16,5 por ciento del producto bruto interno, cifra realmente alta y alentadora. El IVA alcanzará asimismo el 7,1 por ciento del producto bruto interno, monto que corresponde esperar para un tipo de impuestos como éste siempre que haya una administración tributaria eficiente. El impuesto a las ganancias alcanzará el 2,1 por ciento del producto bruto, lo que significa que si bien el impuesto a la renta logró un mejor nivel que el histórico argentino, todavía está por debajo de lo que podría esperarse. Los aportes y contribuciones a la seguridad social alcanzarán el 4,6 por ciento del producto bruto.

Con estos tres últimos rubros tenemos el 84 por ciento de la recaudación tributaria, lo que indica un rápido crecimiento de su participación en la recaudación total. A esto ha contribuido la simplificación del sistema impositivo, también la política que se ha trazado desde 1989 para avanzar en una más eficiente recaudación y la eliminación de cerca de veinte tributos, siendo de los más importantes aquellos que gravaban derivados del petróleo y gas, el impuesto a los sellos afectado a actividades productivas y los impuestos internos sobre distintos insumos que han sido reducidos.

De esta manera, en poco tiempo la recaudación tributaria provendrá prácticamente de los impuestos al valor agregado, a las ganancias, internos y al comercio exterior.

En la relación con las provincias se consideró que para el conjunto de los gobiernos provinciales se proyecta un gasto total del orden de los 24 mil millones de pesos, o sea, el 60 por ciento del gasto del gobierno nacional.

Podemos apreciar el significativo peso que las finanzas provinciales tienen en los logros de los objetivos de la política económica y en términos del esfuerzo de la comunidad para aportar los recursos necesarios para este financiamiento. De allí que se deba buscar una necesaria coordinación entre las finanzas públicas nacionales y las provinciales y, a su vez, dentro de las provinciales, de las municipales respecto de aquéllas.

Desde fines de 1989 se han encarado distintas iniciativas; desde la época de políticas de subsidios y desgravaciones al pacto fiscal —el primero celebrado el 12 de agosto de 1992 y ratificado por ley 24.130 y el segundo suscrito el 12 de agosto de 1993—, pasando por los convenios de compensaciones y deudas recíprocas y las transferencias de los servicios nacionales de educación, salud y los programas asistenciales contenidos en la ley 24.049.

Con relación a las compensaciones de deudas recíprocas, se han firmado las actas de acuerdo con dieciséis provincias, restando hacerlo todavía con otras siete provincias.

Si bien en el acuerdo del 12 de agosto de 1992 la Nación logró la cooperación de las provincias para el financiamiento de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos a través de la afectación de la masa de recursos coparticipables y la creación de un fondo compensador de los desequilibrios regionales, garantizó a las provincias por el término de un año la disponibilidad de un monto mínimo de 730 millones de pesos mensuales de coparticipación. Lo cierto es que la recaudación no alcanzó este nivel y el gobierno nacional debió girar una suma levemente superior a los mil millones entre setiembre de 1992 y agosto de 1993, así como 525 millones de pesos por el Fondo Compensador. También la Nación transfirió 774 millones de pesos de fondo del FONAVI.

Este acuerdo fue prorrogado hasta el 30 de junio de 1995 por el nuevo acuerdo del 12 de agosto de 1993, elevando la garantía de coparticipación mínima a 745,1 millones de pesos men-

suales a partir del 1º de enero de 1994, la que regirá para aquellas provincias que hayan suscrito este último acuerdo, o sea el Pacto de agosto de 1993, las que se beneficiarán con la suspensión de la retención de los montos excedentes de coparticipación federal que se hayan girado en exceso para cumplir con la garantía mínima de los 725 millones mensuales.

Este acuerdo se ha denominado Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, tiene como propósito la necesaria coordinación de los sistemas tributarios nacionales y provinciales para reducir al mínimo los tributos o cargas que recaen sobre la actividad productiva, reemplazando el impuesto a los ingresos brutos con su efecto de acumulación y piramidación a través de su impacto en todas las etapas de comercialización de los bienes y servicios intermedios por un impuesto que grave la última etapa de la comercialización y derogando los impuestos de sellos y los específicos a la transferencia de combustible, de gas y de electricidad.

Por su parte, la Nación procedió a derogar el impuesto sobre los activos afectados a actividades productivas y se comprometió a disminuir la incidencia impositiva y previsional sobre el costo laboral.

Asimismo, el pacto posibilita la transferencia de las cajas de jubilaciones provinciales al ámbito del sistema nacional de previsión social. Para el año 1992 se había estimado un déficit en las cajas provinciales —inclusive la de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires— del orden de los 767 millones de pesos. Hasta el presente, dieciséis provincias han suscrito este pacto, no obstante lo cual el Poder Ejecutivo confía en que se logre firmar con las restantes provincias en un futuro no muy lejano.

El logro del equilibrio en las finanzas públicas no solamente implica una contribución al logro del equilibrio global de la economía o a evitar la necesidad de cubrir un déficit por el financiamiento a través de la emisión monetaria, lo cual traería una secuela a nivel de precios, sino que también hace posible el cumplimiento de las obligaciones acumuladas en el pasado y una ordenada administración en el presente, con lo cual el país va adquiriendo paulatinamente la confianza externa e interna que permite planificar un futuro mejor, programar inversiones y acceder a los mercados financieros internacionales. Es decir, el logro de un financiamiento genuino integral no sólo sirve al Estado sino que también servirá a la actividad económica en general.

Por último, debo reiterar que el presupuesto prevé una necesidad de financiamiento igual a cero, lo que realmente indica que es un presupuesto de equilibrio, que proyecta una igualdad entre las fuentes y las aplicaciones financieras, fundamentalmente entre el uso del crédito y la amortización de las deudas. Esto significa mantener el endeudamiento del Estado en los actuales niveles.

Por lo expuesto, solicito la oportuna aprobación de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. De la Rúa. — Señor presidente: el Senado considera hoy la importante ley de presupuesto nacional.

Lo primero que debemos plantearnos es el sentido de la ley de presupuesto. ¿La ley de presupuesto constituye la fijación de un tope máximo para el gasto del Estado o es, en cambio, el programa financiero del plan de gobierno? No cabe duda de que es esta última concepción la que debe prevalecer. Sin embargo, este presupuesto está concebido como una determinación del gasto máximo que el Estado puede hacer. Es decir que no surge del contexto del presupuesto que consideramos el sentido de un programa global que asegure la mayor eficacia en el gasto y al mismo tiempo promueva el desarrollo de la economía.

Es cierto que como dice el señor miembro informante, las cifras aparecen equilibradas. Ese equilibrio, sin embargo, proviene de estimaciones quizás optimistas de parte del gobierno que las formula; optimistas en cuanto a la recaudación fiscal que espera y con referencia a la asignación del gasto y el crecimiento del producto bruto interno. Por eso, nos plantea a nosotros la necesidad de formular algunas consideraciones sobre su viabilidad y razonabilidad.

Quiero señalar ante todo que es positivo que el presupuesto se haya presentado en término, porque esto favorece una consideración más amplia y razonada por parte del Poder Legislativo. Pero no se trata sólo de la presentación en término, sino también del nivel de información al que pueden acceder los legisladores. Y siempre debemos manejarnos en el plano de las cifras globales, sin acceder al detalle y al examen preciso que sirva para el control de gestión.

Con este presupuesto se reproduce lo que ha ocurrido con el anterior, que muy poco tiempo después de presentado fue modificado por un

decreto el nivel de gastos, reduciéndoselo, en estimación, en un 10 por ciento.

Por ello, una primera observación nos lleva a preguntarnos hasta qué punto es intención del Poder Ejecutivo cumplir con el presupuesto que apruebe este Congreso, a la luz de la experiencia que nos deja lo ocurrido con el presupuesto de 1993. En ese presupuesto el Poder Ejecutivo propuso un nivel de erogaciones de 39.985 millones de pesos. A poco de aprobado, por un decreto se impulsó un programa de recorte del 10 por ciento en los créditos autorizados del presupuesto. La información publicada por la Secretaría de Hacienda nos hace saber que el 63 por ciento del total de los créditos autorizados por la administración nacional se había consumido en los primeros nueve meses del año.

Está bien que se procure evitar un aumento innecesario en las erogaciones públicas; que se intente mantener el equilibrio presupuestario depués de haber atendido el pago del servicio de la deuda pública y, al mismo tiempo, que se trate de dotar de eficiencia al gasto público mejorando su calidad. Sin embargo, en este presupuesto la mayor concentración del gasto aparece en la administración central, es decir, en el Poder Ejecutivo, y se incrementa el gasto del Ministerio del Interior, asignándole fondos reservados, tema al que voy a referirme luego.

El otro rubro preponderante es el del servicio de la deuda, de donde resulta que contrariamente a los grandes anuncios del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, después del Plan Brady la deuda externa ha crecido en vez de reducirse.

Mencioné los gastos reservados del Ministerio del Interior. Esto constituye una primera violación flagrante de la ley de administración financiera del Estado, que este Congreso aprobó por unanimidad con el apoyo de nuestro sector, porque contribuía a poner orden en las cuentas públicas. Una regla de oro de esta ley era que no debían incorporarse al presupuesto disposiciones de carácter permanente; y sin embargo, eso se hace en el que estamos considerando.

En este caso específico del Ministerio del Interior señalo que viene de la Cámara de Diputados un artículo —el 32— que expresamente crea en el ámbito de ese ministerio una partida de fondos reservados a la que el Congreso no tiene acceso para ejercer el control necesario. Esta mala práctica de los fondos reservados tiene que desaparecer en el país, sobre todo con las inmensas, enormes partidas de que se dispone para su libre asignación sin forma de control alguna. Son miles de millones de pesos

asignados a la discrecionalidad de los funcionarios, que en este caso vienen a incrementarse y aparecen en un nuevo rubro destinados al Ministerio del Interior.

Concentrándome en el análisis del proyecto de ley de presupuesto para 1994, quiero referirme a los supuestos macroeconómicos sobre los que se basa a partir de los cuales ha sido elaborado, en particular el relativo al incremento del Producto Bruto Interno estimado en el 6,5 por ciento y al saldo de la balanza comercial —negativo— que se calcula en sólo 1.815 millones de dólares.

Este déficit de la balanza comercial seguramente será mayor, porque la tendencia es a una disminución de las exportaciones industriales y a un crecimiento de las importaciones por parte de las empresas industriales; importaciones que un estudio realizado sobre empresas que representan el 65 por ciento de las importaciones industriales globales demuestra que en su mayor parte son productos que luego se venden en los mercados y no bienes de capital. A este déficit de la balanza comercial el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos ha querido presentarlo como beneficioso, lo que es algo que nadie puede creer porque en el equilibrio entre las exportaciones y las importaciones —y sobre todo en el superávit— está la posibilidad de desarrollo del país.

Con respecto al incremento del producto bruto interno, el valor proyectado de 6,5 por ciento excede al de la mayoría de las estimaciones privadas que oscilan entre el 4 y el 5 por ciento. Pero más importante es el desvío de la balanza comercial, considerando que el déficit previsto implica una reducción del 40 por ciento respecto de los 3.000 millones de dólares estimados para 1993 por el propio ministro del área, según lo trascendido en los medios de información. Lo cierto es que nada permite entrever cómo se concretará una reducción en este déficit de la balanza comercial para 1994. Y más aún, las proyecciones privadas señalan que se habrá de repetir un valor similar al de 1993.

Si bien el presupuesto que consideramos no implica un mayor nivel de gastos que el del presupuesto de 1993 a nivel agregado, hay diferencias sustanciales cuando se tiene en cuenta la composición del gasto de naturaleza económica en uno y otro presupuestos.

Así, los gastos en remuneraciones tienen previsto un crecimiento del 9,3 por ciento; las compras de bienes y servicios, del 3,2 por ciento; y los gastos de capital, del 1,6 por ciento, para mencionar los rubros más importantes dentro de las erogaciones. Pero a su vez el rubro de

Remuneraciones, en los primeros meses de 1993 tenía un grado de ejecución del 69 por ciento contra un 47 por ciento de compras de bienes y servicios y un 74 por ciento de gastos de capital. Lo que se desprende de este análisis es que los mayores aumentos previstos en el proyecto de ley de presupuesto que consideramos, respecto del anterior, se producen en los rubros en los cuales la ejecución del gasto ha sido la mayor del año en curso.

Inversamente, los aumentos son menores en donde el grado de ejecución ha sido menor. Parecería, entonces, que la política fuera aumentar los créditos presupuestarios en aquellos rubros donde la utilización ha sido mayor y mantenerlos en aquellos otros donde quedó margen sin utilizar. Por eso entiendo que la sociedad debe esperar un mayor nivel de gasto público realizado para 1994 respecto del alcanzado en 1993. El problema es que no se nos informa en cuánto estima el Poder Ejecutivo ese mayor gasto, lo que es imprescindible para establecer las necesidades de recursos financieros.

Desde el punto de vista de los recursos totales, este presupuesto también presenta algunos aspectos llamativos. En efecto, se prevén 47.397 millones de pesos, cifra que es un 14,7 por ciento más elevada que los 41.316 millones de pesos que fuentes privadas estiman para 1993, sobre la base de la información oficial de los primeros once meses de este año.

Quiero recordar que el presupuesto de 1993 preveía, en su momento, una recaudación total de 46.765 millones de pesos, es decir un 28 por ciento más elevada que los 36.555 millones recaudados en 1992, pero que tuvieron un desvío nada menos que del 12 por ciento en relación a la recaudación efectivamente obtenida.

Llama la atención, entonces, el optimismo del Poder Ejecutivo nacional en esta materia. Prevé aumentar un 25 por ciento la recaudación del Impuesto al Valor Agregado con relación al efectivamente obtenido en 1993. Si se considera el aquietamiento que ha tenido la recaudación de este tributo en 1993, con relación al comportamiento del ingreso nominal de la economía, es muy difícil que el año que viene aumente más del 15 por ciento, por lo que parece inalcanzable esa previsión presupuestaria.

En cuanto al impuesto a las ganancias, la recaudación prevista para 1994 significaría un aumento del 44 por ciento respecto de la obtenida en 1993, lo que también parece exagerado.

Pero veamos cómo se compone el financiamiento estimado para este presupuesto. La base principal proviene de la presión fiscal del im-

puesto al valor agregado, que significa aproximadamente 20 mil millones de pesos, frente a los 6 mil millones del impuesto a las ganancias y a los 2.300 millones de pesos de impuestos internos, que recaen exclusivamente sobre los cigarrillos. El impuesto a los combustibles, que ha perdido la importancia que antes tuviera, significa unos 2.300 millones y los derechos de importación y exportación alcanzan los 2.200 millones; por planes de facilidades se estiman 1.300 millones y por otros conceptos, 1.200 millones de pesos. Es decir, un total de 35.300 millones de pesos, lo cual muestra que casi el 60 por ciento proviene del impuesto al valor agregado.

Señor presidente: el impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo, es un impuesto a la gente, a todos los ciudadanos; es un impuesto a los que menos tienen y esto marca un perfil de inequidad en el financiamiento del actual presupuesto.

Es saludable que haya disciplina fiscal pero, en general, lo que se agrava es el consumo más que el capital, y esto lleva a las situaciones difíciles que afrontan vastos sectores de la sociedad.

El problema principal es el de los precios internos relativos gravados con estos impuestos, es decir lo que paga el consumidor. Es cierto que hay estabilidad y esto es muy importante y es fundamental preservarla porque aquel modo de financiamiento del Estado, a través de la emisión monetaria y la inflación, llevó a una situación ruinosa a la economía del país.

La estabilidad es fundamental, pero la cuestión central en la economía es la relación entre precios y salarios, es decir la capacidad adquisitiva del salario frente a la composición de los precios.

Nosotros vivimos una grave distorsión. Muchos rubros registran precios mayores que los de los países desarrollados. Esto ha privado de capacidad adquisitiva al salario, que muestra en los últimos años una fuerte caída en su poder adquisitivo. Es cierto que por ahora la gente prefiere la estabilidad a la capacidad adquisitiva del salario; pero los hechos de Santiago del Estero son un llamado de atención. Es la reacción de la marginalidad y de la pobreza frente al gasto público desmedido, los altos salarios para los dirigentes y las dificultades para sobrevivir de los sectores de menores recursos.

Es decir que no se trata de pensar que sólo la estabilidad por sí mismo resolverá los problemas, que sólo los capitales que vienen y que equilibran el presupuesto resolverán los inconvenientes, porque esos capitales no van hacia la

inversión reproductiva y no están generando bienes exportables que permitan solucionar el déficit de la balanza comercial. Estamos caminando por la cornisa, sobre la base de la ley de convertibilidad que ha puesto freno a la exacerbada demanda de dólares como refugio de los especuladores. Pero la economía tiene que desarrollarse y el objetivo debe ser el desarrollo. En este sentido, el presupuesto debe ser un instrumento que apunte a ese desarrollo mediante una adecuada asignación de recursos, cuidando que la presión fiscal no genere situaciones de inequidad sino que brinde el equilibrio distributivo necesario para que haya un sentido de justicia en la vida del país.

Por otra parte, no podemos dejar de señalar que no es éste el único aspecto en que influye esta norma. Lo que se traduce en el llamado costo argentino influye en la competitividad del país, al limitar la capacidad de participación en el comercio internacional, en la capacidad exportadora.

Este costo argentino está influido por la forma en que se hicieron las privatizaciones, que llevaron a que nuestro país posea los costos más altos en materia de comunicaciones y transportes, que son factores determinantes del costo final de los productos exportables.

Y tampoco es ajeno a esto la crisis de seguridad jurídica por que atravesamos, en la que la reforma constitucional se agrega como un factor distorsionante más.

Por eso, señor presidente, lo que se desprende de este análisis, como ya he dicho, es que los mayores aumentos previstos en el proyecto de presupuesto que consideramos respecto del anterior se producen en los rubros en los cuales la ejecución del gasto ha sido la mayor en el año en curso. Inversamente, donde el grado de ejecución ha sido menor, parecería que la política fuera mantener los créditos presupuestarios. Se trata de aumentarlos en aquellos rubros en que la utilización ha sido mayor y mantenerlos en aquellos otros donde quedó margen sin utilizar.

En materia de ingresos por aportes y contribuciones a seguridad social el optimismo no es menor, ya que la previsión presupuestaria implica 8 por ciento de aumento respecto de la recaudación estimada para este año. Debe tenerse en cuenta que el sistema público de reparto perderá en 1994 los ingresos de los aportes personales de quienes opten por incorporarse al sistema privado de capitalización y los patrimoniales correspondientes a las reducciones anunciadas por el ministro de Economía, que se aplicarán con criterios diferenciales por sector y re-

gión del país, con un costo fiscal estimado en mil millones de pesos, según los funcionarios del Ministerio de Economía.

Si bien puede suponerse que los esfuerzos por combatir la evasión fructificarán gradualmente en 1994, las proyecciones de recaudación son demasiado optimistas. Además, existen modificaciones profundas, como el cómputo de los aportes personales a cuenta del pago del impuesto a las ganancias y la eximición de aportar al sistema integrado de jubilaciones y pensiones sobre salarios mayores a una cifra determinada, cuyo efecto final aunque difícil de cuantificar será una erosión adicional en la percepción total de ingresos.

La preocupación que deja la lectura del proyecto de presupuesto es que al resultar de difícil cumplimiento las metas de recaudación, el Poder Ejecutivo decida recurrir nuevamente al arbitrio de una reducción masiva y generalizada de los créditos presupuestarios, como ocurriera en 1993, criterio que no es en modo alguno eficiente para determinar el destino del gasto público y que, de producirse, significaría una cuota de improvisación y de discrecionalidad. Además, lleva a que la consideración del proyecto de presupuesto por el Congreso sea una ilusión o una quimera. Bastaría con dejar las cosas como están y no tratar el presupuesto para que el gobierno haga lo que quiera porque, en definitiva puede manejarlo a su arbitrio.

Por eso, la ley de administración financiera del Estado que todos votamos tenía un sentido, que hace al ordenamiento de las finanzas públicas, pero que precisa complementarse con el acceso a una información más minuciosa por parte de los legisladores para el seguimiento cotidiano de la utilización de las partidas y la asignación del gasto.

El gasto en acción social y salud se ha reducido, seguramente, porque las partidas del FONAVI fueron trasladadas a las provincias, pero si observamos la composición del gasto en lo que se ha ejecutado nos encontramos con que la mayor parte se ha utilizado en la capacitación del mismo personal del Estado, en vez de destinarlo al beneficio de la gente. Además, el gasto ha bajado en la lucha contra las enfermedades endémicas, como el Mal de Chagas, el cólera y otros, donde las partidas previstas no se han ejecutado cabalmente. Es decir, hay una mala atención de la salud de la población en estos aspectos fundamentales.

Sí, hay un aumento previsto para salud, para atender, como dijo el señor miembro informante, algunos hospitales. Pero aquí lo que importa, más que estos números que poco significan,

es la calidad de la gestión, lo que se haga con el gasto autorizado y que no se considere esto como una autorización de un tope máximo para gastar lo que se quiera, sino como un programa de gobierno del cual participa el Congreso al sancionar la ley de presupuesto.

Este presupuesto no implica modificaciones en el rumbo de la economía, en todo caso, se va a profundizar el error estratégico de 1993. Esta es una estrategia que permite gozar de una transitoria sensación de euforia en la actividad económica por el crecimiento del gasto interno, si bien éste se distribuye de una forma muy heterogénea entre los distintos sectores y regiones del país, mientras duran las condiciones favorables de los mercados financieros internacionales que inducen el ingreso de capitales que alimentan el aumento de la demanda. Pero esta particular situación, tarde o temprano se disipará; tal vez no en 1994 pero sí en un futuro mediato.

Asimismo, aquí quiero llamar la atención sobre el grado de endeudamiento público y privado en que se encuentra nuestro país: 68 mil millones el sector público y 30 mil millones el sector privado. Este endeudamiento en dólares se produce al amparo de la convertibilidad pero va configurando una situación de alto riesgo que es necesario prevenir porque si esta expansión internacional, este flujo de capitales que mayormente viene al sector financiero y no al productivo, se reduce, los capitales retornarán a sus países de origen y la tasa de interés aumentará, la demanda interna no tendrá financiamiento y otro tipo de recesión —ahora de carácter generalizado— podrá asentarse sobre la economía argentina. En ese momento quedará en evidencia la diferencia entre haber optado por un diseño anticíclico en vez de uno procíclico, según dicen los técnicos, desde el punto de vista fiscal y también monetario.

Los países que han elegido la primera opción, anticíclica, podrán enfrentar la recesión nuevamente con una política anticíclica. Será la hora de combinar una reducción del presupuesto impositivo con un aumento del gasto público para inyectar oxígeno en la economía en recesión, sin que ello implique abandonar criterios de austeridad, incurrir en déficit o apelar al impuesto inflacionario. Se tratará más bien de aprovechar los recursos obtenidos a partir de años de fuerte superávit fiscal en la fase expansiva del ciclo económico internacional, a efectos de atemperar el *shock* externo.

En cambio, una política fiscal procíclica impide la acumulación de la masa de recursos necesarios para realizar esta intervención, ya que ella

es utilizada para mantener exacerbada la demanda. La consecuencia, entonces, es que cuando la coyuntura internacional se modifica, la economía debe ajustarse sin amortiguador alguno al nuevo escenario mundial, con consecuencias notablemente más traumáticas.

La impresión que deja la política fiscal diseñada por el Poder Ejecutivo, y de la cual el proyecto de presupuesto para 1994 es una prueba más, es que se persiste en una estrategia procíclica, probablemente más redituable en el corto plazo para los objetivos globales del gobierno.

Espero que no haya que arrepentirse por esta elección, porque, de ser así, el costo caerá sobre las espaldas de todos los argentinos: ya no habrá empresas públicas que vender, joyas de la abuela que enajenar. Ahora se acude al sistema previsional para crear un mercado de capitales a costa de los jubilados, que quedarán con sus haberes congelados. Pero después, ¿qué? Porque los recursos se agotan, la presión fiscal llega a su límite, y, si la economía no se reactiva de un modo que apunte al aumento de las exportaciones y nos inserte en los mercados mundiales, con una incorporación de tecnología que nos modernice y con un sistema educativo realmente mejorado y modernizado, entonces el futuro será verdaderamente difícil.

No queremos ser agoreros, sino reflexionar sobre esto, porque a partir de una realidad que llena de optimismo a la gente, a partir de la estabilidad, a partir de los recursos de que se ha dispuesto por la privatización de empresas públicas, es necesario prever el futuro.

A propósito de la educación, quiero señalar que aquí no se está cumpliendo como se debe con la ley federal de educación. En primer lugar, en lo que atañe a las universidades argentinas, se prevé en el artículo 26 destinarles una suma de 1.396 millones. El artículo 44 agrega 120 millones. La Ley Federal de Educación establece en su artículo 61 que a partir de 1993 la inversión en educación se debe incrementar como mínimo en un 20 por ciento anual, o un 50 por ciento en base al producto bruto interno. En 1992 la educación universitaria ocupaba el 0,6 por ciento del producto bruto interno, por lo que, según el artículo 61 de la Ley Federal de Educación, debería llegar a un 0,9 por ciento del producto bruto interno en cinco años, o sea, un 0,66 por ciento en 1993 y un 0,72 por ciento en 1994. Esto último lleva a una cifra de 2.054 millones de pesos, mientras que el actual presupuesto de 1.516 millones para las universidades no cumple con lo establecido en la Ley Federal de Educación.

El señor senador Cendoya me ha hecho llegar un trabajo de la CONADU, en el que se hacen algunas consideraciones sobre la inversión en educación universitaria que son coincidentes con este análisis, y se señala que, en relación con el producto bruto interno estimado, no se está cumpliendo con los incrementos necesarios según la ley de educación.

Quiero llamar la atención, señor presidente, sobre algunas normas realmente llamativas en este proyecto de ley de presupuesto. Se trata de los artículos 12 y 15, cuyo alcance y objeto no han sido explicados. Quiero leerlos rápidamente para llamar la atención sobre ellos. El artículo 12 dice: "Facúltase a la Secretaría de Hacienda a realizar operaciones de compra y venta de los pasivos del Tesoro nacional, cualquiera sea el instrumento que los exprese, así como de venta de los créditos del mismo contra particulares, bancos centrales y/o entidades financieras oficiales de otros países. Dichas operaciones no estarán alcanzadas por las disposiciones del capítulo VI de las contrataciones, del decreto ley 23.354 del 31 de diciembre de 1956 ratificado por la ley 14.467. Para la fijación de los precios de las operaciones se deberán tomar en cuenta los valores existentes en los mercados y utilizar los mecanismos usuales en los mismos, pudiendo además emplear entidades ad hoc para llevar a cabo este tipo de operaciones.

"Podrá disponer asimismo que en el proceso de realización de dichas operaciones se rescate deuda pública interna y/o externa o se admitan títulos de la deuda pública emitidos por otros países.

"Los instrumentos de crédito público que se adquieran mediante estas operaciones o por venta de activos, podrán mantenerse en cartera a fin de poder utilizarlos en operaciones de paso, opciones, conversiones y cualquier otro tipo de operación habitual en los mercados. En este caso deberá mencionarse, específicamente, esta situación al disponerse cada transacción."

Uno se pregunta qué tiene que ver esto con la ley de presupuesto. ¿Es para llegar a un financiamiento? ¿Es para autorizar un movimiento financiero del Estado? Esto viola la ley de administración financiera porque incorpora una norma permanente en la ley de presupuesto que era ajena a ello.

El artículo 15 dice lo siguiente: "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a colocar las disponibilidades del Tesoro nacional y las correspondientes a las instituciones de la seguridad social, en cuentas remuneradas del país o del ex-

terior, o en la adquisición de títulos públicos o valores locales e internacionales de reconocida solvencia..." Y finaliza de la siguiente manera: "El Poder Ejecutivo nacional dictará las normas reglamentarias del presente artículo." Y vale la misma consideración: ¿cuál es el sentido de esta norma? ¿A qué quieren llegar con esto? Porque no está previsto, ni se sugiere allí, qué ingresos se generarán para que ello tenga sentido en función de la ley de presupuesto. Por ello, la ley de administración financiera, aprobada por unanimidad, dedica cuarenta y cuatro artículos de su título II al presupuesto de la Nación, y establece en su artículo 20 que en la ley de presupuesto no se pueden incluir normativas permanentes, modificar leyes y otras cuantas reglas más. En el presupuesto sólo se pueden establecer los gastos, recursos y alguna normativa que tenga que ver con el desempeño del presupuesto dentro del año fiscal.

Esto ha sido ignorado, lo cual significa que, si bien el presupuesto ha sido presentado en término —y en ello se ha mejorado— no se ha mejorado en su presentación, respecto del contenido.

Por ello, esto pone en duda la vehemencia que tiene el gobierno en cuanto al cumplimiento de esta ley de administración financiera del Estado.

Aquí se crea, como dije, un fondo reservado en el Ministerio del Interior, así como se intentó crear fondos reservados en todos los ministerios y en la Secretaría del Narcotráfico, que llevará a bajar los brazos a quienes hemos acompañado esta reforma de la administración financiera en cuanto al valor del presupuesto.

Señor presidente, vamos a votar afirmativamente en general este proyecto de ley de presupuesto, ya que el país no puede quedar sin esa ley, que es muy necesaria.

Pero en este proceso de mejora y avance es imprescindible cumplir con las normas que se dictan, y asumir la responsabilidad de ejecutar el presupuesto como un programa fiscal de un plan de gobierno y no sólo como una autorización para gastar, intercambiable o modificable según el humor del funcionario, las necesidades de la urgencia y sin posibilidad de control para el Congreso. Porque el control que cumple la Auditoría General de la Nación no es suficiente; es limitado. Tendríamos que contar con un sistema informático que permitiera a todos los legisladores un seguimiento minucioso de todo lo que se gasta porque, en definitiva, es el gasto público.

En este presupuesto se ha agregado también el mantenimiento de un 10 por ciento, de ese 10 por ciento famoso para la provincia de Buenos Aires para atender necesidades sociales del conurbano. La verdad es que está bien que se atiendan las necesidades sociales, pero no sólo del conurbano sino de todo el país, porque las crisis en las provincias es muy grave, hecho que ha quedado de manifiesto en los últimos días.

También habría que determinar que la provincia de Buenos Aires no puede gastar más de cierto porcentaje en propaganda, porque una gran parte de los recursos que se le asignan los utiliza el gobernador de dicha provincia en gastos de publicidad. Y esta es una mala utilización de los recursos.

Un problema grave actual es que se tiene a las provincias en una situación de incertidumbre fiscal. Y allí está uno de los artículos del presupuesto que consideramos, que crea condiciones de presión para las provincias que no adhirieron al pacto fiscal, a fin de que se incorporen al mismo.

Por todas estas consideraciones dejamos formuladas nuestras observaciones y la preocupación que manifestamos, con el deseo de que el país avance en la definición del real sentido que debe tener la ley de presupuesto como un programa de gobierno del cual participa el Congreso, no sólo como apreciaciones estimativas de los gastos y recursos que luego están sujetos a la relatividad de su cumplimiento. El Parlamento tiene que asumir, cada vez con mayor firmeza, su rol de control de gestión, para que entonces tenga sentido la obra que cumple con la aprobación del presupuesto.

Nosotros hacemos votos para que en el país se preserve la estabilidad, pero también reclamamos que se renueve un sentido de solidaridad y de justicia, porque la situación actual hace que existan muchos que acumulan recursos y otros que carecen de ellos, porque la pobreza se ha extendido y porque lo que importa es que la gente sufre los problemas de la reducción de la capacidad adquisitiva del salario y el aumento del desempleo.

Nosotros deseamos una economía con estabilidad, pero también con desarrollo, con solidaridad social, con un crecimiento real, con equidad basada en el aumento de las exportaciones, con capacidad para incorporar tecnología e insertarnos en los mercados mundiales. De esta manera lograremos para nuestro país un crecimiento sostenido con justicia y solidaridad, y no una economía que se sustente en la llegada de capitales

que, al no invertirse en la producción de bienes exportables, puedan después irse un día a los países de origen y dejarnos en una situación de riesgo e incertidumbre.

Y este proyecto, definido así, no tiene color político. Es el desafío de una Argentina que quiere crecer y que quiere ver realizada la justicia.

**Sr. Presidente (Britos).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, del Partido Autonomista.

**Sr. Romero Feris.** — Señor presidente: para fundar el voto del bloque Autonomista con relación al proyecto de ley de presupuesto general de la administración Pública para el ejercicio fiscal del año 1994, venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, formularé algunas consideraciones que estimo necesarias para dar las precisiones y el alcance del sentido de mi decisión.

En primer término, destaco —como ya lo han hecho los señores senadores preopinantes— que por tercer año consecutivo el Poder Ejecutivo nacional da riguroso cumplimiento al requisito temporal establecido por la Ley de Contabilidad vigente y con los recaudos de la recientemente aprobada Ley de Administración Financiera.

Han transcurrido más de tres meses de ingresado el mensaje del Poder Ejecutivo nacional a la Cámara baja, pero pocos días hábiles han restado para que este honorable cuerpo pueda expedirse, privándolo de contar con la posibilidad material de requerir a los funcionarios respectivos información adicional o explicación satisfactoria con respecto a determinados aspectos del proyecto, que a más de enriquecernos ampliarían nuestros puntos de vista.

Esta situación repite la del año pasado, por lo que en mi exposición sobre el particular de entonces enfatice la necesidad de coordinar las reuniones para el análisis de las cuentas públicas, habida cuenta de la multiplicidad de cuestiones que se plantean y que la versación de los encargados de las áreas respectivas en la confección del presupuesto permitiría una comprensión más cabal de las cifras y a partir de allí solicitar las enmiendas que se consideren necesarias.

Un presupuesto cobra sentido a partir de su ejecución, pues en caso contrario sólo sería una mera enunciación voluntarista de metas y objetivos. Por ello, antes de incursionar sobre el proyecto en examen, me detendré en algunos conceptos referentes a la propuesta sancionada para el año que está finalizando y a su ejecución has-

ta el momento, destacando a mi criterio los temas más relevantes y su incidencia sobre la situación general de la República.

En primer término, recuerdo que el monto de gastos autorizado para el presente ejercicio ascendió a 39.650 millones de pesos, monto que entonces criticamos por su amplitud y que significaba un aumento importante sobre el aprobado para el año 1992, que totalizó por todo concepto 33.774 millones de pesos.

Aquel valor debió poco después ser corregido por el Poder Ejecutivo, que dictó un decreto disponiendo la reducción del 10 por ciento sobre todo el gasto, es decir, una disminución del total a 35.685 millones de pesos sobre cuya efectiva ejecución carecemos hasta el momento de información precisa.

Señalemos entonces que la tendencia del gasto se ha mantenido creciente, con destino principal a gastos corrientes, toda vez que los gastos de capital han continuado decreciendo en su incidencia proporcional, que años atrás era del 20 por ciento del total a casi 10 por ciento para el ejercicio que finaliza y un punto menos para el año 1994.

Ya el año pasado me refería yo a esta extraña circunstancia de que en pleno proceso de ajuste y culminando las principales privatizaciones de las empresas públicas o su cierre, cuyos importantes déficit se señalaban como causa del desequilibrio fiscal y de la emisión espuria de moneda, el gasto público en lugar de descender continuaba creciendo.

Paralelamente se continuaron transfiriendo a las provincias los servicios de salud y de educación, compensándose el monto de los gastos simplemente con la mayor recaudación fiscal, lo que posteriormente fue quedando al margen atento las distintas concesiones que las provincias forzosamente debieron efectuar el gobierno central, con destino principal al sistema previsional, particularmente el 20 por ciento del tributo a las ganancias y el 15 por ciento del total de la recaudación coparticipable.

Es decir, señalábamos entonces nuestra preocupación por esta constante en los presupuestos nacionales, lo que nos lleva a recordar que el gasto público medido en dólares es una medida de la presión fiscal que el gobierno impone sobre el capital y el trabajo dedicados a la producción de bienes y servicios, cuyos precios están directamente o indirectamente atados al valor del dólar, como lo son los bienes de exportación y los bienes competitivos con importaciones. Esta definición que formulara en 1984 el entonces director del IEERL y actual

ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos alcanza mayor relevancia en cuanto que, a la vez, señalaba que aquellos sectores tuvieron entonces drásticamente reducidas sus remuneraciones en términos reales con el consiguiente desaliento a la producción.

Esta situación que claramente se reproduce en nuestra realidad actual, tenía para el economista una solución genuina: bajar el nivel de gasto a uno soportable para la economía, sea por el recorte de los gastos en pesos o por la elevación del tipo de cambio, como puede leerse en su obra *Volver a crecer*, páginas 171 y 172. Parecería que el actual ministro ha olvidado su obra en algunos casos.

Retomaré este concepto al examinar las condiciones de nuestra balanza comercial y sus proyecciones para este próximo año.

—Ocupa la Presidencia la señora presidenta de la Comisión de Educación, senadora Ojeda del Valle Rivas.

**Sr. Romero Feris.** — Sin duda, uno de los mayores logros de esta conducción económica ha sido la contención del proceso inflacionario que azotó nuestro país desde hace varias décadas. En efecto, a partir del dictado de la Ley de Convertibilidad los índices de los precios fueron disminuyendo su incremento porcentual de un 5,5 por ciento mensual a sólo décimas de punto por mes en materia de precios al consumidor. A su vez los precios al por mayor casi no sufrieron variaciones.

Es claro que el anclaje del tipo de cambio ha tenido participación primordial en esta contención; mas, como es sabido, se produce de esta manera en la práctica una revaluación importante de nuestra moneda con consecuencias a las que me refería antes: una reducción drástica del ingreso de los sectores de la producción con sus secuelas de desocupación, caída del salario real, migraciones internas y marginalidad crecientes.

No son otras las razones para que los índices de desocupación y subocupación hayan alcanzado valores máximos en su historia y desgraciadamente no es dable esperar una mejora en ellos, sino que por el contrario continuarán creciendo por cuanto distintos sectores industriales siguen expulsando mano de obra, sea por exigencias de su reconversión, sea porque directamente han perdido competitividad frente al ingreso masivo de productos extranjeros, subsidiados por los países, o porque tienen mayor productividad o porque gozan de ventajas competitivas.

La industria petroquímica, la siderúrgica, la textil, el papel y la celulosa, principalmente, son víctimas directas de este hecho en tanto que las vinculadas con el sector exportador como la frigorífica asisten a un cierre de sus plantas en forma progresiva, subsistiendo apenas las beneficiadas con la cuota Hilton.

Resulta entonces a todas luces insoslayable que en la medida en que persistan semejantes condiciones se acrecentará la tensión social que ya ha hecho eclosión en La Rioja y Santiago del Estero —en manos del oficialismo desde la recuperación de la democracia— donde no es solución la implantación transitoria de los denominados “Programas intensivos de trabajo”, variante neokeynésiana en la concepción global del programa económico, ni los fondos de desempleo.

La estabilidad a costa de una fijación irreal del valor de nuestra moneda tiene un precio: pérdida de competitividad que sumada a un grado amplio de apertura se deriva necesariamente en caída de la actividad industrial —excepto los sectores enormemente subsidiados como el automotor y los electrónicos—, cierre o paralización de plantas y desocupación creciente.

Otro tema —concomitante con lo anterior— que adquirió verdadero relieve durante este año es el emergente de la balanza comercial, ya esbozado en el año 1991 y que comenzó a tomar características dramáticas en el año pasado. En efecto, para 1992 se estimó en el mensaje presupuestario un nivel similar al obtenido el año anterior o sea un resultado superavitario de 4.000 millones de dólares que después, para 1993, se calculó en 300 millones de dólares.

Sin embargo, el intercambio comercial arrojó para 1992 un déficit de poco más de 2.600 millones, y para este año el propio ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos ha reconocido que superará los 3.000 millones de dólares, pero que —a mi entender— podría superar los 3.400 millones de dólares.

Estas sumas deben ser incrementadas por el déficit emergente del tráfico de fronteras, que el señor administrador nacional de aduanas, Gustavo Parino, afirmó que está en el orden de los 250 millones de dólares mensuales, es decir, totaliza otros 3.000 millones anuales, con lo que la balanza comercial propiamente dicha es negativa en una suma que supera los 6.400 millones.

Los servicios reales y financieros para el ejercicio que finaliza sumaban 5.680 millones, por lo que el real concurso de capitales para financiar este balance de pagos supera los 11.500 millones.

Afortunadamente, las condiciones de liquidez del mercado mundial han proporcionado una afluencia permanente de fondos que han financiado este resultado negativo, en condiciones cada vez menos onerosas, pero sin que ello deje de significar nuestra total dependencia respecto de dichos mercados internacionales.

Si comparamos las cifras presupuestadas para el corriente año, vemos que las exportaciones se estimaron en 14.300 millones de dólares pero ya en el proyecto que examinamos se ha reducido esta cifra a 12.724 millones, a la que tampoco es probable se llegue y que en su caso, representaría apenas un 4 por ciento más que la correspondiente a 1992.

Las importaciones, estimadas en 14.000 millones de dólares, son admitidas ahora en 15.319 millones, pero ya en los 9 primeros meses superaron los 11.737 millones, por lo que, de repetirse las cifras del último trimestre del año anterior y con igual tendencia que la registrada hasta entonces, superarían los 16.125 millones, con lo que la real cifra del déficit comercial estaría en 3.400 millones, que es el monto a que antes aludía.

No comprendemos el fundamento para que este proyecto presente exportaciones por 14.437 millones e importaciones por 16.252 millones —siempre referidos a dólares—, lo que implicaría mejorar la balanza comercial en un 46 por ciento. Por el contrario, aun cuando han mejorado algunos precios de nuestra producción cerealera, es probable que aquel déficit se mantenga.

Durante 1993 se cerraron las tratativas correspondientes a la refinanciación con la banca comercial exterior en los términos del acuerdo firmado en abril de 1992 conocidos como Plan Brady.

Debo decir en este sentido que cuando el ministro de Economía con sus asesores vino al Salón Rosado de este Honorable Senado, yo le planteé mis inquietudes con respecto a este tema, lo que fue respondido en la generalidad de los casos con la precisión que uno pretendía. Lamentablemente, creo que los acontecimientos posteriores dieron la razón al planteo que formulé en aquel momento.

Señalo por eso que dicho acuerdo —debo mencionarlo— nunca fue remitido al Honorable Congreso de la Nación. En este aspecto he insistido reiteradamente en que los fundamentos legales que se han citado para prescindir de este paso fundamental para su legitimación —el artículo 48 de la ley 16.432, incorporada a la ley complementaria permanente de presupuesto— son inaplicables a este tema desde todo punto de vista. Pero lo que quiero señalar especial-

mente es que cuando se firmó el preacuerdo se afirmó que era entonces sumamente beneficioso por cuanto la tendencia de los intereses a largo plazo era creciente. De igual modo se enfatizó que los bancos acreedores cambiarían sus acreencias en parte similares entre bonos par y bonos con descuento, con lo que habría una reducción de nuestra deuda de más de 7 mil millones de dólares.

Como dije anteriormente, los dos pronósticos fueron errados. Los bancos, que no son tontos, por supuesto, eligieron mayormente los bonos par, con lo cual la quita efectiva del 35 por ciento resultó de apenas 2.600 millones de dólares. Por su parte, la tasa de interés a largo plazo bajó continuamente desde el 7,9 por ciento anual al momento del acuerdo, a poco más del 5,9 por ciento para situarse, en la actualidad, en el 6 por ciento. De no haber mediado el apresuramiento oficial, estos dos puntos menos hubieran permitido en los bonos par, sin lugar a dudas, una quita mayor desde el punto de vista proporcional.

Si consideramos los treinta años referentes a los términos del convenio, advertiremos que implicarán un beneficio para los acreedores de casi el 60 por ciento del total de la deuda refinanciada a través de esos bonos.

Además, sostuve entonces y lo reitero ahora la improcedencia de haberse reconocido el total de los intereses caídos cuando dicho monto había sido totalmente provisionado por los bancos y quedaba pendiente de discusión la legitimidad de su origen.

No por ello dejo de reconocer que esta refinanciación de la deuda significó adelantar al costo citado la regularización del país, sacándolo de su estado de mora y con ello se disminuyó la sobretasa riesgo-país que desde entonces fue descendiendo de modo constante, abaratando así la financiación externa tanto pública como privada.

La primera se ha realizado con equilibrio tomándose nuevos préstamos que sustituyen las necesarias cancelaciones a su vencimiento. En todos los casos la tasa de interés anual ha sido menor y a su vez se ha mejorado el perfil de los compromisos, extendiéndolos temporalmente.

Esto —no puedo negarlo— es positivo pero al mismo tiempo se ha observado por parte de las empresas, en la búsqueda de disminuir los costos financieros, una intensa colocación de obligaciones negociables emitidas en dólares así como también de Euronotas y otros papeles comerciales también en moneda extranjera que han excedido los 10 mil millones de dólares y que se incrementan a diario. Como ejemplo podemos

decir que YPF Sociedad Anónima está por lanzar 850 millones y otras emisiones en trámite hacen elevar esta cifra aún más.

A fines de los 70 se usó igual metodología para abaratar el financiamiento de las empresas públicas que quince años más tarde renegociaron para pagar en otros treinta años más.

Es cierto que hay capitales líquidos en el exterior y que aún abonamos una sobretasa interesante para que esos capitales sigan viniendo. Pero no lo es menos que se está comprometiendo seriamente y de modo innecesario la capacidad de repago, lo que aumenta en modo notable el grado de dependencia de nuestro país de lo que suceda en el contexto mundial y de las corrientes financieras.

Advertimos entonces que al resultado negativo de la balanza comercial y la de servicios se añadirá un importante monto de amortizaciones de deudas privadas cuya financiación en la moneda original exigirá otras nuevas fuentes de fondos.

¿Cuál será la fuente que proveerá estos fondos? ¿Es confiable pensar que se mantendrá sin alteraciones una corriente cada vez mayor de capitales que financien estos desequilibrios? ¿Estamos creando realmente las condiciones que permitan generar para entonces las divisas necesarias? Por ahora no hay respuesta a estos interrogantes.

Advierto que esta corriente financiera hacia los países latinoamericanos ha sido creciente y que el endeudamiento global, que era de 417.550 millones de dólares en diciembre de 1991 ha pasado a más de 513.000 millones de dólares al presente, según cifras del Banco Mundial. Recordemos que la crisis de la deuda externa se hizo presente en nuestro continente en agosto de 1982 cuando México anunció que su incapacidad de pago ascendía a 390.000 millones de dólares.

Señor presidente: Otro aspecto importante a considerar es el referido a la monetización de nuestra economía. Los agregados monetarios han tenido un crecimiento medio del orden del 30 por ciento, producido principalmente durante los meses de julio y agosto, que muestran la influencia que tuvo la recepción de los fondos provenientes de la venta de las acciones nacionales y provinciales de YPF S.A. con destino a cancelar las obligaciones pendientes con las provincias productoras de hidrocarburos, nacidas de la incorrecta liquidación de las regalías y con los jubilados y pensionados nacionales.

Aun cuando se está bastante distante de alcanzar los valores corrientes de monetización en los países desarrollados, los porcentuales re-

gistrados en términos del PBI han registrado una mejora sustancial desde la sanción de la ley de convertibilidad. Se puede señalar que, comparativamente, el crecimiento porcentual de los depósitos en moneda extranjera ha sido sustancialmente mayor a los correspondientes a nuestra moneda a punto tal que hoy las imposiciones a plazo fijo en divisas superan en más de un 60 por ciento a las en pesos, y las colocaciones en caja de ahorro se han equiparado. Si estimáramos prudentemente una suma en dólares en billetes en poder de la población, nos encontraríamos con que prácticamente los agregados monetarios en divisas extranjeras equivalen a las tres cuartas partes de la moneda nacional, factor éste que torna más dependientes las decisiones de la política nacional.

Además, esta mayor monetización no se ha traducido en un crédito más barato a las actividades empresarias; a pesar de que las tasas pasivas se sitúan en un valor no superior al 9 por ciento anual, las tasas activas más bajas —las del Banco de la Nación Argentina— duplican largamente este valor en tanto que no es extraño que los productores del interior deban abonar intereses del 5 o 6 por ciento mensual.

Por ello, a mi juicio se impone una reducción paulatina y constante de los encajes del sistema bancario institucional, comprometiéndose los fondos que se liberen para financiar a los pequeños y medianos productores que carecen de otro acceso a los mercados de capitales como lo pueden hacer, vía obligaciones negociables o papeles comerciales en el exterior, las empresas de entidad significativa.

Tampoco deseo dejar de recordar los reparos que me mereció la ya comentada venta de acciones de YPF S.A. toda vez que en lugar de encararse una colocación conjunta de 160 millones de acciones a un valor de 19 pesos que fijaran las autoridades, sucesivas ofertas habrían podido llevar el patrimonio nacional al real valor que aquellas alcanzaron muy poco después y que superando en un 30 por ciento promedio lo recaudado, habrían significado unos 900 millones adicionales.

Recuerdo a los señores senadores que prácticamente desde mi incorporación a este Honorable Cuerpo vengo bregando por la necesidad de replantear las reglas de coparticipación federal atento a la desactualización de las normas previstas en la ley 23.548. En este aspecto algo ya adelanté al abordar el tema del crecimiento del gasto nacional y de la afectación de recursos provinciales para satisfacerlo. Los recientes hechos acaecidos en Santiago del Estero han

mostrado la urgencia en el tema y la necesidad de encontrar soluciones para la generalidad de las provincias.

Pero por otra parte deseo dejar bien sentado para que la opinión pública tome el debido conocimiento que cuando se afirma que las provincias sólo cubren un mínimo porcentaje de su gasto con ingresos propios se está incurriendo en una falacia, por cuanto se omite aclarar que lo percibido por impuestos directos —como por ejemplo a las ganancias— y otros rubros que integran la coparticipación, son recursos netamente provinciales cuya recaudación se ha delegado en la Nación y cuya distribución se realizaba según la ley que este Honorable Congreso había sancionado, pero posteriores enmiendas propiciadas por el poder central la han distorsionado por entero. Porque aquí la imagen que se procura proyectar es que si no fuera por la acción de la Nación, por su entre comillas —diría yo— “generosidad y condescendencia”, las provincias no podrían subsistir, cuando lo que debemos destacar es que si la nación, con sus gastos desmesurados, no hubiera comprometido el patrimonio presente y futuro por la vía del endeudamiento interno y externo, con su manejo de las empresas estatales, con sus leyes de regulación monetaria y seguro de cambio; en fin, con todo cuanto desacierto se ha cometido desde el poder central acumulando errores desde hace décadas, lejos estarían las provincias de estar en la situación de penuria, de ahogo financiero, de falta de industria y de trabajo y, finalmente, de dependencia, a lo que se las ha condenado y sometido.

Pregunto yo, ¿qué responsabilidad cabe a las provincias sobre el desmanejo del Banco Central de la República Argentina cuyas actuales autoridades —y quiero que quede bien en claro este aspecto— han estimado en más de 60 mil millones de pesos —fíjense ustedes, al equivalente a un siglo del presupuesto de mi provincia— los québrantos originados en sólo la década anterior al retorno de la democracia? ¿Con cuánto han participado los estados federales en la formación de la deuda pública externa, que sobrepasa los 30.000 millones y que hoy sus habitantes van a tener que asumir por no menos de treinta años?

En los últimos tres años han transferido al gobierno nacional el 11 por ciento de la recaudación del IVA; el 20 por ciento de la del impuesto a las ganancias; el 90 por ciento de la del impuesto a los bienes personales; el 50 por ciento de la del impuesto a los activos y, finalmente, el 15 por ciento de la del total de los impuestos coparticipables, lo que en cifras redon-

das, supera los 7.059 millones de pesos. Estos impuestos son pagados por todos sus habitantes.

Asimismo debemos evaluar que el 64 por ciento de las prestaciones previsionales tienen sus beneficiarios radicados en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Esto significa, desde el punto de vista macroeconómico, que alrededor de 12 mil millones de pesos se vuelcan anualmente en estas jurisdicciones, con la consiguiente influencia en las actividades comerciales provenientes de ese ingreso nacional. Si agregamos Córdoba y Santa Fe, más del 80 por ciento de los beneficiarios residen en esa región.

En mi provincia, por el contrario, apenas representan el 1 por ciento del universo total, con lo cual mientras sufrimos una detracción adicional de nuestro ingreso —de 148 millones de pesos por vía de las cesiones compulsivas impuestas en los dos últimos años—, no llega esta suma lo que ingresa por las prestaciones nacionales. Lo que equivale a decir, en términos económicos, que la provincia de Corrientes abona a los jubilados nacionales residentes en ella con el producido de su parte de impuestos nacionales, en tanto transfiere al sistema nacional todos los aportes y contribuciones de las empresas y particulares.

Solamente el 19 por ciento de los beneficios se distribuyeron entre las veinte provincias restantes que, a su vez, están cediendo el 61,5 por ciento de su coparticipación; o sea, 2.375 millones de pesos anuales. Es momento de redistribuir el total cedido en función de los montos pagados por jurisdicción, según propondré en el tratamiento en particular.

No fueron las provincias las que permitieron a los sistemas de recaudación fiscal y previsional nacionales llegar a los límites de evasión que alcanzaron y que generaron los tremendos déficit en las cuentas nacionales como los gigantescos endeudamientos de la administración y del sistema previsional. Es cierto y es un gran mérito del gobierno actual haber revertido en materia tributaria esta situación y que se esté procurando hacer lo propio en lo previsional. Pero, entretanto, el costo de la inercia nacional ha sido el estancamiento y la pobreza cada vez mayor de las provincias.

Dicho de otra manera, los déficit fiscales y cuasifiscales que se produjeron por el mal manejo de los negocios públicos por parte de la administración central —que provocaron la gigantesca inflación habida y que en los últimos 25 años significó reducir nuestro signo monetario en 10 billones de veces— fueron financiados con la emisión monetaria espuria. Las provincias no han sido sino otras víctimas de este

accionar de los gobiernos nacionales, al recibir tarde, mal y desvalorizados los fondos que legítimamente les correspondían, en tanto sus gastos soportaban la indexación creciente.

Pero además, como representantes de las provincias, difundamos a todo viento que es para pagar estos gigantescos errores de la Nación que hemos ido cediendo parte de nuestros legítimos ingresos; al principio, de modo generoso y voluntario, como colaboración con la Nación. Pero, luego, esta cesión ha sido producto de la compulsión por vía de los extraños pactos fiscales federales que repugnan a nuestra Constitución, que para eso ha implementado un sistema representativo, republicano y federal y no esta suerte de convenios, productos de la presión extorsiva sobre los gobernadores o también de la seducción de las promesas.

En este sentido, quiero decir que a nuestra provincia —donde hace pocos días se hizo cargo el gobierno elegido por la voluntad popular, después de dos años de intervención— prácticamente se la ha intimado a que ratifique el último pacto fiscal.

Ahora el gobierno nacional se hace cruces porque el déficit o necesidad de financiamiento de las veintitrés provincias en su conjunto se sitúa en el orden de los 621 millones de pesos, aunque nada hizo para reintegrarles cuando la recaudación previsional mejoró 1.243 millones en los nueve primeros meses del año, como afirmara el secretario de Ingresos Públicos, Carlos Tacchi, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Por el contrario, hoy "condonaría" la supuesta deuda por haber cumplido la Nación el compromiso del piso garantizado en el Pacto Fiscal del año pasado.

Señor presidente, las provincias no han sido la causa de la inflación; no han sido el origen del endeudamiento externo ni del interno; nada tuvieron que ver con las pérdidas que generó la cuenta de regulación monetaria ni con las garantías del sistema financiero que acordó el Banco Central, no emitieron moneda espuria ni la desvalorizaron. Sin embargo, todos y cada uno de sus habitantes, incluidos los de la Capital Federal, son los que por treinta años o quizás todavía más pagarán los Brady, los Bocón, los Bote, los Bónex, los Bocrek, los BIC y otros títulos que representan la deuda del Estado nacional y cuya atención anual supera varias veces la necesidad total de financiamiento provincial.

Por ello, y enfatizando nuestro apoyo a corregir cualquier desborde de alguna administración en particular, siento necesidad de afirmar a

plena voz que no hay ninguna necesidad de que los empresarios vayan pensando a cuál país irán a efectuar sus inversiones sino que tienen aquí y ante sí todas las posibilidades.

Señor presidente: es por todos conocida la dramática situación financiera que afronta la provincia de Corrientes. El pasado día 10, al asumir el gobierno provincial, los mandatarios electos han encontrado impagos los sueldos del mes de noviembre y comprometida la coparticipación del corriente mes, en el que deben abonarse además de los haberes mensuales también los aguinaldos.

En este aspecto quiero señalar que no se le enviaron los fondos correspondientes como se le venía haciendo al entonces interventor, doctor Tonelli.

No es este el momento propicio para determinar los responsables de tales déficit. Lo innegable es que, tras dos años de intervención federal, el gobierno nacional no puede deslindar su responsabilidad y desligarse de todo compromiso como si fuera ajeno a los hechos.

Sostenemos firmemente que es el gobierno nacional el responsable de la situación actual y, por tanto, está a su cargo instrumentar las medidas financieras que posibiliten el normal funcionamiento de las instituciones federales.

Proponemos, en consecuencia, la inclusión de un artículo por el cual se declaren como deudas originarias de la Nación aquellas en que incurrieron los delegados federales durante su gestión, sea en compromisos impagos o en la contratación de empréstitos que afecten recursos provinciales.

Señor presidente: he expuesto a grandes rasgos mi opinión sobre la situación económico-financiera de la Nación, que se vincula con el presupuesto del año que finaliza.

Pasaré a referirme ahora a los aspectos más importantes del presupuesto para el año 1994.

Ya anticipé mi disconformidad con el crecimiento del gasto corriente y las consecuencias que ello traerá aparejadas más tarde o más temprano sobre toda la economía del país.

También por vía de la comparación mencioné el bajo nivel de los gastos de capital y la reducida inversión pública. En momentos en que la instrumentación oficial exige a las empresas un proceso de reconversión que es expulsor de mano de obra, debieran canalizarse fondos o estímulos a la inversión privada, particularmente en los sectores más afectados por la caída de la actividad industrial.

Así, pues, uno de los temas candentes y cruciales para el año que se inicia es el relativo a la desocupación. Los efectos de la política ofi-

cial, basados exclusivamente en principios de costo fiscal en materia de las empresas del Estado, por una parte, y las consecuencias del accionar conjunto de la convertibilidad, con el anclaje del peso a un nivel sobrevaluado, con la apertura generalizada —salvo algunos renglones privilegiados como fueron la industria automotriz y los electrónicos—, por la otra, han provocado el cierre de numerosos establecimientos industriales.

Es imprescindible que de inmediato se adopten medidas tendientes a revertir este proceso que ha llevado los niveles de desocupación y subocupación a porcentuales máximos en su historia.

No creemos, como se afirma en el proyecto, que sea el incremento de los recursos del Fondo Nacional del Empleo, destinados a pagar los subsidios a los desocupados, o la vía de los llamados Programas Intensivos de Trabajo (PIT) las soluciones de este problema; por el contrario, solamente son paliativos transitorios e insuficientes. El verdadero camino consiste en promover las inversiones de industrias productoras de bienes transables que cumplirían así el doble objetivo: ser fuentes de trabajo y, a la vez, generadoras de las divisas, que ineludiblemente va a requerir nuestra economía en un futuro no muy lejano.

Paralelamente, repitiendo un concepto anterior, es importante y urgente continuar con la ayuda a los pequeños y medianos productores, en particular los radicados en localidades distantes de las grandes ciudades, porque ellos constituyen la red invisible que da unidad a la República creando las auténticas fuentes de trabajo zonales y evitando la acromegalia urbana de las capitales.

En materia de recursos observamos que se ha mantenido la mejoría en la recaudación del impuesto al valor agregado a la vez que el impuesto a las ganancias —eliminada la posibilidad de deducir los quebrantos acumulados— ha comenzado a rendir en forma creciente.

No compartimos la medida adoptada por un decreto autotitulado de necesidad y urgencia que eliminó el mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias. También entendemos que es hora de regresar a la coparticipación el 20 por ciento cedido al sistema previsional, habida cuenta de que desde aquella medida, también tomada al margen de este Congreso Nacional, la recaudación previsional mejoró en una suma equivalente a la que se apropió el gobierno central de los fondos provinciales.

No están cuantificados en este presupuesto los montos que ingresarán en el Sistema de Segu-

ridad Social provenientes de la moratoria de trabajadores autónomos ni las variaciones que traerá la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado de Fondos y Pensiones que se sancionara recientemente. Al pasar, recordemos que este Senado de la Nación lo aprobó —contra la voluntad de muchos, entre los que me cuento— a “libro cerrado” y sin permitir modificaciones, para no dilatar su sanción como ley, evitando así su devolución a la Cámara de Diputados para la consideración de las reformas, que no se trataron. Al presente, aquella ley sigue con sus deficiencias a las que se añadieron las emergentes del veto parcial del Poder Ejecutivo a modificaciones que introdujeron los señores diputados.

Tampoco advertimos el cómputo de la reducción del ingreso por disminución de aportes patronales, medida cuya implementación demandamos se realice en el menor tiempo posible. Como afirmara en el tratamiento de la reforma previsional, es momento de debatir la aplicación de éste y otros gastos calculados sobre la base del monto nominal del salario y propiciar su sustitución de manera tal que no incida en el precio final de los productos, lo que al mismo tiempo significaría una importante mejora en el tipo de cambio efectivo para las exportaciones de todo tipo de bienes, pero predominantemente los que incorporan mano de obra intensiva.

Quiero mencionar también, señor presidente, que el artículo 29 del proyecto original contenía la ratificación de dieciocho decretos de necesidad y urgencia, en su casi totalidad relativos a modificaciones sobre leyes de contenido impositivo. La Cámara de Diputados ratificó quince de ellos, de los cuales uno fue dictado en el año 1990, otros diez en 1991, tres el año pasado y solamente uno el corriente año.

La facultad de establecer impuestos, y por lógica consecuencia sus modificaciones, es privativa de este Honorable Congreso de la Nación y, como advertimos, magro favor le hace a las instituciones republicanas esta demora en el tratamiento de decretos de naturaleza como la invocada. Por cierto, así lo ratificó la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazando las pretensiones de la Dirección General Impositiva de percibir extensiones efectuadas por decretos y reglamentaciones no convalidadas por ley, lo que genera dudas jurídicas sobre la validez en el lapso transcurrido.

Con la exclusión de los decretos 171/92, 355/92 y 1.684/93 los restantes fueron ratificados sin discusión ni debate en el recinto de la Cámara baja.

Advertimos que entre los citados decretos se halla el número 2.284/91 y su modificatorio, número 2.488/91 conocidos como los decretos de desregulación. El primero fue dictado el 5 de octubre de 1991 y recibido el mismo día en este Congreso de la Nación. Su articulado contiene la derogación o sustancial modificación de alrededor de 50 cincuenta leyes que se mencionan en forma directa, a las que se suman aquellas que introdujeron cambios posteriores a la sanción primitiva.

Entre otras normas se contempla la disolución o transferencia de la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, el Instituto Forestal Nacional, el Mercado de Concentración Pesquera, la Corporación Argentina de Productores de Carnes, el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, la Dirección Nacional del Azúcar y el Mercado de Consignación de la Yerba Mate, así como las normas de regulación de la producción y comercialización de la yerba mate.

Se eliminaron, además, disposiciones arancelarias de profesionales y se permitió actuar en el orden nacional a profesionales inscritos en otras jurisdicciones, disposición que no contó con reciprocidad.

Se suspendió toda restricción de horarios y días de trabajo en la jurisdicción portuaria. Lo propio se dispuso para las actividades comerciales de venta, empaque, expedición.

Se eliminaron reservas de cargas y se suprimió el Fondo Nacional de la Marina Mercante; se disolvieron las cajas de subsidios familiares para los empleados de comercio, para el personal de la industria y para los trabajadores de la estiba, disponiéndose la transferencia de sus bienes al Estado nacional.

El artículo 67 del decreto 2.284/91 faculta al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a afectar a "Rentas generales", en la proporción que estime necesaria, los fondos previstos en los artículos 23, 24 y 25 de la ley número 19.800, que no es sino el Fondo Nacional del Tabaco.

Acabamos de aprobar el reintegro total de estos fondos a sus fines y estamos sancionando a posteriori nuevamente la autorización para afectarlos. Naturalmente este artículo lleva mi oposición frontal.

Señor presidente: creo que los habitantes de la República merecían una discusión profunda sobre estos temas y no su congelamiento por más de dos años, sin tratamiento alguno, para aprobarlo así, todo en paquete, como un número más dentro de un articulado.

No son nimias las cuestiones que quedarán sin debatir, especialmente las relativas al trabajo personal y a la eliminación de las restriccio-

nes horarias. De igual manera quedarán sin balancear las economías regionales, que han pasado a un régimen de contratación y de comercialización en que no se preserva el equilibrio de las contraprestaciones.

No voy a extenderme más sobre este artículo pero, visto en detalle, todos y cada uno de los decretos aquí consignados son pasibles de debates sustanciales.

Prosiguiendo el examen en particular de los artículos, manifiesto desde ya mi oposición a la inclusión del Ministerio del Interior en el régimen del artículo 1º de la ley secreta 18.302. En momentos en que la transparencia de los actos administrativos se impone como una exigencia ineludible, resulta contradictorio que se otorgue al ministerio público esta facultad. El año pasado, el proyecto oficial intentó hacer lo propio, participándolo al Congreso de la Nación, al Poder Judicial, a todos los ministerios e incluso a la Secretaría de Estado para la Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico pero, con muy buen sentido, la Cámara de Diputados lo rechazó.

Doy mi entero apoyo a la inclusión del artículo 35, por el cual se establece, como dije antes, la distribución de las sumas que se recauden con destino al Fondo Nacional del Tabaco. Entiendo que debería dejarse sin efecto, según comenté al tratar la ratificación del decreto 2.284/91, la autorización que su artículo 67 sanciona.

De igual manera, considero sumamente acertado lo normado por el artículo 28, es decir un ente autárquico en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a cuyo cargo esté la superintendencia del personal —excluidos magistrados— y la conservación y administración de los bienes. Es innegable que la complejidad del manejo administrativo del Poder Judicial de la Nación, con casi 20.000 funcionarios y un presupuesto de 708 millones de pesos, requiere una dedicación y un esfuerzo tales que no pueden exigirse a los ministros de la Corte Suprema como un adicional a su inmensa tarea.

Señor presidente: en síntesis, pienso que este presupuesto general de la administración nacional para el año 1994 es, en términos generales una propuesta aceptable.

Entiendo que debió exigirse una reducción de los gastos respecto del año anterior —que el propio mensaje colocó entonces en el nivel de "insostenible"— para dar así el ejemplo que se reclama a los estados provinciales.

He puntualizado el tremendo esfuerzo que han realizado y están realizando la generalidad

de las provincias al postergar sus legítimos derechos a la recaudación tributaria.

Elogio los resultados de la labor de la Secretaría de Ingresos Públicos y considero conveniente —a la luz de ellos— revisar las cesiones de la coparticipación al sistema de seguridad social.

Reitero mis prevenciones sobre los saldos del comercio exterior y el endeudamiento privado en moneda extranjera. Enfatizo sus consecuencias sobre la actividad productiva y la secuela de desocupación creciente, que no tiene solución simple en la mayoría del territorio argentino.

Abogo por la instrumentación de medidas tendientes a disminuir el "costo" argentino, tanto en materia crediticia como en las cargas laborales.

Rechazo ratificar decretos de necesidad y urgencia sin debate.

Solicito la inclusión del artículo referente a los costos de las intervenciones federales, como he dicho.

Pido se redistribuya el importe cedido por las provincias al Sistema de Seguridad Social, en función del monto de los beneficios pagados por jurisdicción, y no según los términos de la ley de coparticipación.

Reservo el derecho de proponer modificaciones a algunos artículos en el debate en particular.

En función de las premisas expuestas, adelanto mi voto favorable en general al proyecto.

Antes de terminar, quiero decir que la Nación, que recibe más del 60 por ciento de la recaudación tributaria, debe entender que el 40 por ciento que queda para las provincias debe ser distribuido con equidad, ecuanimidad y justicia. Es imprescindible señalar, además, que más que procurar que cierren las cuentas tenemos que actuar con la suficiente sensibilidad social y pensar en el ser humano como objetivo fundamental de nuestro accionar, de nuestro quehacer tanto en la esfera pública como en la privada.

**Sra. Presidenta (Rivas).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, del bloque liberal.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Señora presidenta: como ya fue puesto de resalto por los oradores preopinantes, por tercera vez con posterioridad a la sanción de la Ley de Convertibilidad y al lanzamiento del programa impulsado bajo el lema estabilidad y crecimiento con justicia social, viene a consideración del Senado el proyecto de presupuesto, en este caso para el año 1994.

Este proyecto tiene la misma relevancia que señalé en el momento de fundamentar mi posi-

ción en los dos ejercicios anteriores, relevancia que tiene su origen a partir del momento en que la hiperinflación, provocada por los desbordes en el gasto público financiado con emisión, demostró que la política monetaria era insuficiente para alcanzar la estabilidad deseada, y que la política fiscal, de la cual el presupuesto es uno de sus principales ingredientes, debía asumir un papel protagónico para mantenerla y poner la simiente para el crecimiento.

Para un análisis y una predicción sobre cómo, en función de los recursos y de la asignación adecuada de los gastos previstos en este proyecto, se alcanzarán los objetivos que pretende el programa, como bien se dijo recién, los senadores hemos contado con un brevísimo tiempo. Fue apenas el suficiente para leer la versión taquigráfica de algunas intervenciones de diputados y de representantes del Poder Ejecutivo dentro de la labor desarrollada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y que sirvió sin duda alguna para enriquecer nuestro juicio, a pesar de que en muchos de sus aspectos teníamos ya opinión formada.

Como es tradicional, y como lo estamos viendo aquí también en la discusión del presupuesto, ésta es una oportunidad siempre propicia para debatir sobre el programa económico global, que abarca no solamente a la política fiscal sino también a la laboral, a la salarial y a la cambiaria. Ello se justifica porque, teniendo en consideración las restricciones impuestas a la emisión de moneda por la nueva Ley Orgánica del Banco Central y por la Ley de Convertibilidad, el manejo y la conformación del presupuesto adquieren un papel protagónico en el programa económico global.

Siguiendo con esta tradición, incursionaré brevemente en este programa económico en vigencia, sin perjuicio de efectuar al final algunas consideraciones que están en el ambiente relacionadas con los ingresos previstos y con algunas posibles dificultades en el cumplimiento, a lo cual se ha referido precisamente el señor senador por la Capital en su discurso previo.

Es evidente que existen ciertas coincidencias entre los especialistas, dirigentes, funcionarios y columnistas de los medios de comunicación, así como entre los integrantes de la comunidad, sobre algunos efectos positivos y otros negativos que surgen de la aplicación de las políticas elegidas para alcanzar la estabilidad, el crecimiento y la distribución justa que todos reclaman respecto de los ingresos que se obtengan.

Lo dicho me induce a justificar la definición que se ha hecho de la ciencia económica, que voy a leer, y que la señala como la ciencia que tiene por finalidad, tanto en el orden público como en el privado, la administración de la escasez. Es decir que cuando se quiere más de un bien, es necesario sacrificar parte de otro mientras no aumente la producción en una magnitud tal que permita cubrir todas las necesidades presentes y las futuras emergentes.

Yo no digo nada nuevo a los señores senadores si afirmo que la coincidencia existente ha sido puesta precisamente de resalto por los anteriores oradores. Hay una coincidencia que prioritariamente alude a la estabilidad alcanzada y reconoce su impulso inicial en la paridad cambiaria fija de un peso por dólar, así como en otras exigencias de la Ley de Convertibilidad que rige a partir del 1º de abril de 1991.

La segunda prioridad que debemos reconocer en materia de efectos positivos del programa merece ser asignada a la satisfactoria tasa de crecimiento de los años 1991 y 1992, con un promedio de alrededor de un 9 por ciento y de 6,5 por ciento para 1993, que se estima igual para 1994; veremos cuál es el comportamiento real con los hechos concretos.

La tercera prioridad en materia de efectos positivos, con los que en general se coincide, es una caída de la tasa de inflación, que fue de 84 por ciento en 1991, el 17,7 por ciento en 1992, del 7,7 por ciento en 1993, proyectándose en el 4 por ciento para 1994, según lo estima el Poder Ejecutivo en su mensaje.

Esta evolución favorable de la tasa de inflación está involucrada en la primera prioridad de los aspectos positivos que denominé "la estabilidad". Y si bien en esa oportunidad solamente me refería a la Ley de Convertibilidad y a la paridad cambiaria de un peso por dólar como factor determinante de ese efecto positivo, fue porque significó que todo peso que salía del Banco Central tenía que estar respaldado por un dólar ingresado, con lo que se eliminaba una de las principales determinantes de la tasa de inflación.

Pero ahora, al referirme a la tasa de inflación en forma genérica, no puedo dejar de señalar que esa estabilidad parecería difícil de mantener aun con la vigencia de la Ley de Convertibilidad y sin variar el tipo de cambio, si no estuviera respaldada por la adecuada política salarial, laboral, impositiva, y aun de política general que elimine las expectativas de la devaluación.

Sin la pretensión de haber agotado las coincidencias que se auscultan en cuanto a los efectos positivos del programa en curso, señalaré

ahora en el mismo sentido las coincidencias que se advierten en cuanto a los efectos negativos, es decir el costo que la sociedad debe asumir como consecuencia de los beneficios logrados.

En primer lugar, las cifras publicadas sobre la balanza comercial con el exterior, a la cual se han referido con bastante extensión los señores senadores de la Rúa y Romero Feris, pronostican un déficit de alrededor de 3.500 millones de dólares, como consecuencia de un incremento de las importaciones, el cual supera el débil crecimiento de las exportaciones. Esto, en cuanto a las cifras totales, sin perjuicio de la alarma que significa un factor escondido, al que se refirió el senador Romero Feris, quien citó algunas estimaciones de un funcionario oficial.

Al déficit de la balanza comercial cabe agregar una cifra similar a la anotada, emergente del pago de los llamados servicios reales: turismo, fletes, primas de seguro; y financieros: regalías, dividendos, honorarios e intereses.

Todo ello impone la necesidad de equilibrar el balance de pagos con el ingreso de capitales financieros en una gran proporción y que en algún momento pretenderán regresar si mejora su rentabilidad en otros países. En tal supuesto, podría afectarse la credibilidad del programa y amenazarse la estabilidad.

El segundo aspecto de coincidencias en cuanto a los efectos negativos se refiere al cambio de estructura del producto bruto, a pesar del signo positivo en cuanto al crecimiento señalado anteriormente.

El crecimiento del producto bruto en la Argentina estuvo impulsado tradicionalmente por el crecimiento del sector manufacturero, mientras que ahora el impulso está dado por el sector servicios, posiblemente como consecuencia de la privatización de las empresas de servicios públicos que absorbieron la mayoría de las nuevas inversiones, y del reemplazo de parte de la producción manufacturera por bienes importados que compiten en precios con la producción local. Aunque el nivel de actividad industrial se ha mantenido, lo ha sido en función de industrias que obtuvieron alguna protección, especialmente las industrias automotriz y textil, frente a otras actividades que atraviesan situaciones críticas, especialmente las que constituyen el grupo de las pequeñas y medianas empresas.

Otro aspecto negativo, que en parte es consecuencia del anterior —es decir, de la crisis de varios sectores industriales que absorbían gran cantidad de mano de obra—, es la tasa de desocupación la que, de acuerdo con las esta-

dísticas conocidas, en el Gran Buenos Aires, se acerca ya al 10 por ciento de la población activa según lo publicado en el Suplemento Económico de "La Prensa" del 14 de diciembre de este año, que incluye un artículo de Conrado Etchevarne Bullrich, titulado: "Una advertencia es suficiente".

Quiero agregar que debe mencionarse otro factor, al cual también habría que calificar como negativo. Se trata de los cambios que se advierten en la pirámide de la distribución del ingreso entre los distintos sectores de la población. Debo aclarar que no poseo estadísticas fehacientes y conocimientos especializados en este campo de estudios, por lo que arriesgo mi juicio sobre la base de afirmaciones de dirigentes y columnistas de medios de comunicación y también en alguna apreciación personal que está al alcance de todos. Quien tenga la posibilidad de contar con aquellas estadísticas podrá arriesgar alguna opinión fundada, debiendo detectar en cuáles escalones de la pirámide de ingresos se ubican quienes pueden afrontar la elevada erogación que significa el acceso a los costosos espectáculos ofrecidos por artistas extranjeros que logran colmar los estadios, o a la gran cantidad de automóviles importados. Podrá también individualizar a quienes, por figurar en los escalones más amplios de la base de la pirámide no pueden acceder a consumos básicos para su subsistencia, como ocurre en ciertas zonas del interior del país o con los jubilados que en la Capital Federal subsisten con prestaciones mínimas.

Hasta aquí hemos destacado ciertas coincidencias generales en cuanto a los efectos positivos y negativos. Donde no existen tantas coincidencias, es en cuanto a las políticas a implementar para robustecer los efectos positivos o revertir el signo de los negativos.

Entre las políticas ofrecidas, una propuesta extrema es la de que quienes auspician pasar del tipo de cambio fijo establecido en la Ley de Convertibilidad a un tipo de cambio flotante, de minidevaluaciones o "flotación sucia", en virtud de la cual la regulación del Banco Central respeta la tendencia del mercado, permitiendo así que la paridad cambiaria sea compatible con las necesidades de la exportación sin crear presiones inflacionarias excesivamente fuertes. Esta solución, que significa en definitiva "devaluación", se admite que puede no ser necesaria en el corto plazo, mientras el volumen de reservas del Banco Central sea suficiente para soportar los requerimientos de divisas de los importadores y no se interrumpa el flujo de capitales que viene del exterior, con las advertencias que formulé anteriormente en cuanto a la

posibilidad de que en un momento dado estos capitales que vienen puedan sentirse más atraídos por inversiones más productivas o más seguras en otros lugares.

Una solución distinta es la propuesta por quienes, aceptando la paridad nominal establecida en la Ley de Convertibilidad, sugieren mejorar el tipo de cambio real de exportación mediante subsidios, reintegros, tasas preferenciales para prefinanciación de exportaciones, etcétera, o bien sugieren encarecer las importaciones mediante tarifas arancelarias diferenciales o por aplicación de derechos específicos, sobre todo en el caso de que exista dumping del exterior. Esta solución se está aplicando parcialmente en la actualidad.

También está la solución de los que creen que la recesión es el paso necesario para lograr la deflación de precios y, con ello, alentar la competencia interna y externa de los productos argentinos. Esta solución es impugnada por quienes sostienen que una recesión no provoca deflación sino estancamiento con inflación, es decir estanflación.

Finalmente, la solución acariciada por el ministro Cavallo y su equipo confía en la reducción del costo argentino, impulsada tanto por el sector privado como por el sector público, contando este último para lograrlo con el insustituible instrumento que hoy estamos considerando: el presupuesto. En lo que hace al sector privado, se propugna el mejoramiento de la productividad.

Otra solución, ortodoxamente indiscutible, es la de bajar el gasto público. Digo ortodoxamente porque conozco las dificultades que tiene políticamente dicha solución en cuanto a que trae incidencias sociales, tensiones sociales de las que hemos tenido más que elocuentes ejemplos en los últimos días. Digo ortodoxamente indiscutible porque al reducir el gasto público se puede también reducir la presión impositiva a efectos de aliviar y estimular la actividad productiva del país. En cierta manera, el Poder Ejecutivo ha reconocido la verdad de esta ortodoxia, cuando ordenó una rebaja del 10 por ciento en el gasto público para el ejercicio de 1993. Desconozco en qué medida dicho propósito se hizo efectivo. Pero debo recordar que las distintas privatizaciones que se vienen efectuando de los servicios públicos han debido sin duda alguna aliviar las urgencias que exigían financiamiento por parte del Banco Central.

Destinaré la última parte de mi exposición a hacer un breve análisis de los aspectos de índole financiero contables del proyecto en consideración.

Al presentar al Congreso el proyecto de Presupuesto para el año 1994 el ministro de Economía manifestó el 14 de septiembre que "el mismo es la expresión clara y concreta de la decisión del Poder Ejecutivo de considerarlo como el instrumento básico de la política económica, una herramienta esencial de gestión".

Con esa tónica me parece positivo señalar que la estabilidad alcanzada ha posibilitado la reaparición de préstamos a largo plazo para grandes obras financiadas por organismos multinationales; es así como por el artículo 22 del dictamen se financia la continuación de la línea de transmisión de Yacyretá, se obtiene apoyo financiero en las mismas condiciones favorables de plazo y tasa de interés para más de veinticinco programas de distintos ministerios, cuya enumeración figura en la página 3874 del tomo I. Y una autorización importante para endeudamiento externo destinado al financiamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica para Atucha I y Atucha II, que figura en las páginas 939/40 del mismo volumen.

Dada la metodología con que se confecciona el presupuesto, el equilibrio con que se presenta al Congreso surge del ajuste del cálculo de recursos a las necesidades de gastos de cada área, con el agregado del artículo 5º que autoriza al Poder Ejecutivo —leo textualmente— "para introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios, en la medida que las mismas sean financiadas con incrementos en los montos estimados para recursos y para el endeudamiento público".

Sin embargo, como he dicho antes, en el presupuesto de 1993 se produjo una tendencia inversa en materia de recursos y a los pocos días de sancionado, el 10 de enero de 1993, por decreto del Poder Ejecutivo se redujo el monto global de las erogaciones en un 10 por ciento, como lo recordaba el senador de la Rúa.

El secretario de Ingresos Públicos, con gran optimismo en materia de lucha contra la evasión, ha manifestado que esa situación no ha de repetirse en 1994 por obra del alto grado de culturalización tributaria de los agentes económicos, completada con el cumplimiento de la exigencia de la facturación en cada operación, que permitirá alcanzar los niveles de recaudación en función de lo que ya se conoce como efecto Tacchi.

En el debate realizado en la Cámara de Diputados se han expresado temores en el sentido de que el desfase entre los ingresos estimados y los gastos proyectados pueda originarse por ciertas circunstancias. Tal es el caso que se daría con el nuevo sistema previsional en el que los aportes personales correspondientes a quienes permanezcan en el sistema público que estará a cargo del

Estado se verán reducidos en un 70 por ciento, equivalente a alrededor de 3.000 millones de dólares, que se transferirán a las administradoras privadas de jubilaciones y pensiones, y de acuerdo con las prestaciones a cargo del Estado emergentes de dicho sistema público se estima un déficit probable del mismo para el año 1994 de 4.000 millones de dólares, que debería cubrirse con endeudamiento. Esta cifra parece compatible con el volumen del déficit acumulado hasta el año 2014 mencionado en la planilla de desenvolvimiento financiero del sistema, que fue entregada oportunamente por el secretario Shulthess a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Una consideración especial merece la forma en que se viene concretando la relación financiera de la Nación con las provincias, a la cual se han referido también otros señores senadores. Si bien existen otros canales en virtud de los cuales se formaliza esa relación —como es el convenio sobre compensación de deudas, el pago de regalías con parte de la venta de YPF o por las presiones que el Poder Ejecutivo puede ejercer sobre los estados provinciales para que procedan a hacer los ajustes— es evidente que la principal relación, la financiera, la permanente, se concreta mediante la aplicación de las normas contenidas en la ley convenio 23.548, de coparticipación federal.

En virtud de dicha ley la participación de las provincias por sucesivos aumentos, en su conjunto, alcanzó al 56 por ciento del total y las provincias individualmente gozaron durante muchos años de porcentajes estables sobre dicho conjunto sobre la base de determinados índices de desarrollo establecidos en una de las primeras leyes de coparticipación.

Pero esto es importante: en virtud de numerosas detracciones para determinados fines, especialmente el IVA y ganancias, fundadas en alegatos de reparación histórica y necesidades del sistema de previsión social, según los cálculos hechos en la Cámara baja por el diputado Baglini, aquel 56 por ciento correspondiente a las provincias con relación a la recaudación total real ha quedado reducido a un 39 por ciento y la participación individual de las provincias, porcentualmente, se ha alterado.

Un ejemplo de esta política lo tenemos con el decreto 879/92, que conforme al proyecto de ley que consideramos viene a ser ratificado con una pequeña modificación en el inciso b) del artículo 4º. Este decreto 879/92 detrae del total de coparticipación en el impuesto a las ganancias que corresponde a las provincias dos rubros: primero, un 20 por ciento para el sistema de seguridad

social; segundo, un 10 por ciento que se destina exclusivamente a la provincia de Buenos Aires para ser aplicado al financiamiento de programas sociales en el conurbano bonaerense.

Un segundo ejemplo de la detracción sufrida por las provincias surge del pacto firmado el 12 de agosto de 1992. Conforme a éste se autorizó al Estado nacional a retener un 15 por ciento, con más una suma fija de 43.800.000 pesos mensuales, de la masa de impuestos coparticipables previstos en el artículo 2º de la ley 23.548. Aclaro que los descuentos realizados lo fueron solamente por cuatro meses.

Aparte de las detracciones señaladas antes se produce en los años 1992 y 1993 un hecho nuevo. Conforme al Pacto Federal del 12 de agosto de 1992, la Nación garantizó a las provincias un ingreso mensual mínimo proveniente de la ley de coparticipación, número 23.548, de 725.000.000 de pesos. Se trata de una cláusula gatillo que operaba en forma bimestral, por la cual el Tesoro nacional debía adelantar los fondos necesarios para llegar a ese valor, pudiendo compensar con excedentes que ocurrieran en los meses siguientes superando ese piso mínimo mensual de 725.000.000 de pesos. Esa cláusula de garantía se estableció con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993. Como la recaudación no alcanzó ese piso, la Nación aportó fondos cumpliendo lo pactado. Aclaro que ese aporte de la Nación no se hizo en forma graciosa sino atendiendo a los esfuerzos realizados por los estados provinciales y para evitar "qué tan elevada actitud derive en desequilibrios fiscales involuntarios", según decía la cláusula tercera del Acuerdo.

Ahora bien, como en 1993 la recaudación coparticipable ha superado el piso antes aludido, la Nación pretende aplicar dicho excedente al pago de las sumas que abonó el año anterior con motivo de la garantía y sólo acepta reintegrar ese excedente porcentual a las provincias que adhieran al nuevo Pacto Federal del 12 de agosto de 1993, atento a que hay algunas provincias que aún no lo han ratificado. Ya se acaba de expresar la presión que existe sobre la provincia que represento.

Para terminar con este tema de la relación entre la Nación y las provincias, diré que no existe unanimidad por parte de los ministros de Hacienda provinciales sobre la conveniencia de sustituir algunos impuestos locales enumerados en el acuerdo del 12 de agosto de 1993 por el impuesto único al consumo.

Sobre esta discusión, planteada en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la

Cámara de Diputados con los ministros de Economía de las provincias surgió, por dichos de varios de ellos que la tasa del impuesto local al consumo, aconsejado para reemplazar los otros impuestos provinciales que se sustituirían, prevista inicialmente en el 2 por ciento, fue considerada exigua para cubrir la recaudación suprimida. Por ello algunos estimaron necesario elevarla, dentro de la facultad que a cada provincia le corresponde. Tampoco hubo coincidencia entre los ministros sobre la conveniencia de transferir los sistemas jubilatorios provinciales a la Nación.

Finalmente, destaco que no he creído necesario extenderme en el análisis compartido de porcentajes de gastos correspondientes a cada una de las "Finalidades" con relación a lo asignado en el año anterior. Esos porcentajes de aumento o disminución pueden parecer importantes si surgen de una relación con una base muy baja, pero en valores absolutos en pesos resultan ínfimos para atender gran cantidad de necesidades insatisfechas en materia de salud, educación, régimen carcelario, etcétera, de las cuales la comunidad se entera diariamente por sus propias vivencias.

Solamente me limitaré a señalar como un hecho positivo el aumento de un 20 por ciento anual para Educación que, repetido durante cinco años de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Federal de Educación, permitirá duplicar los recursos. En la misma "Finalidad" se aumenta la partida para las universidades en 120 millones de pesos anuales.

En el aspecto que venimos examinando, señalaré como hecho negativo en materia de cifras que el 90,85 por ciento de las erogaciones está destinado a "Gastos corrientes" y el 9,15 por ciento a "Gastos de capital", de los cuales sólo el 3,69 por ciento corresponde a "inversión real directa".

Deseo terminar mi exposición recordando que en la primera parte, cuando me referí al programa económico en vigencia, mencioné como efecto negativo el déficit de la balanza comercial como consecuencia de un crecimiento lento de las exportaciones frente a un crecimiento acelerado de las importaciones. En la segunda parte, cuando me detuve en el análisis de algunas cifras del presupuesto, destacué como muy favorable el aumento de las partidas para Educación.

Quiero señalar en este momento que esos dos rubros merecieron mi atención porque en todos los programas que pretenden alentar el crecimiento económico, tanto en la Argentina como

en otros países, las exportaciones y la educación se indican como las principales palancas, una vez cumplido el prerrequisito de la estabilidad, para el crecimiento y el desarrollo. Los ejemplos de Japón y de Corea son citas clásicas puesto que en esos países existe una población educada que proporcionó la base necesaria para sustentar los avances de infraestructura industrial que se produjeron más tarde.

En la Convención de Bancos Privados realizada en agosto de 1993, bajo el título "El crecimiento económico y la educación", se señaló que el país debe tomar conciencia de una vez por todas de que la educación y la capacitación son en definitiva más económicas que la ignorancia.

Quiero ratificar los reclamos que ha hecho mi colega de representación acerca de la situación creada en nuestra provincia. El gobernador informó públicamente en declaraciones sumamente ilustrativas publicadas hoy por el diario "La Nación", cuál es la situación que afrontamos. Se muestra que la intervención enviada a Corrientes, primeramente por razones administrativas según se dijo y luego prolongada durante dos años por otras razones, que imputaban desgobiernos, significó nada más ni nada menos que no sólo no encontrara la solución a los problemas sino que tampoco impidiera el crecimiento de las deudas provinciales, en una cifra que ha sido estimada oficialmente por el nuevo gobernador de la provincia en 200 millones de pesos.

Estimo que nosotros, quienes representamos a Corrientes, hemos dado pruebas de comprensión en la necesidad de un esfuerzo total que supere los sectarismos políticos. Asimismo, hemos dado pruebas de que no exigimos absolutamente nada que no fuera el cumplimiento de nuestro deber cuando dimos nuestro voto para unirnos al esfuerzo común en la búsqueda de soluciones de conjunto con sacrificios también comunes. Pero creemos que también debe haber una retribución de la comprensión.

Así como entendemos la situación que ha ocurrido recientemente en Santiago del Estero —y deseamos para esa provincia que no se repitan días luctuosos— tampoco queremos que esos hechos puedan repetirse en otras partes del país, y elevamos nuestro deseo de que a nuestra provincia no se la trate teniendo en consideración su ficha partidaria sino como una provincia más de la República Argentina, que merece igual tratamiento que las otras provincias, cualquiera sea la afiliación que posea la misma.

Deseo, pues, que este presupuesto que vamos a apoyar en general —no obstante algunas reservas y disidencias como, por ejemplo, la que se ha explicitado recién respecto al crecido e injustificado monto asignado para gastos reservados y respecto del que no sabemos cuáles son sus finalidades ni cuál será la aplicación lógica que tendrá— sirva como palanca que no solamente acentúe logros que ya existen, que reconocemos y que, modestamente, hemos contribuido a obtener, sino que además afirme las necesidades de la justicia en la distribución de los recursos, y en la aplicación de los esfuerzos, y que encuentre el cauce apropiado al que todos vamos a contribuir —como lo hemos hecho— para que en nuestro país vuelva a producirse un auténtico crecimiento, no solamente en el producto bruto interno —que puede tener lecturas distintas— sino también en el bienestar y en la equidad reinantes en todas las capas de la población.

Con estas salvedades y con estas consideraciones, anuncio mi voto favorable en general para el presupuesto que estamos considerando.

**Sra. Presidente (Rivas).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

**Sr. León.** — Señora presidenta: voy a hacer un esfuerzo de actor para entusiasmarse con el convencimiento que le podría poner a mi aspiración de hacer un aporte a e te debate del presupuesto nacional, especialmente frente a esta multitud que nos está escuchando... (Risas.)

Estamos considerando la ley más importante de la Nación, la que configura el modelo de la distribución, el criterio social, el desarrollo y el crecimiento.

Sintéticamente, este presupuesto tiene como características principales el cálculo de gastos por 39.980 millones de pesos; una pauta inflacionaria del 5 por ciento anual; un producto bruto interno de 285.314 millones de pesos; una tasa de crecimiento del producto bruto interno del 6,5 tipo de cambio previsto de un peso por dólar; una tasa de interés LIBOR del 5 por ciento anual; una balanza comercial con menos 1.800 millones; un nivel de recaudación tributaria del 16,5 por ciento del producto bruto; un gasto social de 52 mil millones. Después se habla de los gastos en cultura, educación, ciencia y técnica, salud, vivienda, bienestar, seguridad social, trabajos y otros servicios.

Este presupuesto se inserta en un tipo de política económica que no se ha modificado sustancialmente respecto de cuando debatimos el proyecto el año anterior.

Señora presidenta: vamos a aprobar el proyecto en general y a oponernos a algunas de las cuestiones particulares que violan la ley de administración financiera. También nos vamos a oponer a los artículos 12 y 15 porque realmente creemos que su propia existencia hace que lo que estamos votando, si el gobierno quiere, no sirva para nada. Esto se debe a que queda ordenado para hacer lo que quiere con la facultad que le concedemos en lo que atañe a los gastos de la Nación.

Los recursos de este presupuesto tienen una composición en la que mejora la participación de la contribución en seguridad social. A su vez, la parte de los ingresos tributarios alcanza al 60 por ciento, y la seguridad al 36 por ciento.

Estoy tratando de ser sintético porque entiendo la urgencia por concluir este debate, en el que en términos generales tenemos disidencias y coincidencias. Pero lo que me hace cosquillas es la subsistencia de un modelo que, a mi criterio, no tiene legitimidad sociológica en la República.

Los gastos corrientes representan el 90 por ciento y la inversiones el 10 por ciento. Vale decir que los gastos de capital son chicos, pequeños.

Este debate tiene algo que ver con el problema de la relación del presupuesto con la evolución de la economía en su conjunto. En efecto, si sumamos la inversión que hará la administración nacional, la inversión de las provincias y los municipios y la inversión prevista por las empresas privadas prestatarias de servicios públicos privatizados, se alcanzaría alrededor de un 20 por ciento del monto total de la inversión prevista para el año.

La pregunta sería dónde están los capitales privados capaces de hacer un esfuerzo de inversión de tal magnitud que permita mantener un crecimiento sostenido del producto.

Hay diversas áreas que se aumentan: servicios sociales —lo que tiene lógica pura—, educación, salud y gastos del Ministerio del Interior y de seguridad. De todas maneras, como aquí se habló mucho de los números de este presupuesto, no deseo repetir las cifras nuevamente.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Conrado Storani.

Sr. León. — Quiero ir a una concepción de lo que pienso que debemos debatir sobre este problema. Es casi de Perogrullo afirmar la significación que siempre tiene la Ley de Presupuesto, pero en este caso pienso que tiene una doble

significación. Primero, porque hablar del presupuesto siempre es importante. Y segundo, porque la circunstancia económico-política que está viviendo la Nación hace que el presupuesto tenga y deba tener, definiciones que han de ser interpretadas correctamente.

Decíamos el otro día, cuando hablábamos del drama de Santiago del Estero, que el éxito del ministro Cavallo está en haber congelado algunos parámetros de la economía, pero que la ecuación entre la estabilidad política y la económica se compone de términos conectados: si no funciona de un lado, posiblemente no funcione de ninguno. La evaluación que trato de hacer es para ver si este presupuesto lo que está diciendo al país, sirve para el modelo que la Unión Cívica Radical está buscando para la Argentina.

No quiero buscar los fracasos de ayer. Pienso que estamos viviendo en un tiempo en que hay que mirar al país pensando en el mañana. Lo de hoy y lo de ayer tal vez sirva para el debate entre nosotros, pero nuestra proyección para el futuro debe servir de cara a las nuevas generaciones.

Nuestro proceso económico requiere, como en todo país, una dosis saludable de buena política, de justicia, y una buena conciencia solidaria. Hoy tenemos el desafío en un área que no podemos soslayar. El hecho de que en el país se peleen los propios argentinos y de que esté sublevado algún sector marginado del mercado contra la política que se pone en marcha me está diciendo que, nos guste o no, encima de nosotros tenemos una tormenta. Y el problema no está en saber a quién le sirve la tormenta para derrotar a otro sino en averiguar cómo los argentinos, integrados, podemos domar esta tormenta, que está insertada en nuestra sociedad.

Al hacer este análisis tenemos que computar que el marco internacional, que está en recesión, aunque ahora un poco atenuada, tratará de mejorar y de salvarse con algún tipo de solidaridad. Pero, si ellos tienen que salvarse y no pueden ayudar a los demás, lo harán con mucho egoísmo.

Quiero decir con esto que la Argentina tiene que trazar una política económica con la mayor independencia posible, procurando la mejor defensa de los intereses de nuestros pueblos mas que convivencias que a veces parecen muy limpias, muy solidarias, pero que no llevan a interpretar a nuestra gente.

Si miramos el mundo de hoy, vemos que el GATT terminó un poco a los tironeos, y en alguna medida salvamos la propina. También mostró que el mundo, que nos dice que tene-

mos que creer en la libertad, en el liberalismo, en lo que hacen los mercados, no juega con lealtad. Es decir que las naciones disputan los pedazos de una especie de queso internacional donde cada uno hace su juego.

Durante mucho días hablamos de la democracia, del comercio internacional, de terminar con los proteccionismos, de oponernos a los subsidios, pero en el momento culminante cada uno tironea para su lado. Por eso, cuando a veces hablo del presupuesto y de economía, reclamo a los argentinos, con el prestigio de siempre y el de ahora, la puesta en marcha, vigorosa y rápidamente, de la Comunidad Económica Latinoamericana. Si no conformamos un mercado de quinientos millones de personas autoabastecido de alimentos, de tecnología, de inteligencia y de energía, va a ser muy difícil competir en ese mundo que ahora muestra algunos de los aspectos que yo enumeraba recién. Hay guerras comerciales, hay declinación de compromisos adquiridos; y los tratados muestran poco valor frente a las realidades profundas a resolver —como digo—, según el mostrador donde algunos compran y otros vendan.

En este marco internacional, nosotros tenemos que ordenar nuestro funcionamiento económico. Si miramos a la Argentina a través de los índices de inflación bajos, las reservas mejoradas, al igual que la recaudación fiscal, podemos ser optimistas. Si miramos las tendencias de nuestras exportaciones, el comportamiento de los mercados externos para nuestros productos, los altos costos internos, las limitadas inversiones de riesgo en el sector productivo, seguramente no podremos ser tan optimistas. También debemos considerar la demora en reducir el gasto público y en aprobar algunas reformas que hagan realmente que esta estabilidad ponga en marcha un proceso de crecimiento.

Se me ocurre, analizando la situación, que no podemos dejar de reconocer por lo menos hoy, aquí, en las grandes capitales, que estamos consumiendo más de lo que producimos. Y esto es grave, ya que esta evolución negativa va reduciendo inexorablemente la calidad de vida de los argentinos.

Ultimamente se cubrió la diferencia con la venta de activos públicos y con más endeudamiento. Si a ello sumamos que la recaudación fiscal puede estimarse casi en el techo, en el límite posible —el jefe de la recaudación dijo que estamos en el límite de la recaudación posible—, y si a esto lo relacionamos con la situación económica actual, surge que debemos seguir profundizando el ajuste. Y este ajuste nos coloca

en un terreno de recesión que complica totalmente el panorama político.

Señor presidente: en los primeros años de este siglo el ingreso por habitante en nuestro país era igual que el de Alemania y duplicaba al del Japón. Ambos países, Alemania y Japón, tuvieron guerras y las perdieron, y hoy tienen un producto per cápita superior al nuestro en siete veces y media. Es decir que no hicimos bien algunas cosas.

La Argentina, que fuera líder de América latina, hoy observa que su principal empresa exportadora, YPF, está en el puesto diecisiete, habiendo llegado a ser la primera empresa de América latina. Pero hoy, repito, está en el puesto diecisiete, y exportamos un poco más de 600 o 700 millones de dólares. Por lo menos ésa es la cifra correspondiente al año 92 que poseo y que resulta mínima comparativamente si pensamos que la empresa petrolera de Venezuela exporta 11 mil millones de dólares.

Estamos intentando mejorar esta situación comercial.

Justamente, en la Comisión hoy nos referíamos al tema. Aquí está el senador Cafiero, que participaba de esta conversación. Se hablaba sobre cómo hacer para que la Argentina realmente empuje sus exportaciones. Y hablamos del banco que se creó: el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Por ahora su actividad es absolutamente nula.

Como segundo tema —quiero ser rápido— pero a veces me entusiasmo con la exposición— quiero mencionar un problema que considero básico porque hace a la legitimidad sociológica en nuestro país y que tiende a incrementarse: es el nivel de desocupación. El propio ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos aceptó que la desocupación había avanzado. Y, repito, tiende a incrementarse: el 10 por ciento de la población activa contra el 6,9 por ciento del año pasado.

Nos está pasando lo que sucede en el mundo. Entonces, es el modelo el que está generando esa injusticia en la distribución, porque pareciera que sirve para que exista una gran acumulación arriba. Tenemos conciencia de que en nuestro país diez empresas tienen desde hace cuatro años casi el poder del Estado. Y no sé si esto es bueno. Me asusta.

Estamos de acuerdo con algunas privatizaciones, pero no en la forma en que algunas se han hecho y cómo se están realizando otras. Porque las privatizaciones implicaban mejorar la tecnología, defender al usuario y bajar los costos, tratando de alentar un esquema distinto

al de las empresas del Estado que, reconocíamos, tenían problemas porque daban déficit.

Pero esto no está pasando. Y da la impresión de que se está incrementando la desocupación, hecho al que le doy mucha importancia. Porque la desocupación hace que los jóvenes del interior vengan al Gran Buenos Aires. Una estadística que no hice yo, sino el INDEC, determina que existe un millón trescientas mil personas en un grado de pobreza bastante doloroso en el Gran Buenos Aires. Ello, porque hemos reducido el sector estatal sin la correlativa reducción del gasto público. Al mismo tiempo, existe una gran incidencia en la inmigración en el país, lo que nos crea un serio problema, que todos los señores senadores conocemos.

La situación es semejante a la que se da en el mundo. El primer mundo está lleno de desocupados. La Comunidad Europea tiene 20 o 25 millones de desocupados. Y junto con los Estados Unidos podría llegar a los 50 o 60 millones de desocupados. A tal punto que algunos de ese primer mundo que cantaba loas al liberalismo están pensando que la teoría de Keynes tendrá que volver a insertarse en el manejo de algunas actitudes del crecimiento económico, como es la de realizar las grandes inversiones estatales.

Creo que esto nos lleva a considerar la situación. El ministro señaló vez pasada que no le importaba el hecho de que tuviéramos un déficit comercial si las inversiones venían. Técnica-mente puede ser así. Pero las inversiones que han venido no son casi de riesgo. El otro día, cuando bajó la Bolsa en Nueva York tuvieron que bajar las tasas de interés en Buenos Aires porque algunos tenían miedo de que se llevaran los capitales a otra parte. Esto es señal de una actitud que no debemos aplaudir porque muestra que estamos siendo totalmente dependientes.

Ya que admiramos tanto al primer mundo, debo decir que defiende sus mercados internos porque el origen del problema en él está definido concretamente como una consecuencia directa del uso de la tecnología, de los subsidios y de las limitaciones del comercio mundial.

Lo que pasa es que ahora han creado los robots, que no tienen alma y no pueden comprar lo que la propia tecnología produce. Un obrero que trabaja es un hombre que puede comprar lo que produce. Un robot no puede hacerlo. Entonces, con la tecnología también avanza la desocupación.

A mi criterio, el problema de la desocupación requiere una atención especialísima. Evi-

dentemente, se trata de uno de los orígenes de los problemas sociales que está sufriendo el país.

Un desocupado puede delinquir en función de su desesperación. Herman Hesse decía que un hombre aconsejado por la desesperación puede realizar los actos más heroicos pero también los más irracionales. Es posible que algún chico pueda llegar a asaltar un colectivo produciendo un acto irracional porque en su casa tienen hambre.

Hace instantes decía que solamente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires hay 1.500.000 pobres, lo que representa el 17,8 por ciento de la población que no cubre sus necesidades mínimas.

Oportunamente, presenté en este Senado un proyecto por el que solicitaba la liberación del impuesto al valor agregado para algunos productos de la canasta familiar como ciertos medicamentos y para algunos insumos de la producción agraria. Pero el ministro de Economía aparece privilegiando la caja. Lo que el ministro debe comprender es que la caja es importante pero el hombre debe ser mucho más importante que las cuentas. Las cuentas no tienen hambre y los hombres sí.

Tenemos que dejar de lado el capitalismo salvaje denunciado por el Papa para adoptar una actitud mucho más humana y solidaria en lo económico.

Esta situación ha producido mucha economía marginal. Tenemos miles y miles de quioscos como consecuencia de ella.

En los países del Este vemos que la economía marginal ha funcionado de tal manera que en Hungría, por ejemplo, el 50 por ciento de lo que allí se produce es de carácter informal y un gran porcentaje está dado por el contrabando, cosa que no debe aplaudirse.

El Estado y las empresas públicas redujeron 98 mil cargos, los bancos oficiales más de 6 mil y se espera una disminución de muchos miles más de empleados en los organismos privatizados. Creo que la estabilidad produce en algunos niveles de la economía desestabilidad.

Voy a salirme del libreto para decir que leí el otro día que se otorgó un crédito por más de 500 millones de dólares al gobierno nacional para racionalizar la administración, es decir, despedir gente. Me preguntaba si en lugar de echar a 20 mil empleados se podría invertir esa cifra para crear alguna fuente de trabajo en la pequeña y mediana industria o

se podría dar un aliento a la producción en zonas marginales. No nos sirve que con esos 500 millones se paguen indemnizaciones para que la gente se ponga un quiosco o maneje un taxímetro. Este país no nos sirve; tenemos que crear puestos para que la gente produzca riqueza.

Me parece que por ahora esto es lo que se nos está quedando en el camino.

El principal asesor del presidente Clinton, Robert Reich, escribió en "El trabajo en las naciones" que "el mayor desafío norteamericano para el siglo XXI es la capacitación de los recursos humanos", afirmando que "las sociedades que vivirán mejor, serán aquellas que tengan la habilidad de producir los bienes, con mayor valor incorporado".

Creo que en esto no estamos creciendo. Ya llevamos cierto tiempo de estabilidad como para haber logrado una política mejor.

En el pacto fiscal, el ministro aparece como el unitario número uno, pues la Nación le quiere decir a las provincias cómo tienen que vivir, qué tienen que cobrar, qué impuestos les convienen, y si no, "no les doy tal cosa". Esto ya lo hemos dicho. El ministro Cavallo reconoció que las exportaciones están estancadas. El déficit comercial de este año será un 15 o un 18 por ciento mayor que el del año pasado. Aquí en el presupuesto nos hablan de un déficit de 1.800 millones de dólares y estamos por llegar este año a 1.300 o 1.400. Esto es importante porque estas cifras se insertan en el funcionamiento del presupuesto.

También nos hablan de la tasa de crecimiento del producto bruto, del 6,5 por ciento, y después nos han dicho que será del 5 por ciento. Esto juega sobre los valores que esta Cámara está estudiando también para el presupuesto.

Quiero dar un ejemplo de por qué tenemos que alentar la producción.

Leí en un libro el ejemplo de la firma Toshiba del Japón, que tuvo ventas por 22 mil millones de dólares anuales, con aproximadamente 170 mil empleados en un país con 344 mil kilómetros cuadrados. ¿Cuántas veces más tierra tenemos nosotros? Una sola empresa vende el doble de nuestras exportaciones. Ellos perdieron la guerra y no tienen casi tierras. En este momento, pese a la preocupación por el avance del GATT, Europa sigue cerrando mercados a nuestros cereales y a nuestra carne. Este último año los subsidios en agricultura alcanzaron cerca de 354 mil millones de dólares y sólo el trigo significa en el mundo 52 mil millones de dólares. Entonces, sabemos que es difícil com-

petir y que no podemos capitalizarnos, pero tenemos que modificar la política. No podemos estar contentos con que se ajuste sólo aquí adentro, porque evidentemente no estamos instalando crecimiento en el país.

Aquí está el señor senador Bittel que sabe que en el Chaco no nos queda ni una sola industria —al igual que en muchas provincias— y si bien la producción agropecuaria es importante y se esfuerza, está en grave crisis. Dice el ministro Cavallo, que el que no tenga 200 hectáreas tendrá que dejar de producir, pero nosotros no podemos echar a ese hombre a una canasta. O sea que reclamamos algún tipo de flexibilidad en la fijación de las políticas económicas.

Nosotros no somos economistas. Cavallo sabe más de economía. Pero somos políticos, y constituía una actitud política pensar que la apertura casi salvaje que hicimos en la economía no nos venía bien. Ahora vemos que esa apertura significó este tremendo desfasaje entre las exportaciones y las importaciones del país, lo que ha llevado a agrandar nuestro déficit de la balanza comercial, y también determinó que el ministro tuviera que aceptar proteger algunas de las industrias, como la textil. Y claro, desde atrás nunca se hace la protección como realmente está reclamando nuestra economía. Nuestra apertura económica debe ser totalmente analizada. Los países desarrollados destinan fondos muy importantes para ello y una de las cosas que hacen es buscar que aumente el empleo y los ingresos del exterior. En esto, nosotros ahora vamos a contramano. La CEPAL decía que los países del Asia apoyaron su industrialización sustituyendo importaciones en forma selectiva. Que venga todo lo que sea bienes de capital, pero algunas de las cosas que han venido —y nosotros las vemos en las vidrieras— no hacen a nuestro desarrollo.

En el país se está generando un nuevo endeudamiento. El plan Brady, del cual sigo diciendo que es la horca de la economía argentina para las nuevas generaciones, creó la posibilidad de volver a endeudar a nuestro país; y lo estamos haciendo a través de las obligaciones negociables, pues hay empresas que están tomando dinero del exterior, que es más barato. Algunas lo toman con avales.

Me parece que hay algo de cierto en que ahora el Estado argentino va a avalar a Iberia porque dice que tiene déficit. O sea que el Estado, que no le da 10 millones de dólares a un gobierno del interior para que dé de comer a los que trabajan, está por arriesgar avales a empresas extranjeras que han comprado por mo-

nedas las empresas nacionales. Espero que aquella comunicación al Banco Central denominada A 251, del propio doctor Cavallo, que transformó la deuda privada en pública, no se tenga que repetir.

Con respecto a este tema del endeudamiento nuevo quiero decir que la calificadora norteamericana de riesgo Moody's —esta información del diario "Clarín" tiene fecha del 15 de diciembre pasado, es decir, es de hace una semana— calificó como B-1 la emisión de 1.000 millones de dólares en bonos hecha por el gobierno argentino. Si bien constituye una mejora respecto de otras evaluaciones anteriores Moody's sigue manteniendo a los títulos argentinos en una calificación de nivel medio, con un cierto grado especulativo. Esta firma dice además que la Argentina puede tener problemas para pagar el servicio de la deuda por el pobre desempeño de sus exportaciones. Creo que el problema de las exportaciones es una de las tormentas que tenemos encima, como decía. Trato de no repetir los importantes discursos que aquí se han pronunciado.

Tengo también una información de un banco norteamericano, el American Express, que encargó un estudio sobre la economía y la posibilidad de integración de la Argentina, Chile y México. El autor del estudio es Helmut Reisen y quien hace la introducción es nada menos que Dornbusch. Reisen habla de los fondos que están llegando a nuestro país y distingue entre fondos fríos y calientes. Dice que los fondos que llegan son "hot money", es decir, los que andan de pasó; están un día y mañana no se sabe. Helmut Reisen aprecia que la economía argentina se está desinflando lentamente. Agrega que la competitividad está seriamente dañada porque el punto de partida, la convertibilidad, fue un tipo de cambio real totalmente atrasado; y esto todos sabemos que es cierto. No lo digo para ser pájaro de mal agüero sino para responder a la actitud de una bancada opositora de custodiar su papel institucional —justamente de opositora— sin que implique para nada celebrar por esto que nos vaya mal, en lo más mínimo, en todo aquello que signifique el esfuerzo y el crecimiento argentinos.

Reisen sostiene que la Argentina es un país caro en términos internacionales. Es cierto; somos uno de los países más caros del mundo. Por ejemplo, ayer mi mujer compró un pan dulce en veintidós pesos —veintidós dólares— cuando en cualquier país desarrollado vale la cuarta parte. Su argumento —esto del país caro— gira en torno de lo siguiente: para conseguir un

aumento de la productividad que compense el atraso se necesitan niveles de inversión y de ahorro sustancialmente mayores que los existentes.

Rudiger Dornbusch, autor del prólogo de este trabajo y que estuvo hace poco tiempo en Buenos Aires, parece que ahora cambia su punto de vista. Habla de un atraso en nuestro tipo de cambio; en ese trabajo expuso que México y la Argentina todavía tienen monedas sobrevaluadas; hecho que en privado sus ministros de Economía admiten como cierto.

Señor presidente: la CEPAL acaba de elaborar un informe diciendo que la Argentina es uno de los países que más creció en América, pero con un alto nivel de desempleo. Anteriormente me refería al proteccionismo que debe encarar el ministro Cavallo. Según datos del Servicio de Información Económica la resolución 1.554 incluyó 140 posiciones arancelarias y elevó sustancialmente los derechos específicos. Por su parte, un empresario textil señala que existen diferencias del 50 al 60 por ciento en relación con lo solicitado por el sector. Los empresarios de COPAL —los de la alimentación—, que hablan formidablemente bien de la conducción económica, ahora empiezan a librar la batalla contra el aperturismo y también buscan el proteccionismo.

Al comienzo de mi exposición me referí al marco de nuestras dificultades. Por ahora, al margen de lo que podemos leer en algunas publicaciones especializadas, la prensa de nuestro país es formidable en su calidad de información. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher, expresó que para su país no existe una región del mundo más importante que Asia. Entonces, mientras nos aproximamos al fin del siglo, Estados Unidos parece que comienza a mirar hacia Asia y el Pacífico. Esto muestra que el achicamiento de la geografía, la provincialización internacional, pone en marcha cambios estratégicos que la Argentina —cualquiera sea su gobierno— debe controlar con inteligente prospectiva.

Este no es problema de partidos. Nosotros creemos que necesitamos un proyecto que, por encima de los partidos, sea permanente, que sea el proyecto de la Nación. Después veremos de qué color lo pintamos, pero me parece que la Argentina está necesitando ese proyecto.

En Asia están Japón y los nuevos "tigres". ¿Quién de nosotros podía imaginar que Malasia y Corea, que fueron barridas por la guerra, o Taiwán, una isla, fueran ahora los "records" del mundo en materia de crecimiento económico?

China está despertando y también tiene ya un crecimiento "record". Cuenta con mil millones de habitantes, lo que representa, sumados, los mercados de los Estados Unidos y la Comunidad Europea. Pero ellos son realistas. Por ejemplo, Japón habla de la economía de libre mercado para afuera, pero no lo practica adentro pues allí se pagan los precios más altos del mundo con el objeto de que su industria funcione. Su principal alimento, el arroz, lo pagan dentro de Japón cinco veces más que en los mercados internacionales. El desempleo de Japón es uno de los más bajos del mundo; alcanza el dos y medio por ciento.

En 1975 América tenía el mismo comercio que Asia. Si ambas regiones hubiesen crecido al mismo ritmo, los Estados Unidos tendrían hoy cuatro millones más de puestos de trabajo. El propio Departamento del Tesoro, alguno de cuyos miembros fue condecorado por nuestro gobierno, ha reconocido el error de no haber impulsado el crecimiento de América latina.

De cualquier modo, creo que nosotros también somos responsables de ese error. ¿Cuánto tiempo estuvimos —y todavía seguimos estando— haciendo pagos relacionados con el problema de nuestra deuda externa?

El acuerdo firmado por el presidente Clinton con México y Canadá, que en quince años eliminará restricciones para el comercio y las inversiones, no admite los mismos beneficios en materia de inmigraciones. Estados Unidos está por hacer un tremendo muro, mucho más grande que el de Berlín, para impedir que ingresen en ese país los mexicanos desocupados.

En ese acuerdo, Estados Unidos representa el 69 por ciento de la población involucrada; México, el 24 por ciento y Canadá, el 7 por ciento. En materia de producto bruto interno, México participa con el 5 por ciento, Canadá con el 8 por ciento y Estados Unidos con el 87 por ciento.

Menciono estos datos porque la vez pasada vi por televisión al señor presidente de la Nación refiriéndose al NAFTA antes de que el Congreso norteamericano lo aprobara, y él decía que desde aquí nos solidarizábamos con ese acuerdo. Hoy escuché al canciller, quien dijo que hasta 1995 no podemos hablar acerca de nuestro ingreso en el NAFTA.

Creo que no tenemos que ser muy voluntaristas respecto del trazado de algunas políticas. Entiendo que es importante que el Parlamento tenga más relación con el Poder Eje-

cutivo. Hay naciones del mundo, algunas "piratas", como Inglaterra, que tienen una civilización política en función de la cual todas las semanas los ministros del Poder Ejecutivo van al Congreso a explicar temas. A veces aquí la bancada mayoritaria —unos y otros, según los tiempos— parece querer esconder a los ministros. Lo cierto es que ellos saben más cosas que nosotros porque tienen más información.

Lamentablemente, nuestros parlamentos no funcionan todavía con toda la sabiduría que debieran, pese a nuestras mejores intenciones, porque no tenemos toda la información. En la Argentina es difícil que un parlamentario derrote a un ministro del Ejecutivo en un debate. Cuando tengamos la informatización y podamos hacer el seguimiento de lo que está pasando a través de una intensificación de las relaciones con el Poder Ejecutivo, podremos evaluar correctamente. Allí pueden tener la técnica y acá tenemos el campo político. Allí están los que tienen que hacer el puente y aquí los que tienen que decir dónde debe estar ese puente.

Por ejemplo, nunca debatimos aquí el problema del GATT, siendo que éste es un problema importantísimo. Y lo que hemos conseguido fue porque se pelearon y nos quedó algo, no porque nos hayan reconocido. Al final pudimos pescar algo.

Los otros días escuché que nuestro secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ingeniero Solá, dijo que podíamos ganar con esto unos 400 millones de dólares de exportaciones. Pero el mismo secretario de Agricultura también decía en "La Nación" del 16 de este mes, hace seis días, que la banca privada y provincial no está cumpliendo adecuadamente con los requerimientos financieros de los productores agropecuarios. Todos sabemos que es así. Yo creo que esa banca, que gana tanto dinero, a la que se respeta tanto, a la que a veces se le da el lujo de poner a uno de sus integrantes manejando el Banco Central de la República, a la que hemos casi honrado designando embajador en Nueva York al presidente de un banco extranjero, tiene que comprender que somos un país que no puede vivir como ellos quieren, sino que tiene que hacerlo y desarrollarse como nosotros queremos.

Recuerdo que cuando fue candidato a gobernador en el año 1987 dije un día en mi provincia, que si yo fuera gobernador no autorizaría que se estableciera alguna vez un banco extranjero en el Chaco si no lo hacía con mu-

cho dinero para invertir. Al respecto debo decir que en muchas ocasiones los argentinos tenemos una actitud peligrosa, porque algunos creen que los bancos extranjeros son más serios que los nacionales y entonces gente que está trabajando y produciendo todos los días, en lugar de depositar su dinero en el banco de la provincia lo hace en el extranjero. A raíz de ello recuerdo que un señor llamado García Belsunce me preguntó si había dicho eso, y le respondí que sí, porque pensaba que podría pedir que no se autorizara su instalación.

Pienso que uno de nuestros problemas es que si alguien es amigo del presidente del Banco Central puede abrir un banco y contar con un crédito que le permita comenzar a trabajar con dinero que ni siquiera es suyo. Incluso se ha dado el caso de un presidente del Banco Central que estuvo vinculado con otros sectores.

Me refiero al doctor González Fraga, quien integra el directorio de varias empresas. Creo que ahora está trabajando en los fondos de pensión, que son el negocio del momento. También asesoró a los bancos extranjeros que nos cobraban la deuda externa y después fue presidente del Banco Central. Al respecto, opino que la Argentina no pudo darse este tipo de lujos porque afectamos nuestras responsabilidades nacionales.

Señor presidente: ya hablé mucho más de lo que había pensado. Creí que tenía poco para decir, pero resulta que me sobran papeles por todos lados. Entonces, lo que quisiera pedir es que hagamos un esfuerzo para que este éxito de la estabilización signifique una base importante para nuestro crecimiento. Si no exportamos, si no producimos, no va a llegar nunca el crecimiento que necesitamos. En cuanto al déficit, creo que no es necesario que ahora me refiera a él.

A lo que sí quiero referirme por un momento es a las economías regionales. Yo soy un hombre de provincia y puedo asegurar que si no pueden producir las economías regionales no sé cómo vamos a exportar. Las ventajas económicas comparativas que Dios nos dio están siendo superadas por las ventajas competitivas. Esto da como resultado que cada vez más las soluciones económicas estén en manos de menos sectores.

La Argentina está exportando cerca del 5 por ciento de su producto bruto interno, Italia exporta el 13 por ciento y Alemania el 21 por cien-

to. Por su parte, Brasil el año pasado exportó 40 mil millones de dólares, mientras que Corea pasó de exportar el 3 por ciento de su producto bruto interno en 1960 al 40 por ciento en 1990 —y me imagino cuánto estará exportando ahora—.

No podemos perder el tren transformador de la historia de nuestro tiempo. Estamos viviendo una época de grandes transformaciones. El achicamiento del mundo y la regionalización de los problemas tienen que ser utilizados con talento. Tenemos que empujar para que nuestras generaciones se instruyan, se perfeccionen y compitan.

En función de la estructura financiera actual nosotros aparecemos con déficit frente a muchos argentinos que quieren estudiar y trabajar. ¿Cuánto cuesta becar a un alumno? Por eso no se va a fundir el país. Tenemos que becar al que no tiene y no puede. ¿Cuánta inteligencia se habrá perdido en las villas miseria de la Argentina porque alguien muy inteligente nació marginado de los mercados de la inteligencia y de la escuela, y tuvo que salir a pedir limosna o a trabajar muy joven, sin poder ser capaz de apreciar la significación que tiene prepararse para la competencia de nuestro tiempo!

Por otro lado, quisiera decir lo siguiente. Los representantes del Fondo Monetario Internacional siguen llegando a Buenos Aires. El otro día se quejaron al gobierno porque el ministro Cavallo está por achicar los aportes patronales para hacer una especie de subsidio o devaluación disimulada con relación a los costos internos, supongo que con el ánimo de exportar más. Por eso se han quejado.

Pero ese mismo Fondo Monetario Internacional, que maneja el dinero de las grandes naciones y que es producto del campo triunfador de la última guerra mundial, acaba de hacer una declaración que dice, refiriéndose al primer mundo, que los niveles de desempleo en los países industrializados con costos sociales inaceptablemente altos están destruyendo el tejido social. Y menciona también la profunda incomprensión del rol histórico del comercio y de la integración económica.

Esto es lo que estamos viviendo. Hay una estructura internacional orientada por los países más fuertes en la pelea, pero no los más fuertes para que el mundo viva más feliz y pacíficamente.

A Haití no hay que ir a seguir matándola de hambre. Habría sido bueno que los Estados Unidos, que mandaron gente a alimentar a Somalia,

hubieran enviado gente a alimentar a Haití, que es parte de Latinoamérica.

Entiendo que la Argentina y América tienen un papel importantísimo que cumplir en este juego de la economía.

Voy a dejar de lado mis papeles y diré que a mí me tocó pronunciar un breve discurso junto a Marcelino Oreja, quien acaba de ser nombrado principal hombre de la Comunidad Europea. Va a ser uno de los mandamás de toda la Comunidad. En Estrasburgo había una reunión sobre Europa y América latina en la que, por supuesto, se hacía un debate muy civilizado entre gente de las dos regiones. Hubo una comida de cierre, y Marcelino Oreja —que también fue ministro español— en su discurso habló de los dictadores de América latina y del milagro europeo. Luego, cuando me tocó hablar en nombre de América latina —en ese entonces era presidente del Parlamento Latinoamericano— dije muy respetuosamente que nosotros no nacimos para ser dependientes ni para que nadie nos juzgue de menos. Y les agregué a los amigos de Europa que todos los dictadores que aparecieron por América latina se copiaron de los tres hombres más perversos del siglo, que fueron europeos: Franco, Hitler y Mussolini. Después dije que el milagro de Europa, del que ellos hablaban, no era tal, porque era el Plan Marshall, se le compraba a Europa todo lo que producía, sin ningún tipo de proteccionismo, y se le enviaban los bienes de capital.

El milagro de este tiempo fue y es América latina, porque estuvimos pagando un Plan Marshall por años. Quieren que nos establezcamos democráticamente, pero nos hacen proteccionismo. Tenemos hambre y queremos crecer, pero crean subsidios y nos derrotan. No podemos capitalizarnos.

Con todo esto quiero dejar planteada la idea de que, por encima de nuestras circunstancias, tenemos que promover una integración saludable en la defensa de nuestros intereses.

Agradezco la paciencia que ha tenido este cuerpo para escucharme. Dejo señalado que no vamos a votar favorablemente algunos artículos. Creo que el artículo 15 es una autorización para que se haga lo que se quiera con este presupuesto. Ya fue leído por el señor senador de la Rúa, por lo cual no lo voy a repetir.

Me quedaron cosas por decir con relación a la situación fiscal de las provincias. La mía tiene un 72 por ciento en gastos de personal en función de sus ingresos. Habría que pedirle al ministro que en este aspecto tenga la misma com-

presión que tiene para con algunas áreas del sector externo.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

**Sr. León.** — Un ministro de Luis XIV dijo: "Dénme buenas políticas y yo les daré buenas finanzas". Tal vez, el reclamo que haya que hacer es que nos juntemos todos, por encima de los partidos, y ayudemos desde el campo políticos a las buenas políticas y que quienes mandan en la economía se inserten en el ruedo para que todos los argentinos podamos tener buenas políticas y buenas finanzas. El pueblo nuestro lo merece.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Genoud.** — Señor presidente: la posición del bloque de la Unión Cívica Radical ha sido expresada por el señor senador por la Capital Fernando de la Rúa, quien en una sólida exposición ha formulado consideraciones en torno a este proyecto de ley de presupuesto, consideraciones que fueron muy bien complementadas por la alocución que acaba de realizar el señor senador por el Chaco.

Prometo utilizar no más que tres o cuatro minutos para traer una inquietud de los legisladores provinciales de Mendoza, no sólo de la Unión Cívica Radical sino de todos los partidos políticos de mi provincia, y también de los sectores sociales mendocinos. Creo que voy a interpretar una objeción extendida en el ámbito de la mayoría de las provincias argentinas con relación a este proyecto de ley de presupuesto.

Las observaciones que vamos a formular a esta iniciativa significan, de algún modo, una reiteración de críticas que hemos hecho ya a otros proyectos de presupuesto que, a su hora, también fueron aprobados en general por la Unión Cívica Radical.

En primer lugar, señor presidente, observamos el artículo 33. Y voy a hablar en lenguaje casi telegráfico para no utilizar más tiempo del que me comprometí a emplear. Por el artículo 33 se incorpora a la ley de presupuesto la ratificación del acuerdo fiscal federal, autorizando al Poder Ejecutivo para que ratifique este pacto que en su oportunidad suscribieron gran parte de las provincias argentinas con el Poder Ejecutivo de la Nación.

Entendemos, señor presidente, que esta disposición es violatoria de la Ley de Administración Financiera del Estado, que en su artículo 20 establece que no se pueden introducir en la ley

de presupuesto normas de carácter permanente como es, en este caso, el Acuerdo Fiscal Federal.

Si recordamos el contenido de este Acuerdo, advertiremos que tiene un alcance de tres años, toda vez que establece condicionamientos para las políticas tributarias de las provincias argentinas que han suscrito el referido acuerdo hasta 1995. Quiere decir que en este proyecto de ley de presupuesto se incorpora por la ventaña a este acuerdo fiscal que no fue nunca debatido en el Congreso, pese a que hubo un reclamo no sólo de la Unión Cívica Radical sino también de otros bloques de la oposición. Fue aprobado por algunas Legislaturas provinciales que ratificaron el contenido del mismo, ya que había sido suscrito por sus gobernadores, pero nunca pasó por las Cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación, entonces aparece de rondón en el proyecto de ley de presupuesto, en violación del artículo 20 de la Ley de Administración Financiera del Estado.

En segundo lugar, señor presidente, este proyecto de ley de presupuesto contienen una disposición, en el artículo 29, que ratifica todos los decretos de necesidad y urgencia que tienen en su totalidad un contenido netamente tributario y que alteran el sistema de coparticipación federal de impuestos de las provincias, quedan convalidados por esta ley. De ese modo, quedan sin efecto todas las impugnaciones que las provincias argentinas han formulado ante la Comisión Federal de Impuestos.

Objetamos también, señor presidente, que en este proyecto de ley de presupuesto hayan sido incorporados los regímenes de coparticipación especiales como son, por ejemplo, el Fondo Nacional de la Vivienda, el Fondo Vial y el Fondo Eléctrico. Además, por el artículo 6º, al ser incorporados al contenido del presupuesto de la Nación, el Poder Ejecutivo puede hacer modificaciones a esas partidas, lo que entraña un riesgo financiero para las provincias.

Nos oponemos y observamos también el artículo 19 del proyecto de presupuesto referido a la promoción económica no industrial, que originariamente disponía de partidas de hasta 180 mil dólares para San Juan, La Rioja y Catamarca. En este proyecto se renuevan esos cupos, elevándolos a 5 millones de dólares para todo el ejercicio presupuestario en cada una de esas provincias.

Hubo airadas quejas en algunas legislaturas provinciales, más concretamente en la de mi provincia, señor presidente, pues Mendoza sigue siendo víctima de estos sistemas de promoción tanto industrial como agropecuaria que

no responden a un sistema armónico de crecimiento del país, sino que constituyen verdaderos parches que huelen más a privilegios o negociaciones políticas que a un sistema que permita un desarrollo integrado del país, reitero, tanto en el orden industrial como agropecuario.

Por eso, señor presidente, solicitamos que si hay una partida de cinco millones de dólares para la promoción económica no industrial de estas tres provincias, se apruebe un artículo complementario, que debería llevar el número 19 bis, de tal modo que este beneficio sea extendido a la totalidad de las provincias argentinas.

Tenemos una herramienta que aprobamos después de cuatro años de trabajo parlamentario. Me refiero a la ley de promoción industrial, que requería de una ley complementaria para poner en vigencia un sistema con un costo fiscal acotado y que, por otra parte, cerraba toda posibilidad de fraude fiscal, tan común a los regímenes de promoción industrial. Jamás se puso en funcionamiento ese sistema a partir de la designación del ministro Cavallo al frente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, pues entendió que en su plan económico no cabía régimen de promoción alguna.

También observamos el artículo referido a partidas presupuestarias en materia de obras públicas. En general, los recursos destinados a este objeto en todo el país llegan a la suma de 1.300 millones de dólares, de los cuales 391 millones se destinan a la provincia de Buenos Aires. Es decir que el 31 por ciento de estas erogaciones tiene como beneficiaria a esa provincia. El año pasado fue mucho más: el 50 por ciento de los mil millones de dólares que contenía el proyecto de presupuesto para 1993. Sin lugar a dudas ha existido un criterio político para la determinación de los montos que se imputan a obras públicas.

He realizado un análisis comparativo entre el porcentaje de coparticipación federal de impuestos, que siempre debe tomarse como parámetro para la distribución de este tipo de recursos, y el porcentaje que recibe cada provincia en concepto de obras públicas. Y así se advierte la absoluta disparidad de montos. La provincia de Buenos Aires tiene un 21 por ciento de coparticipación federal de impuestos y se lleva el 31 por ciento de los recursos para obras públicas; Córdoba tiene 9 por ciento de coparticipación y se lleva el 2 por ciento en concepto de obras públicas; el Chaco tiene el 5 por ciento y se lleva el 1,3 por ciento de los 1.300

millones destinados a obras públicas; Mendoza tiene el 4 por ciento de coparticipación y se lleva el 2 por ciento, y San Luis tiene el 2,32 por ciento de coparticipación y solamente se recibe el 0,61 por ciento de esos 1.300 millones de dólares en materia de obras públicas.

Reitero entonces que no ha existido criterio financiero alguno, como hubiese correspondido, para la distribución de fondos destinados a obras públicas, sino que seguramente ha primado un criterio de orden político, que no compartimos.

**Sr. Cafiero.** — ¿Me permite una interrupción?

**Sr. Genoud.** — Sí, señor senador.

**Sr. Cafiero.** — Cuando se hace esta comparación entre el monto para obras públicas que se destinan a la provincia a la que represento y el porcentaje que tiene en la coparticipación federal, creo que se omite considerar la existencia de otros índices para medir la razonabilidad de los porcentajes. Buenos Aires tiene el 40 por ciento de la población del país, señor presidente. El hecho de que reciba el 21 por ciento de la coparticipación federal es una manifestación de una cierta discriminación fiscal respecto de Buenos Aires, pero al revés de lo que parece sustentar el señor senador por Mendoza.

**Sr. Snopek.** — ¿Me permite una breve interrupción, señor senador?

**Sr. Genoud.** — Para concretar la idea, si el cálculo que el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos ha tenido en cuenta para distribuir los 1.300 millones de dólares para obras públicas fuera estrictamente el de la población, que es el índice que toma el señor senador Cafiero en su intervención, sería pues de orden matemático. Me pregunto cómo Córdoba, de un total de 1.300 millones de dólares recibe nada más que 27 millones para obras y servicios públicos cuando su población debe ser de aproximadamente 2.500.000 habitantes. En el caso del Chaco, recibe solamente 16 millones de dólares. De manera que el criterio de la población no tiene ningún tipo de relación con lo que aparece en la nómina contenida en el capítulo pertinente a obras públicas del presupuesto.

**Sr. Snopek.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Genoud.** — Como elemento ejemplificativo, el presupuesto para obras públicas del año pasado fue de mil millones de pesos para todo el país y la provincia de Buenos Aires se quedó con 500 millones mientras que mi provincia recibió solamente 8 millones. De tal modo que no hay un criterio que resulte coherente a la

hora de distribuir esos fondos. Por otra parte, no hay explicación alguna que establezca cuál es el criterio o parámetro que ha tomado el ministerio para hacer la distribución.

**Sr. Snopek.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Genoud.** — Ahora sí, señor senador.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Snopek.** — Quiero agregar algo que hace al tema y que representa una de las preocupaciones que he planteado a los funcionarios que concurrieron a nuestro bloque.

En el caso concreto de Jujuy, la inversión pública prevista y autorizada en el presupuesto de 1993 era algo superior a los 17 millones de pesos pero no se llegó a ejecutar el 30 por ciento. Así es el estado de los caminos de mi provincia.

Quiero decir otra cosa más: creo que ni siquiera hay criterio político para hacer la distribución porque la política es, ante todo, ciencia, arte y virtud del bien común y creo que en esto no se está procediendo con equidad y justicia.

Que me perdone mi querido y admirado amigo el senador por Buenos Aires, pero si seguimos con este criterio, que hagan muchas casas del FONAVI para que vengamos la gente de Jujuy a vivir acá. Este año ha bajado de 17 a 11 millones, lo que quiere decir que en el 94 nos van a dar lo que no se ha ejecutado en el 93, y esto es lastimoso. Se lo he dicho al secretario de Obras y Servicios Públicos en mi provincia. No creo que sea con criterio político ni menos partidista, porque gracias a Dios tradicionalmente mi provincia ha sido justicialista, más allá de nuestros desajustes.

Voy a demostrar cómo no hay ni un mínimo de equidad en la distribución de los fondos para obras públicas, respetando aunque más no sea algunos de los indicadores mínimos de distribución. A título de ejemplo, menciono que en el caso de Jujuy la inversión presupuestada es de 20 pesos por habitante, en tanto que el promedio nacional es de 37 pesos por habitante. Por otra parte, el monto asignado a mi provincia en dicho rubro representa el 0,9 por ciento de la inversión pública total en el país, mientras que Jujuy participa del 1,6 por ciento de la población del país y posee un coeficiente de coparticipación de 2,95 por ciento.

¿Esto es justicia, señor presidente? ¿Esto es justicia, señores senadores? ¿Solamente vamos a tomar la brecha de la población? ¿Por qué no tomamos también la brecha del desarrollo y el índice de desocupación que nos aqueja a los jujeños? ¿Cómo vamos a hablar de integración si es una vergüenza el estado de los caminos en

mi provincia, sobre todo en el marco de la comunicación con Bolivia! Al respecto, el único esfuerzo que se ha hecho lo llevó a cabo la provincia en el primer gobierno del ingeniero Snoppek, en 1984. Pero la Nación no ha puesto un peso en los últimos años y cuando creíamos que tocábamos el cielo con las manos con los 17 millones de pesos ni siquiera hemos podido lograr que Vialidad cumpliera con aquella inversión. Así hemos tenido que pasar por los despachos como suplicantes pidiendo que saquen las licitaciones.

Por una cuestión de justicia les pido que nos apoyen y que se respeten las comunicaciones que hemos aprobado por el bien del país, y que en estos convenios se tengan en cuenta las rutas 9 y 66 para ampliar la trocha entre Jujuy y Palpalá, para que nunca más sean un madero. Esta es la solidaridad que pido.

Respeto la opinión de mi admirado amigo y colega el senador por Buenos Aires, pero pido que miremos un poco más hacia el interior. Que cuando saquemos la reforma constitucional nos olvidemos un poco de la camiseta y empecemos a trabajar con sentido de región. No lloremos; hagamos propuestas serias en conjunto y estemos dispuestos a jugarnos por nuestros pueblos postergados.

Gracias por la interrupción, señor senador.

**Sr. Presidente (Menem).** — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Genoud.** — Estaba terminando, señor presidente.

Ratifico lo manifestado por el señor senador por Jujuy cuando mencionaba el porcentaje de coparticipación. Creo que no háy que atenerse exclusivamente, como índice de referencia al de la población, sino que influyen otros factores que integran una ecuación cuyo resultado es el porcentaje que conocemos como coparticipación secundaria.

Si uno toma en cuenta esos índices de coparticipación en relación con el porcentaje que se recibe en materia de obras públicas, no tienen nada que ver. La conclusión es que ha habido un criterio político que sugestivamente beneficia a algunas provincias, no solamente en este tema sino en otros, como es el caso de Buenos Aires.

**Sr. Britos.** — ¿Me permite...?

**Sr. Genoud.** — Aquí termino; había prometido utilizar tres o cuatro minutos. Quiero terminar recordando a los señores senadores que hemos votado con observaciones parciales los proyectos de presupuesto que remitió el Poder Ejecutivo a partir de 1989; que hemos votado con observaciones parciales la Ley de Administración del Estado y controles financieros. Tam-

bién hemos aprobado un instrumento de vital importancia para la recaudación fiscal que ha logrado este gobierno, como es la ley penal tributaria.

Pero estos actos de contribución que hizo la Unión Cívica Radical para apoyar algunos aspectos de la política tributaria del gobierno no se compadecen con la impermeabilidad que demuestra todos los días el Ministerio de Economía cuando ignora muchos de los reclamos que el radicalismo realiza en todos los foros del país.

De tal modo que esperamos que el señor ministro de Economía recoja el contenido de estas exposiciones a efectos de que en el próximo presupuesto no se produzca la reiteración de las mismas objeciones y críticas que el radicalismo viene haciendo desde el '89 en adelante a la hora de discutir el presupuesto.

Para terminar voy a solicitar la incorporación en el Diario de Sesiones de una carilla y media perteneciente al señor senador Losada, si es que lo aprueba el cuerpo, y que se refiere a la interpretación del artículo 29 en lo que respecta al fondo tabacalero.

**Sr. Britos.** — Pido la palabra para un agregado.

**Sr. Solana.** — Pido la palabra para una moción reglamentaria.

**Sr. Presidente (Menem).** — Primero ha pedido la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Solana.** — ¿Me permite, señor senador?

**Sr. Britos.** — Con mucho gusto.

**Sr. Solana.** — Atento a lo avanzado de la hora y la cantidad de asuntos pendientes de acuerdo con el plan de labor aprobado, solicito que una vez votado el presupuesto pasemos a cuarto intermedio hasta mañana a las diez para continuar con el plan de labor.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Pido la palabra para referirme a esto.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Aguirre Lanari.** — He conversado con los miembros de los bloques justicialista y radical para solicitarles que luego de que se apruebe el presupuesto gastemos un minuto de su valioso tiempo, que yo considero muy respetable, en hacer una obra de justicia, que es la de aprobar sin discusión alguna —porque existe unanimidad en cuanto al dictamen de comisión— el Orden del Día N° 989, que instituye un sistema integral para los discapacitados.

Esto ya ha sido aprobado hoy en el plan de labor y pido uno o dos minutos de los señores senadores para que previamente al cuarto intermedio a que se refiere la moción del señor

senador por Neuquén, cumplamos con este acto de justicia.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Britos.** — Hace muchos años que venimos discutiendo, cuando se trata el presupuesto, sobre cómo es la distribución.

Creo que es legítimo lo que a veces solicitamos los representantes de las provincias, pero no podemos desconocer qué pasa en el cordón de la provincia de Buenos Aires, donde la mayoría de la gente de nuestras provincias ha venido a trabajar.

Creo que en esto, más que un criterio político en la distribución de este presupuesto, nuestro gobierno está aplicando un criterio que contempla la parte social.

**Sr. Presidente (Menem).** — Habiéndose concluido con la lista de oradores, corresponde proceder a la votación en general.

**Sr. Sнопek.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Sнопek.** — Señor presidente: pido la inserción de estas notas donde hemos efectuado observaciones a la comisión respectiva sobre el tema presupuestario desde hace tiempo. Incluso muchos de estos puntos han sido contemplados en el presupuesto y responden a las inquietudes de varios señores senadores del bloque.

Omitiré toda otra consideración, salvo agradecer las gestiones hechas por el señor presidente provisional del Senado para que se promulgue la ley sobre restitución del Fondo Especial del Tabaco, lo que en nombre de los senadores de mi provincia y de los de las provincias de Salta, Misiones y otras, agradezco, reitero, entrañablemente.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — Señor presidente: tenía pensado hacer un análisis del presupuesto para 1994, como habitualmente lo hago todos los años, y para referirme a aspectos puntuales como el gasto público —o el exceso del gasto público, para ser más preciso—, o la falta de eficiencia en su uso. Quería también hacer un análisis de los supuestos del presupuesto y especialmente del déficit de la balanza comercial, de la política económica del gobierno y, como también lo hago todos los años, del escaso gasto público en la provincia del Chubut.

Previendo que se podía superponer este tema, como en realidad ha ocurrido, con el análisis en la misma sesión del acuerdo pesquero con la Comunidad Económica Europea, había preparado una disertación por escrito.

Dado lo avanzado de la hora, en lugar de tomar de ella los aspectos fundamentales en una exposición, y para contribuir a facilitar este debate, solicito que se inserte a esta altura de mi exposición el trabajo que he preparado.

—El texto de la inserción es el siguiente:

Señor presidente: por tercer año consecutivo el presupuesto para 1994 llegó en término a esta Honorable Cámara. Esto es, sin duda, auspicioso pero de ninguna manera suficiente para que este instrumento de programación económica tenga toda la credibilidad que se merece.

En efecto, ¿qué puede pensar un ciudadano ante un presupuesto como el de 1993, que al poco tiempo de ser votado, fue modificado sustancialmente por el presidente de la Nación?

¿Qué importancia le puede dar un analista a un documento lleno de promesas que son susceptibles de modificarse en cualquier momento, sea cual fuere el sector afectado?

Recordará, señor presidente, que se estipuló en aquella oportunidad un recorte general del gasto público del 10 por ciento, hecho que, por otra parte, nadie sabe a ciencia cierta, si fue o no realizado.

Esa situación puso de manifiesto el excesivo optimismo con el que el gobierno realiza el presupuesto y la poca importancia que se le da a su cumplimiento. También marcó la poca atención que se le prestó a las advertencias que surgieron respecto de este tema desde la oposición.

Lamentablemente, tengo que afirmar en esta oportunidad, que en 1994 se vuelve a caer en la trampa del optimismo, que a esta altura se podría calificar de ingenuidad. El gobierno vuelve a confundir sus deseos con las verdaderas posibilidades de desarrollo que ofrece nuestra economía enmarcada en el rígido sistema de paridad fija. Más adelante me referiré a ellos.

1. *El exceso de gasto público y la falta de eficiencia en su uso*

Antes es necesario poner énfasis en la dimensión del gasto público, que en el próximo año será, según el proyecto de ley presentado, de 39.900 millones de pesos. Esto confirma uno de los elementos más controvertidos del plan de convertibilidad: un elevado gasto público, a pesar de las numerosas privatizaciones que teóricamente iban a permitir una disminución del nivel de erogaciones.

El gasto público consolidado (incluye el gasto provincial) medido en dólares constantes pasó de 41.101 millones de pesos en 1990 a 60.702 millones en 1993. Esto significa un aumento del 47,7 por ciento, siendo el registro de 1993 uno de los más elevados de los últimos treinta años. La relación gasto/PBI pasó de 33,8 al 41,1 por ciento.

En 1994, lejos de corregir esta preocupante propensión a mantener en niveles muy elevados el gasto en relación a sus posibilidades de recaudación, se confirma esta tendencia. Si se toma en cuenta que el presupuesto para el año 1993, fue reformulado con el proclamado recorte del 10 por ciento, se puede afirmar (si se cumplió con esta promesa) que no sólo el gasto público previsto para 1994 es elevado, sino que, contrariamente a lo que se anunció oficialmente, aumentó en términos reales con relación al de 1993.

Esta tendencia no se traduce lamentablemente por un aumento en la calidad de los servicios básicos que quedaron a cargo del Estado. El mayor gasto presupuestado para 1993 no mejoró la educación, ni la salud, ni redujo la pobreza, ni qué hablar de la Justicia, que vio cómo se clausuraron dos edificios, uno de los cuales simplemente porque no soportaba el peso de los expedientes que allí se guardaban.

Sucede que vemos con desagrado que nada se está haciendo para hacer más eficiente el uso del erario público. No siempre se trata de gastar más, en mucho de los casos se trata de gastar mejor, hecho que permitiría compatibilizar un aumento en la calidad de los servicios que brinda el sector público con un menor nivel de erogaciones. Lamentablemente, nada se hizo para que así sea.

Tampoco se trabajó en este presupuesto para cambiar, aunque sólo fuere ligeramente, la estructura tributaria nacional, puesto que se confirma un sistema socialmente injusto penalizando fuertemente al consumo y disminuyendo la imposición a la renta. Así, señor presidente, se les hace pagar a los más pobres mucho más que a los sectores favorecidos.

Por otra parte, no podemos dejar de alarmarnos por el costo fiscal que tendrán las últimas medidas de política económica tomadas por el ministro Cavallo.

La política tributaria apuesta a un crecimiento de los ingresos por la hipotética reducción de la evasión y por el efecto alentador que tendría una baja de impuestos sobre el sector productivo. Esto supone que los fondos del Estado serán de alrededor de 40.000 millones de pesos, lo que indica que el gobierno estima que la reforma previsional no tendrá ninguna incidencia en las cuentas fiscales.

Sin embargo, si se considera que aproximadamente el 70 por ciento de los aportantes pasará al nuevo sistema de capitalización, es legítimo preguntarse cómo compensará el Estado la pérdida de 250 millones de pesos mensuales que ya no recaudará, puesto que simultáneamente tendrá que seguir desembolsando la misma cantidad de recursos para pagarles a los jubilados.

Al respecto, no es ocioso recordar que en el caso chileno la reforma previsional se manifestó durante todo el período de transición en una creciente necesidad de financiamiento satisfecha mediante un aumento de la deuda pública.

Pero los problemas no se detiene allí: es de público conocimiento que la rebaja de aportes patronales prevista para 1994 producirá una pérdida recaudatoria de 1.000 millones de pesos. Desde el oficialismo nadie parece haber introducido ese dato al momento de establecer el nivel del gasto.

Esta situación alarmó inclusive a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, para quienes en el próximo año las cuentas fiscales tendrán un bache de por lo menos 5.000 millones de pesos.

Según el Fondo, la reforma previsional, que prevé la desafectación de las cajas estatales, implica una pérdida de algo más de 3.000 millones de pesos, la reducción de aportes patronales por unos 2.000 millones al tiempo que considera, que, tal como está planteado, el pacto fiscal también puede generar una caída en la recaudación.

En definitiva, lo que se está demostrando es que la política de *supply sider* (bajar impuestos para fomentar el desarrollo económico) puede perjudicar seriamente la performance recaudatoria del Estado nacional y que no asegura desde ningún punto de vista un crecimiento del sector productivo.

Por otra parte, dado que se abre la posibilidad de subas en las tasas internacionales de interés de corto plazo, el tema adquiere especial importancia: por cada punto que la tasa suba se estima que serán necesarias combinaciones de aumento en la recaudación y recortes de gastos del orden de los 480 millones de pesos.

Para concluir con este punto vale la pena señalar que las actuales negociaciones con el Fondo Monetario Internacional están estableciendo un nivel de superávit fiscal exorbitante que, según el secretario de programación económica, Juan Llach, no sería inferior a los 4.000 millones de dólares.

Sin juzgar aquí la capacidad negociadora de los funcionarios del Ministerio de Economía, lo menos que puede decirse es que la cifra complica aún más el ya oscuro panorama fiscal del año 1994.

Por lo expuesto, considero que sería necesario que se revisen los gastos establecidos para 1994, instrumentando simultáneamente una política tendiente a hacer más eficiente el uso del erario público.

Pero el pecado del optimismo se hace todavía más evidente a la hora de estudiar los supuestos con los que se elaboraron las cifras para 1994. Veámoslos.

## 2. Supuestos muy optimistas

Al respecto, no pasó inadvertido que el gobierno reitera el mismo error que en el presupuesto de 1993, y que en su momento, ya había denunciado: un exceso de optimismo respecto del escenario económico para el año entrante, en especial en lo referido a la tasa de crecimiento de la economía y al nivel que alcanzaría el déficit comercial.

El crecimiento estimado para el año entrante es de 6,5 por ciento. Esto supone un ingreso de capitales de alrededor de 11.500 millones de dólares para 1994.

Pero hay razones objetivas para suponer que en 1994 el escenario internacional sufrirá algunas modificaciones que reducirán los fondos susceptibles de volcarse hacia la Argentina. Así lo considera también el economista Adalberto Rodríguez Giavarini, para quien existen por lo menos cuatro razones para que ello suceda:

1. Se espera para 1994 un crecimiento del orden del 3,5 por ciento en los países de la OCDE y del 7 por ciento en los países asiáticos, hecho que implica

una mayor necesidad de financiamiento para ambos grupos de países.

2. La demanda de financiamiento de China, Rusia, Alemania del Este (la zona de Sajonia se encuentra entre las más recomendadas para inversores) aumentaría el "menú" de alternativas de inversión.

3. El proceso de privatizaciones que encaran las economías desarrolladas en los próximos dos años y que incluyen empresas de primer orden podría derivar en una modificación en los portafolios de los inversores institucionales, hoy lanzados sobre los mercados emergentes. Para cuantificar estos conceptos, basta con decir que en Europa Occidental solamente se esperan privatizaciones por 150.000 millones de dólares entre 1993 y 1998; mientras que a nivel mundial esa cifra podría duplicarse largamente.

4. La categorización de países dentro de la propia región latinoamericana sigue privilegiando como destino de inversiones a México y a Chile. La Argentina ocupa recién un tercer o cuarto lugar (en un reciente ranking, la publicación "Institutional Investor", antepone también a Colombia).

5. Las recomendaciones de los expertos internacionales indican que hay que seguir privilegiando las inversiones en las economías del sudeste asiático y en China, visto el enorme potencial de crecimiento de sus economías y el tamaño de sus mercados internos.

Estos cinco factores podrían de por sí justificar el redireccionamiento de los flujos financieros internacionales. En el caso argentino en particular hay algunas razones adicionales que deberían tenerse en cuenta pero que lamentablemente no se consideraron.

— El proceso de repatriación de capitales de argentinos susceptibles de hacerlo podría haberse agotado, considerando que se han aplicado distintos mecanismos fiscales para atraerlos. La tesis sería, en este caso, que quien no repatrió sus fondos al amparo de esas franquicias y aprovechando los altos rendimientos que ofrecían los activos locales en 1991 y 1992, no lo hará en el futuro.

— Han comenzado los pagos del servicio de los bonos Brady, lo que absorberá parte de los fondos que ingresen.

— El sector privado argentino aumentó sustancialmente su nivel de endeudamiento tanto comercial como financiero en el exterior. Ello implica que, en el futuro, parte de los nuevos créditos que se recibirán serán refinanciaciones de los vencimientos y no dinero fresco, que es el requerido para financiar el déficit comercial.

— El proceso de privatizaciones en la Argentina concluirá en 1994 y 1995, reduciendo por la misma otra fuente de ingresos de capitales. Al contrario, por la misma es posible que exista un reflujo de salida por remisión de dividendos y utilidades.

En este contexto, es lógico suponer que puedan caer el ingreso de ahorro externo. ¿Qué sucedería entonces si como lo dejan suponer ciertos estudios privados ese ingreso de capitales disminuyese a 9.600 millones?

Según el estudio Macroeconómica en este escenario alternativo, manteniendo la hipótesis de inflación combinada del 4 por ciento anual, el PBI crecería sólo 1 por ciento, al tiempo que la recaudación tributaria se de-

terioraría como consecuencia de que la disminución de la evasión no lograría compensar el efecto de la reducción de tributos ya programada ni la pérdida recaudatoria resultante de la caída del nivel de actividad.

Por su parte, el gasto público quedaría en niveles similares, puesto que, como quedó demostrado en 1993, se caracteriza por ser muy rígido a la baja.

La conjunción de estos dos hechos produciría entonces la virtual desaparición del superávit fiscal global y pondría en dificultades las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.

Simultáneamente, es obvio que, como lo he demostrado, no se podrá alcanzar las cifras de crecimiento anunciadas en este presupuesto.

### *Déficit comercial*

En el debate del presupuesto para 1993 ya había advertido esta curiosa tendencia a presentar la economía argentina como si fuera un lecho de rosas. En esa oportunidad, señor presidente, había señalado, entre otras cosas, que las cifras sobre nuestro comercio exterior eran poco realistas.

En efecto, la Ley de Presupuesto preveía que no sólo no habría déficit comercial sino que el comercio exterior argentino sería superavitario en 300 millones de pesos.

La realidad pudo más que las intenciones. Las cifras que presentó el INDEC muestran claramente que en el primer semestre del año, el déficit comercial aumentó en un 33,4 por ciento con respecto del ya abultado déficit de 1992.

Este dato resulta del aumento del 9 por ciento en la compra de bienes al exterior mientras que las exportaciones sólo lo hicieron en un 6,5 por ciento. Con este resultado los estudios privados estiman que en el mejor de los casos (valor piso) el desequilibrio comercial será del orden de los 3.000 millones de dólares.

Por eso es difícil creer que las exportaciones argentinas puedan aumentar como lo prevé el presupuesto en un 13,4 por ciento así como aparece como irrealista que el déficit sea el año que viene un 50 por ciento menos abultado que el de este año.

Basta con un dato para darse cuenta de la cruel realidad del sector exportador argentino: los sectores responsables de más del 90 por ciento de la exportación industrial argentina son:

- Petroquímica
- Siderurgia.
- Papel.
- Textil.
- Calzado.
- Aceite.
- Cuero.
- Marroquinería.
- Bienes de capital.
- Industria frigorífica.
- Caucho.

Ninguno de ellos ha inaugurado o iniciado la construcción de plantas productoras ni ha ejecutado inversiones tendientes a aumentar su capacidad exportadora,

ni anunciado la ejecución de obras de ampliación productiva.

Por el contrario:

— Todos esos sectores disminuyeron fuertemente su personal ocupado.

— La mayoría de las fábricas de esos sectores disminuyeron fuertemente sus dotaciones.

— En todos los sectores se contabilizan fábricas que cesaron definitivamente su actividad.

Por ejemplo:

— Más de 10 frigoríficos sobre un total de 35 cerraron; el último: Carcarañá, con 750 trabajadores.

— Muchos otros trabajan a capacidad reducida.

— Más de 10 plantas petroquímicas cerraron.

— Uno de los siete productores de cuero más grandes del país cerró definitivamente sus persianas.

— Desaparecieron los productores más grandes de maquinaria agrícola y cosechadoras.

— También cerró el productor más grande de calzado.

De esta manera no es sorprendente que sigamos acumulando magros resultados y que nuestras exportaciones sigan componiéndose esencialmente de productos de escaso valor agregado, como los productos primarios (cereales, hortalizas, frutas secas, animales vivos, etcétera) y las manufacturas de origen agropecuario (productos lácteos, huevos, carnes, frutas procesadas, etcétera).

Por otra parte, las estadísticas sobre nuestro comercio exterior muestran que, contrariamente a lo que se puede pensar, el ligero aumento de nuestras exportaciones no se debe a un aumento proporcional en la competitividad de nuestra economía sino al efecto de distintos acuerdos comerciales (comercio negociado) que permitieron sortear los negativos efectos del tipo de cambio y del costo argentino sobre las posibilidades de exportación de nuestra economía.

Así las cosas tampoco creo que el déficit comercial para 1994 sea de "sólo" 1.615 millones de pesos.

#### *La política económica*

Estos problemas reflejan, sin lugar a dudas, los problemas que genera la actual política económica. No hace falta recordar a esta altura el "pecado original" del plan de convertibilidad: la sobrevaluación del peso, hecho que con el paso del tiempo se agrava, así como se agravan los negativos efectos que tiene sobre nuestro comercio exterior.

Dejando de lado ese problema, que no encuentra soluciones en la cabeza del ministro de Economía, es también necesario señalar que la economía argentina se transformó gradualmente en una economía "divisa-dependiente". En efecto, es reconocido por todos que el crecimiento de nuestros productos se basó básicamente sobre un ingreso de capitales que, por definición, es cíclico.

Esos fondos tienen que compensar uno de los aspectos más preocupantes del plan económico: la escasez de ahorro interno (18 por ciento del PBI), hecho que genera enormes dificultades a los empresarios para encontrar los fondos disponibles para la inversión.

Sucede que en nuestro país existe una correlación muy fuerte entre el ahorro interno y la tasa de inver-

sión bruta interna. Ergo, la persistente disminución de la tasa de ahorro perjudica directamente uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico: la inversión. Máxime cuando ese ingreso de ahorro externo no es utilizado fundamentalmente para financiar al sector productivo sino para confirmar el sesgo pro-consumo de nuestra economía.

Por eso sería necesario que se estudien alternativas para fomentar el ahorro empresario. En las áreas privatizadas, por ejemplo, se obtuvieron importantes utilidades que podrían transformarse en ahorro apto para financiar las inversiones sectoriales. Otra forma de generar ahorro se encuentra en el sector público, siempre y cuando el gasto público esté controlado y que se fijen metas menos exigentes con el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, nada de esto se ha hecho y nuestro país, en vez de industrializarse y aprovechar esta etapa en la que el escenario internacional lo favorece, la economía argentina se dedica a financiar el consumo, lo que genera simultáneamente una mayor demanda de productos importados.

Con lo expuesto, no nos sorprendemos de que la tasa de desempleo que afecta a nuestro país alcance la dramática cifra del 10 por ciento. Y digo que es dramática puesto que, contrariamente a los países desarrollados, nuestro país no tiene ningún sistema efectivo de protección social para los desocupados.

Esto se debe, en definitiva, a la falta de una política que incentive el desarrollo, la falta de una política industrial y la falta de una política comercial exportadora. Un país que no crece en base a políticas que fomenten la producción es un país que inevitablemente lleva a la marginalidad a una parte de su población, en especial mediante el peor castigo que puede recibir un ser humano: estar impedido de acceder al trabajo.

Si además a los desocupados se le suman los subocupados, observamos que 19 de cada cien argentinos que se encuentran en la población económicamente activa no tiene trabajo o no trabajan en la medida en que lo desearan, hecho que refleja la difícil situación del mercado del trabajo y las consecuencias de esta política económica que piensa que el mercado soluciona por sí solo todos los problemas y que se olvida de que el Estado tiene todavía un rol fundamental en el desarrollo de un país como el nuestro.

Existe aquí un punto que merece una reflexión aparte: los gastos sociales. En este presupuesto el gobierno hace lisa y llanamente una manipulación de las cifras destinadas a hacer creer en la población que el gasto social se mantiene en niveles records. Esto no es así, y lamento que en este presupuesto se vuelva a utilizar la misma técnica que el año pasado.

En primer término vuelve a incorporar a las provincias ignorando el sistema federal y de independencia presupuestaria que tienen nuestros estados provinciales. También integra en el rubro gastos sociales a sectores como ciencia y técnica, que deben vincularse más al desarrollo de la economía que al gasto social.

De la misma manera, ya es tiempo que los gastos en educación sean considerados como inversión, tal como lo es la realidad.

Pero estos maquillajes no logran confundir a la población, que puede ver y medir con sus propios ojos el estado de los hospitales públicos, de las escuelas y de las universidades.

Este presupuesto, como, el del año anterior, no logrará detener el deterioro de las condiciones sociales de los sectores medios y bajos de la estructura social de nuestro pueblo. Por el contrario, va a servir para ampliar la base de la población sumergida en la pobreza. Causa verdadero escozor escuchar al presidente de la Nación negar la cruel realidad social del país y negando el crecimiento de la pobreza y de la marginalidad en nuestro país.

Estabilidad, señor presidente, no rima ni con riqueza ni con justicia social. La estabilidad sola no nos lleva a ninguna parte. Así lo demuestran países como Honduras que tienen una inflación del 6,3 por ciento, Guatemala, con 7,1 por ciento o la República Dominicana con menos de 7 por ciento de alza de precios por año pero que no crecen ni generan riquezas susceptibles de ser distribuidas equitativamente en la población.

#### *Chubut*

Quiero dejar por unos minutos mi condición de miembro informante del bloque para hablar, como siempre lo hago al analizar el presupuesto, sobre las inversiones que se hacen en mi provincia.

Con relación al presupuesto del año anterior, la inversión pública prevista en el Chubut aumentó en 5 millones de pesos, hecho que se traduce principalmente por la realización de obras en el sector vial de mi provincia, ya que a ese concepto se destinan 10 millones de pesos. Esta noticia me alegra pero, lamentablemente, no es más que la excepción que confirma la regla. La regla es que el gobierno le ha dado la espalda a las necesidades de mi provincia, a la que el plan económico en marcha ha castigado duramente, sometiéndola a un proceso de despoblación permanente que no deja de aumentar.

Le daré unos ejemplos:

Es de público conocimiento que mi provincia ostenta en la actualidad el penoso récord de tener el más alto nivel de desempleo del país; en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, el índice de desocupación alcanzó el 14,9 por ciento de la población económicamente activa.

Esta cifra no debe de haber llegado a los responsables de la elaboración de este presupuesto ya que no hay ninguna partida específica destinada a contrarrestar este fenómeno: no se invierte ni un peso en concepto de formación de los desempleados, ni en el mejoramiento del sistema educativo que como se sabe, es señalado por los especialistas como la piedra angular de la lucha en contra de la desocupación.

Tampoco el Poder Judicial verá crecer sus posibilidades de trabajo puesto que el Tesoro nacional no financia ninguna obra de ampliación ni de refacción de los edificios.

El Tesoro nacional tampoco invertirá en el INTE, ni en el mejoramiento de los sistemas agropecuarios, ni en la Administración Nacional de Aduanas ni en otro tipo de construcciones en la provincia, aparte de 853.000

pesos destinados a la construcción de 40 viviendas destinadas al personal de la Armada.

Tampoco aportará el Tesoro nacional, fondos para el mejoramiento o la correcta manutención de los parques nacionales que, como ya lo he expresado en distintos proyectos, se deterioran año a año, principalmente por la falta de fondos para su cuidado y para la investigación.

Sólo nos queda esperar ciertos créditos de organismos internacionales para poder "hacer algo" en la provincia. Sin embargo, no hay que ser profeta para vaticinar que los trabajadores seguirán abandonando la provincia tanto en el norte como en el sur; ni qué decir de lo que ocurre en la meseta, que está prácticamente despoblada, y en la cordillera, en donde las escasas industrias padecen de lleno los efectos de este plan económico centralista.

#### *Conclusión general*

Este proyecto, señor presidente, mantiene uno a uno los errores que el año pasado se habían señalado. Pero con el tiempo, las consecuencias se hacen cada vez más evidentes y alarmantes: desempleo, desaparición de industrias, déficit comercial —generado por una política comercial que no combate ni la competencia desleal ni alienta al sector exportador—, generalización de la pobreza y de la marginalidad... Esto se debe principalmente a una administración que, negando la enseñanza de la teoría y la historia económica contemporánea, le otorga al mercado facultades que no tiene. El mercado no es un dios que todo lo puede, sino un mecanismo útil para aplicar en ciertos sectores de la economía. Pero el mercado, claro está, no genera justicia social, no asegura de por sí una buena asignación de los recursos, ni asegura las igualdades de acceso a la educación y a la salud. El mercado, vale aclararlo para quienes adoptaron la fanática fe de los conversos, existe rara vez en su formulación teórica; por lo tanto el Estado tiene que estar presente cuando éste esté en disfuncionamiento o para asegurar la prestación de servicios ahí en donde el sector privado no accede, ya sea por la baja rentabilidad o por escasez de recursos.

El célebre economista liberal, Alfred Marshall, decía: "del mismo modo que una catedral es algo más que el conjunto de piedras que la constituye, del mismo modo que una persona es algo más que una serie de pensamientos y sentimientos, la vida de una sociedad es algo más que la suma de la vida de los individuos que la componen".

Así, nuevas funciones, nuevas necesidades y nuevas finalidades que no aparecen a nivel privado, me refiero a individuos y empresas, sí lo hacen cuando pasamos a la globalidad. Esa globalidad —que refleja la visión colectiva— se sitúa fuera del área del mercado y de sus leyes.

El mercado no es un mecanismo de cohesión de la sociedad, visto que la lógica colectiva y social le es ajena.

Me temo que con la deificación del mercado, la actual administración esté olvidando esta verdad. Creo que para Cavallo, una catedral es sólo un conjunto de piedras, una persona, solamente una serie de pensamien-

tos y sentimientos y que la sociedad no es más que la suma de la vida de los individuos que la integran.

Las consecuencias, ya visibles de esta concepción de la sociedad, se harán cada vez más alarmantes con el paso de los años y con la perpetuación de presupuestos que mantienen visiones conservadoras de la vida que el mundo desarrollado hace tiempo dejó de tomar en cuenta.

**Sr. Presidente (Menem).** — En primer término, se van a votar las inserciones solicitadas por los señores senadores por el Chubut, por Corrientes del bloque autonomista, por Jujuy y la que me ha solicitado el señor senador por Salta.

**Sr. Genoud.** — Solicito se incluya la inserción correspondiente al señor senador Losada.

**Sr. Presidente (Menem).** — Siguiendo un criterio que tiene fijado esta Presidencia, no corresponde efectuar la inserción cuando el legislador no está presente.

**Sr. Genoud.** — Recuerdo a la Presidencia que el señor senador Losada ha estado presente en la sesión, incluso durante el tratamiento del tema presupuestario; sólo se ausentó en el momento de la votación. De tal modo que no sé si el criterio que está exponiendo el señor presidente alcanza a aquellos senadores que estando presentes en la sesión no están en el momento de votar.

**Sr. Presidente (Menem).** — Someto a la consideración del cuerpo si se aceptan las inserciones solicitadas por los señores senadores.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Britos.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Britos.** — Simplemente quiero recordar que estos criterios los hemos analizado en más de una oportunidad. Me parece poco justo que no se nos entregue una fotocopia de lo que se va a insertar. Nosotros levantamos la mano porque somos solidarios con nuestros colegas, pero tenemos que conocer qué es lo que estamos insertando.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley de presupuesto para 1994.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración en particular. La Presidencia advierte que son 51 artículos. No sé si se va a pedir alguna votación en conjunto o si se va a votar artículo por artículo.

Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Snopek.** — Hago moción concreta de que se vote por capítulos, sin perjuicio de las reservas que se formulen en cada uno de ellos.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. de la Rúa.** — No tenemos inconvenientes en que se vote por capítulo, pero que quede constancia de que las observaciones en particular que hemos formulado en nuestras exposiciones valen también para esta votación en particular.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

**Sr. Molina.** — Señor presidente: adelanto que voy a hacer una observación cuando lleguemos al artículo 33 que creo que no tiene capítulo...

**Sr. Romero.** — Sí, tiene capítulo.

**Sr. Presidente (Menem).** — Todos los artículos tienen capítulo.

**Sr. Molina.** — Era a efectos de no demorar la votación.

—Se enuncia el capítulo I, artículos 1º a 46.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

**Sr. Solana.** — Señor presidente: muy brevemente, voy a solicitar en concreto que se rechace el artículo 33 del proyecto en consideración.

Este artículo ya ha sido observado por el señor senador por Mendoza en cuanto viola determinadas normas expresas porque trata de asegurar el cumplimiento de obligaciones que son permanentes. Pero además, es un artículo advenedizo y constituye una suerte de injerto en esta iniciativa porque tiende a ratificar acuerdos firmados por gobernadores de algunas provincias con relación a los compromisos que se les han hecho suscribir y que pertenden hacerse suscribir a otras para lo que se denomina el pacto fiscal.

Los compromisos suscritos por algunos gobernadores están siendo materia de observación y de discusión en las provincias, y, con pedido de expresas ratificaciones. En otras, como las patagónicas, hasta ahora han motivado un rechazo justificado porque realmente importan colocar a las provincias en una situación de penuria económica que no están dispuestas a soportar.

Yo no deseo insistir en los detalles que son conocidos por los señores senadores. Entonces, en concreto y por lo expuesto solicito que se vote el rechazo de este artículo.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — Señor presidente: si bien de todos modos debemos votar, adelanto que la opinión de la comisión es en el sentido de mantener este artículo.

Más allá de esto quiero precisar que aquí para nada obligamos a las provincias. Sólo decimos que para la Nación el acuerdo es ley —para la Nación— y que obliga a las provincias cuando se cumpla lo que establece el mismo pacto; esto es, que sus Legislaturas lo aprueben o convaliden. Entonces, si en las provincias que ya firmaron medio rechazo de sus Legislaturas, lo suscrito no tiene validez y en consecuencia, no las obliga a nada. Sí obliga a la Nación para el caso de que una provincia adhiera. Por supuesto no obliga a las provincias que no firmaron.

Desde el punto de vista de nuestra función de legisladores nacionales y respecto del presupuesto, en última instancia estamos protegiendo a las provincias que están de acuerdo y a aquellas cuyas Legislaturas van a convalidar el pacto porque en definitiva a través de este artículo se obliga a la Nación. Reitero que de ninguna manera perjudicamos a las que no lo firmaron ni a las que nunca van a convalidar el pacto.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro, bloque justicialista.

**Sr. Costanzo.** — Señor presidente: no comparto los argumentos expuestos por el señor senador por el Neuquén en lo que se refiere a los perjuicios que el pacto fiscal trae a la región patagónica.

Como patagónico y como rionegrino —a la inversa— estoy muy preocupado por la actitud del gobernador de mi provincia que sistemáticamente se ha negado a suscribir un pacto que a todas luces trae aparejados beneficios muy concretos para el sector productivo.

No incursionaré en la mecánica presupuestaria ni en si esta norma de carácter permanente en alguna medida puede no corresponder a las circunstancias que se plantean en el proyecto de ley de presupuesto. Pero la problemática de la Patagonia está mucho más vinculada con la forma y la administración en el caso específico de Río Negro, que sin ninguna duda encuentra falencias en su sistema financiero; pero en esto nada tiene que ver el pacto fiscal. Por el contrario, de ninguna manera está afectándose el manejo de las finanzas públicas; en todo caso, el pacto fiscal actual que se pretende sus-

cribir y el anterior han beneficiado concretamente a las provincias con incrementos, tanto en materia de coparticipación como con la transferencia y federalización de una serie de ingresos que se han logrado a través de esos acuerdos.

En este momento podemos decir que el pacto traería beneficios al sector productivo, tanto en la reducción del costo laboral y en la reducción de los impuestos como en la baja de la presión fiscal, nacional y provincial. Sin duda esto representa beneficios concretos y específicos que están perfectamente determinados.

Por otra parte, sí puedo compartir los criterios de los gobernadores patagónicos en el sentido de reclamar medidas tendientes al desarrollo de la región. Pero de ninguna manera puede afirmarse que el pacto fiscal significa condicionamientos, trabas o dificultades para nuestras provincias.

Por ello reitero que no comparto la posición del señor senador por el Neuquén. Voy a apoyar el criterio de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en el sentido de que el artículo 33 debe estar incluido en el proyecto que estamos considerando.

Además, voy a seguir insistiendo en la necesidad de que los gobernadores patagónicos suscriban cuanto antes este pacto porque, a todas luces, es beneficioso para los sectores productivos de nuestra República.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Genoud.** — Ratifico lo expuesto en su oportunidad por el señor senador de la Rúa, lo que yo complementé luego al final de mi exposición.

El pacto fiscal no debería haber entrado jamás en vigencia hasta tanto el Congreso lo hubiese sancionado como ley, de modo que posteriormente las provincias pudieran haber hecho lo propio, ratificando su contenido.

A nuestro juicio, el pacto fiscal altera sustancialmente el régimen tributario argentino. Además, si el Poder Ejecutivo hubiese deseado su ratificación luego de haberlo puesto en vigencia, al menos debería haber tenido el gesto de remitirlo al Congreso pocos días después de haberlo suscrito, con el objeto de que fuese discutido como tema específico. Tampoco procedió de esta manera.

Entonces, el Ejecutivo resuelve incorporar el pacto como artículo 33 de este proyecto; es decir, lo ingresa por la "banderola", con la intención de que sea ratificado. Este es nuestro cuestionamiento desde el punto de vista político.

Ahora bien, formulamos además un cuestionamiento de carácter formal en virtud de lo dispuesto por la Ley de Administración Finan-

ciera del Estado, cuyo artículo 20 establece, respecto de cómo debe configurarse un presupuesto, que no podrán incluirse disposiciones de carácter permanente. Sin embargo, el pacto fiscal tiene una duración de tres años porque compromete a los provincias a modificar sus sistemas tributarios hasta 1995. Más claro, agua.

**Sr. Romero.** — Prueba de que no es permanente es que se fija el plazo de 1995.

**Sr. Genoud.** — Pero el artículo 20 de la ley que mencioné establece que el cálculo de recursos y erogaciones para el ejercicio correspondiente al año presupuestario; en este caso, para 1994. En consecuencia, no puede haber disposiciones que excedan el tiempo de vigencia del propio presupuesto. Se trata de una cuestión elemental; no soy especialista en la materia, pero lo que señalo surge claramente de los textos que estamos analizando.

**Sr. Presidente (Menem).** — Ruego a los señores senadores que, si ya han hecho observaciones en particular, no vuelvan a plantearlas en este momento pues no tiene sentido dilatar el debate.

Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Snopce.** — Quiero aclarar que el Poder Ejecutivo no pretendió incluir el pacto fiscal por la "ventana", como acaba de decirse. No es así, señor presidente.

El mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se proponía ratificar el pacto fiscal suscrito en la ciudad de Buenos Aires el 12 de agosto de 1993, ingresó a la Cámara de Diputados a través del expediente 25-P-93, teniendo estado parlamentario el 31 de agosto de 1993. Es decir que fue enviado al Congreso para que se debatiera por separado.

Lo que sucedió es que la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados lo incluyó como artículo 33 del proyecto que estamos analizando y esto es lo que ha motivado esta discusión.

Con esta aclaración quería dejar a salvo cuál es la verdad de los hechos respecto del tema que se ha planteado, para evitar cualquier interpretación errónea. No le echemos siempre la culpa al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía que, respecto de este asunto, han querido hacer bien las cosas.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — Quiero solidarizarme con el pedido efectuado por el señor senador por el Neuquén pues lo considero justo.

Además, manifiesto mi disenso con los fundamentos que ha dado el señor senador por Río Negro sobre supuestos beneficios que a su criterio tendría el pacto fiscal para las provincias patagónicas. Yo opino todo lo contrario, tal cual lo ha señalado el señor senador por el Neuquén y el señor senador Genoud. En consecuencia, pienso que ese pacto no es beneficioso para las provincias patagónicas, tal como sus gobernadores, de diferente origen político, lo han señalado.

Por eso hago mío el pedido del señor senador por el Neuquén.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

**Sr. Molina.** — Señor presidente: lamento mucho esta situación. Sobre ella se ha estado conversando en el día de hoy y creo que mañana se va a llegar a un acuerdo. Sin embargo, a pedido del señor gobernador de mi provincia voy a tener que votar en contra de este artículo. Pero antes deseo hacer una reflexión.

El pacto fiscal, en definitiva, elimina el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto de sellos. Con esto pienso que el sector de la producción está satisfecho. El problema está en que nosotros, las provincias patagónicas, tenemos problemas con el gravamen a los ingresos brutos porque constituyen ingresos provinciales que se destinan fundamentalmente a las cajas de las provincias y su reemplazo es lo que estamos debatiendo con el Ministerio de Economía.

Las discusiones sobre el particular están algo demoradas. Espero que en el día de mañana fructifiquen, pero como se ha decidido tratar este proyecto hoy debo emitir mi voto. Acompaño la propuesta que hace el Ministerio de Economía en la consideración en general —incluso felicito a la gente de ese Ministerio que ha sido capaz de tener el proyecto en los plazos correspondientes— pero debo cumplir con el pedido que me hace el gobernador. Por esa razón, he solicitado autorización a mi bloque para votar en forma distinta.

En síntesis, lo único que deseo concretar es que mi voto será negativo en relación a este artículo y hago manifiesto mi anhelo de que mañana finalicen las discusiones sobre el tema y que puedan ingresar en este pacto todas las provincias patagónicas, eliminándose el impuesto a los ingresos brutos, que tanto problemas causa a la producción.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Storani.** — Yo también quiero dejar sentado mi voto negativo a este artículo que incluye el pacto federal en la ley de presupuesto.

Hasta hoy el gobierno de Córdoba se ha resistido a firmar el pacto fiscal, condicionándolo a una ley que lo apruebe. Naturalmente, la aprobación de una norma de este tipo llevaría a la discusión del proyecto, cosa que aquí no se ha hecho.

Como lo ha señalado el señor senador por Mendoza, jamás se debió haber incluido este tema en la ley de presupuesto. Ahora, la provincia de Córdoba, cuyo gobernador anunció que firmaría el pacto fiscal una vez que una ley dictada por el Congreso lo indicase, quedaría entrampada por este artículo que viene de rondón introduciendo un pacto fundamental que ha necesitado aclaraciones reiteradas por parte de diversas provincias, incluso con criterios cruzados respecto de cada región.

**Sr. Losada.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

**Sr. Losada.** — Señor presidente: deseo hacer un comentario sobre el artículo 35, que también está comprendido en este capítulo.

No sólo deseo ratificar lo que acaba de explicitar el señor senador Genoud con relación al otro artículo, sino que quiero decir también que la aprobación del artículo 35 es de enorme importancia porque hace a la economía tabacalera del país. Confiamos en el compromiso de las autoridades del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de que este artículo no será vetado con posterioridad. Ojalá se cumpla ese compromiso porque si no entraríamos otra vez en colisión con una ley que se aprobó hace muy pocos días en este Senado, referida al Fondo Especial del Tabaco.

De modo que quiero dejar sentada no solamente nuestra aprobación de este artículo sino también la confianza en el cumplimiento de la palabra del señor ministro, quien hoy ha expresado públicamente su compromiso —reitero— de que el artículo no será vetado y que se mantendrá su total vigencia, a fin de cumplir con una legítima reivindicación que hace al sector de la producción tabacalera.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — Señor presidente: respecto de este artículo, creo que no corresponde poner en duda la palabra del ministro en cuanto a que no será vetado, porque obviamente siempre se han cumplido los compromisos asumidos por

este bloque. Puede ser que alguna vez alguien se haya visto sorprendido, pero habrá sido porque no hubo compromisos.

Asimismo, la ley 19.800 está en vigencia a partir de hoy y no está vetada. Dicha norma tiene indicación expresa de cómo funciona el Fondo del Tabaco. Entonces, este artículo prácticamente podría no estar incluido aquí, aunque preferimos que lo siga estando, porque se trabajó simultáneamente sobre el presupuesto y sobre la ley 19.800.

El solo hecho de que la ley mencionada esté vigente obliga a que el Fondo citado no pueda ser distraído para otro destino.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

**Sr. Losada.** — Sin pretender seguir la polémica, quiero decir que esta preocupación que estoy expresando no es solamente de la bancada radical sino también de colegas del justicialismo, con quienes compartimos la misma inquietud. Entonces, esto de ninguna manera es una simple subvaloración y subestimación del tema, sino que lo que pasa es que el artículo 29 deja bastantes dudas, respecto de las cuales puede haber argumentos a favor y en contra, sobre si entraba en vigencia el Fondo Especial del Tabaco.

Además, bien vale la pena que el artículo 35 se mantenga para mayor tranquilidad de todos.

**Sr. Romero.** — Que se vote.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo I, artículos 1º a 46, con excepción de los artículos 5º y 33.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 5º y 33.

—Se enuncian y aprueban el capítulo II, artículo 47, y el capítulo III, artículos 48 a 50.

—El artículo 51 es de forma.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se deja constancia de que junto con la aprobación de los artículos han quedado aprobadas también las planillas anexas al proyecto.

Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Snopek.** — Es exacto lo que usted ha proclamado, señor presidente, con excepción de la planilla 9, que habla del Fondo Especial del Tabaco, que por el artículo 35 está excluido de ser considerado dentro de los aportes a "Rentas generales". Quería hacer esta aclaración porque es importante.